



historia

Crisis social y motines populares en el 1900

MARIO GARCÉS DURÁN





historia

Crisis social y motines populares en el 1900

MARIO GARCÉS DURÁN





historia

Crisis social y motines populares en el 1900

MARIO GARCÉS DURÁN



LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones

Primera edición, 2003

ISBN: 956-282-582-5

Diseño, Composición y Diagramación

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Fono: (56-2) 688 52 73 • Fax: (56-2) 696 63 88

www.lom.cl

lom@lom.cl



MARIO GARCÉS DURÁN

**Crisis social y motines populares
en el 1900**



LOM

EDICIONES

Presentación a la segunda edición

Han transcurrido más de diez años de la primera edición de este libro, que vio la luz a mediados de 1991, es decir cuando se iniciaba el proceso de transición a la democracia en Chile. Sentía, entonces, la necesidad de “no olvidar” la historia del pueblo, que junto a otros jóvenes historiadores habíamos animado en diversos “talleres de memoria” en los años ochenta. Entonces, no solo habíamos aprendido de la historia del pueblo, escuchando sus voces, sino que entendimos también que la memoria era una forma de resistir a la dictadura.

Los años transcurridos me han confirmado la necesidad de la memoria, ya que la mayor debilidad de la democracia reconquistada ha sido justamente la débil presencia del pueblo en los debates e iniciativas que debieran hacer más participativa y más igualitaria nuestra sociedad. Y si algo caracteriza el siglo XX, hasta antes del golpe, son justamente las orientaciones democráticas, no solo en la política, sino que en lo social y lo económico, que constituyeron al movimiento popular en Chile cuando se iniciaba el siglo XX.

Los años noventa, desde el punto de vista de la historiografía, han sido extremadamente productivos, de tal modo que hoy contamos con una diversidad de trabajos que dan luces sobre temas y coyunturas cruciales de la historia social y política chilena. Cuando escribí este libro, muchos de estos trabajos aun no se publicaban, razón por la cual no pudieron ser referidos. Sin embargo, recoge este trabajo las producciones de los años ochenta, y la experiencia en el campo de la Educación Popular, como en el de la docencia universitaria, me indican que aun sirve como una introducción general para el estudio de los orígenes del movimiento popular en Chile. Sobre todo para las nuevas generaciones abre una ventana al Chile popular que se forjó en la segunda mitad del siglo XIX y que se animó a luchar con energía y creatividad cuando se iniciaba el siglo XX, en medio de la cuestión social, y cuando era necesario echar las bases de una “política popular”. El siglo XX no puede ser entendido sin los caminos que recorrió esta política que se forjó primero en las bases mismas del pueblo y que

alcanzó un punto culminante en la experiencia de la Unidad Popular en los años setenta.

Introducción

Hay coyunturas especialmente inquisidoras para la historia de las sociedades. Normalmente se trata de aquellas que siguen a una ruptura o fractura histórica profunda. Tal es el caso de la coyuntura que sigue al golpe militar de 1973.

Las preguntas a la historia surgieron entonces desde diversos sitios y también desde distintos actores. En el pueblo, la mayoría de las veces fueron preguntas que convergieron en torno a la cuestión de su identidad social y política. Por ello, a fines de los setenta se multiplicaron los cursos de historia del movimiento obrero en variadas iniciativas de educación popular entre jóvenes, sindicalistas, pobladores y estudiantes universitarios. Este era un modo de afirmar la identidad popular frente a las irracionalidades del poder y la violación persistente de los derechos humanos y sociales. Pronto se hizo evidente, sin embargo, la necesidad de hurgar más en la historia popular, que no era únicamente obrera. Cada iniciativa popular que surgía, entre las mujeres, los cristianos, los pobladores se interrogaban también sobre su propia historia, que no cabía en los márgenes limitados de la historia del movimiento obrero.

Estas preguntas y estas inquietudes han sido el principal estímulo para investigar y ahondar en la historia popular buscando reconocer en ella ciertas claves que contribuyan a esclarecer sus principales derroteros, porque no habrá salidas sociales y políticas estables y relativamente satisfactorias para las mayorías populares si no se procesa nuestra historia social popular. Una historia contradictoria, atravesada por profundos conflictos económicos y sociales que aun no encuentran resoluciones adecuadas. Para quienes, justamente, han reclamado y buscado persistentemente formas más humanas y más vivibles de convivencia social.

Es que habitualmente, la vida se ve de modo distinto desde el “reverso de la

historia”. Para el pueblo, la vida, bien sabemos, no viene como un regalo. No hay estructuras económicas y sociales que aseguren de antemano las condiciones de sobrevivencia y convivencia social. La mayor parte de las veces la vida es una posibilidad que hay que labrarse con instrumentos propios, los que se heredan y los que se adquieren al hacerse socialmente.

Es por ello que las identidades sociales populares normalmente se construyen y se recrean históricamente con más fluidez y con más urgencias que la de los que participan del poder y de las estructuras económicas dominantes.

No es extraño en este sentido que en ciertos períodos históricos y para ciertos sectores del pueblo el acceder a la condición obrera haya sido un punto de llegada luego de un largo peregrinaje peonal. Tampoco es extraño que bajo otras condiciones históricas, acceder a la clase media haya constituido para ciertos sectores obreros una forma –más simbólica que real– de ascenso social. Pero justamente cuando las condiciones para la reproducción de la vida se modifican fuertemente entre los sectores populares, las identidades necesariamente se recrean y reformulan. También se modifican y enriquecen los proyectos populares que germinan desde esas identidades.

La nación chilena, en este sentido, no puede ser vista como la superposición de personajes folclóricos de ayer y de hoy. Chile tiene muchos elementos como para montar coreografías post-modernas. Pero no es post-moderno. Nuestra historia popular está plagada más bien de las más diversas formas y ensayos, simplemente, para recrear la vida y para oponerse con fuerza a las también más diversas formas de opresión y dominación. Estas fuerzas vitales que recorren nuestra historia popular nos han impedido sucumbir no solo a las tragedias naturales, sino que también a las extremas formas de sobreexplotación del trabajo y a los regímenes de fuerza.

La historia popular es una historia de iniciativas prácticas y concretas que han germinado una y otra vez: Para explotar el desierto y seguir vetas mineras

existentes o inexistentes; para hacer prosperar el campo y asegurar la sobrevivencia de unos cuantos, para emigrar a todos los sitios posibles en que alguien afirmó que era posible vivir mejor, para organizar la solidaridad y hacer frente no solo a la aflicción de un vecino del conventillo sino que para estructurar sociedades mutuales. Iniciativas también para resistir al capital y protagonizar sucesivos paros y huelgas y bajar a Iquique cuando fue necesario hablarles de frente a los empresarios y al gobierno. O quemarles a los ingleses su casa de negocios en Valparaíso, cuando no había más opciones y porque era de justicia hacerlo.

Historia también llena de proposiciones para industrializar el país y buscar convencer a los parlamentarios que debían cambiar de oficio o atender lo que efectivamente ocurría en las bases. Proposiciones para pensar la democracia desde las comunas y las regiones y no convertirla en asunto de ritos, encubrimientos y ceremonias oficiales. Proposiciones para poner en el centro del “desarrollo” las necesidades y condiciones mínimas de subsistencia de la mayoría del pueblo.

Por todo esto y mucho más, la historia social popular, particularmente la del siglo XX, se confunde con la historia política. Porque la historia popular está preñada de proyectos de transformación de la vida social que se encuentra y –las más de las veces– se desencuentra de nuestro sistema de partidos.

Por estas mismas razones, en la historia del movimiento popular chileno, la política popular ha estado siempre “condicionada” desde abajo; desde los movimientos sociales populares que en la medida que han alcanzado mayores grados de desarrollo y articulación han obligado a los partidos a tomar posiciones y a cumplir roles históricamente más eficaces.

Por ello también, en los orígenes del movimiento popular del siglo XX, fue necesario plantearse la necesidad de gestar y generar desde el movimiento social partidos políticos populares. Aquí no fue primero la implantación de una

doctrina o de un programa. Primero fue la práctica social de quienes organizaron la solidaridad y luego la resistencia a la explotación económica y social. La política vino después; el partido fue un segundo momento en la gestación de una política popular.

Esto forma parte de la tradición y de la identidad nacional. Por ello también han fracasado todos los proyectos de democracia restringidas. Simplemente porque tales proyectos son la negación del autogobierno y carecen de legitimidad social en la mayoría del pueblo.

La historia popular, en suma, más allá de todas las opresiones y alienaciones que permanentemente ha debido encarar, tiene la ventaja de su enorme capacidad para crear, para labrar, para imaginar la vida de modos y formas que el poder y la dominación ignoran. Por eso es que este acontecer nunca termina de sorprender a quienes piensan que la historia se agota en las estructuras políticas y económicas dominantes.

El trabajo de recopilación histórica que ofrecemos a continuación busca contribuir a la difusión de ciertos pasajes y sucesos de nuestra historia popular. En los primeros tres capítulos, les seguimos la pista a tres actores populares relevantes en el siglo pasado: los artesanos, los peones y los proletarios. En el primer caso, centramos nuestra atención en La Sociedad de la Igualdad y el movimiento mutualista, iniciativas ambas que comprometieron el protagonismo social y político de los artesanos en la segunda mitad del siglo XIX. En el caso de los peones insistimos en su origen, sus estrategias de sobrevivencia y su impacto en la ciudad de Santiago cuando comenzaron a arribar masivamente.

Con los obreros, a pesar de existir diversos estudios, la información respecto de los orígenes de la clase resultó ser dispersa, escasa y poco sistemática. Ello nos obligó a seguirles la pista en ciertas ramas de la producción –en la minería, la industria manufacturera y el transporte– que constituyeron verdaderas “vertientes de proletarización”. El esfuerzo arrojó por ahora, como resultado,

una visión más bien descriptiva de los primeros núcleos obreros.

En conjunto, artesanos, peones y proletarios configuraban los principales grupos populares urbanos que animaron y dieron vida a una extendida sociedad popular en las principales ciudades de nuestro país en la segunda mitad del siglo pasado. Una “sociedad” que con importantes grados de autonomía del Estado demostró una enorme capacidad para reproducir, en condiciones evidentemente adversas, sus modos y formas propias de vivir. Una “sociedad popular” que hacia 1900 enfrentó una de sus más agudas crisis históricas, cuando los caminos de subsistencia peonal se agotaban, los artesanos veían limitadas sus posibilidades de desarrollo y los obreros hacían frente a la soberbia y la indolencia de los empleadores y del Estado, que no querían ver la profundidad social que alcanzaba la crisis de la subsistencia popular.

La crisis de la sociedad popular, hacia 1900, nos llevó a indagar en la denominada “cuestión social”, que no había más posibilidad que ver, a estas alturas, en su doble manifestación. Como deterioro de las condiciones de subsistencia popular y como protesta social en contra de ese deterioro. Seguimos así en el capítulo IV los principales movimientos de protesta: en Valparaíso el año 1903, en Santiago el año 1905, en Antofagasta el año 1906 y en Iquique el año 1907. Todo un ciclo de protestas populares que pusieron en juego las capacidades de acción del movimiento popular chileno y que al mismo tiempo hicieron manifiesta la incapacidad de la élite para estructurar una respuesta adecuada a la crisis.

Finalmente, el capítulo V, sin pretender ser conclusivo, ofrece algunas pistas de reflexión en relación a las formas y los significados que fue adquiriendo la politización popular en la primera década del presente siglo.

En este trabajo hemos combinado el uso de fuentes primarias y secundarias, dando cuenta de modo importante de muchas investigaciones realizadas en los últimos años, pero que no han alcanzado, como producto de las condiciones

económicas y culturales imperantes en el país, una mayor difusión. El lector que desee profundizar en algunos de los temas tratados, encontrará la nota respectiva con la obra a que se hace referencia.

Mis agradecimientos a Marcela Segall, que participó activamente en el proceso de investigación; a Susana Mena, que revisó el texto y sugirió múltiples mejoras para su redacción final; a Fernando Ossandón por sus diversos aportes; a Pedro Milos, Gonzalo de la Maza, Fernando Castillo y Gabriel Salazar por sus valiosos comentarios y a Carolina Gutiérrez y en especial a Mercedes Acuña, que transcribieron con afecto y dedicación el texto definitivo. A CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Developpment) y ECO (Educación y Comunicaciones) que hicieron posible materialmente la investigación y a Guillermo Miranda y Juan Antonio Garcés por sus diversos y valiosos aportes.

Capítulo uno

Los artesanos: Igualdad y socorro mutuo

Donde se narran hechos muy destacados

de la historia de los artesanos de Santiago,

San Felipe y La Serena en relación

al movimiento igualitario.

De sus fundadores y de sus proyecciones

sociales y políticas.

Del movimiento mutualista, las sociedades

de socorro mutuo y sus aportes

para que surgiera una política desde

las clases populares

en Chile.

La revolución independentista de España, que recorrió América Latina en las primeras décadas del siglo XIX, en muchos aspectos quedó inconclusa. Y prácticamente en toda América quienes más resintieron aquellas tareas no realizadas por la “revolución” fueron los más pobres. Y como se ha repetido tantas veces entre nosotros, el pueblo, que fue un actor principal en la lucha, se vio luego sometido a nuevas formas de dominación.

En el caso chileno, que pese a sus particularidades no escapa a la situación antes indicada, a las luchas patrióticas por la Independencia, siguió luego una década de conflictos al interior de la élite –lo que en la historia escolar se describe como el período de anarquía– en la que se enfrentaron distintos “proyectos de país”.

En 1830, los más conservadores se impusieron con la fuerza de las armas sobre quienes aspiraban a construir un país más democrático y con un mayor protagonismo de los productores y las industrias. De quienes aspiraban también a hacer de la “ilustración” un pilar y un mecanismo fundamental del régimen democrático. Se impusieron los conservadores, para construir un Estado autoritario; garantizar de este modo las jerarquías sociales –que venían de la época colonial– y reinsertar la economía chilena en el capitalismo mundial.

La represión a los liberales progresistas fue especialmente dura luego de la derrota de Lircay y tuvo diversas manifestaciones. Sus propósitos fueron, en términos generales, impedir que los liberales (los pipiolos) tuvieran expresión política, pero al mismo tiempo disciplinar al conjunto de la sociedad. Toda esta

tarea fue parte sustantiva de la “obra” del Ministro Portales.

Uno de los sectores populares que objetivamente resistieron el “nuevo orden” conservador, en los años treinta, fue el de los artesanos. Por una parte, se les buscó disciplinar social y políticamente integrándolos a la Guardia Cívica. Por otra parte, el establecimiento del “libre comercio” los puso en una difícil situación económica al producirse un aumento de las importaciones de productos extranjeros y nuevas tarifas y aranceles. Por estas razones es que en los años cuarenta, cuando comenzó a producirse una moderada apertura política, los artesanos tuvieron motivos suficientes para participar en organizaciones sociopolíticas que demandaban mayores libertades y reclamaron también del gobierno la modificación de las tarifas arancelarias que evidentemente los perjudicaban.

Sin embargo, no fue sino hasta 1850 que los artesanos de Santiago, San Felipe y La Serena protagonizaron el mayor movimiento social y político de oposición al régimen conservador chileno. Ese año, los artesanos dieron vida a una asociación que marcaría una huella en la historia social y política nacional. Nos referimos a la Sociedad de la Igualdad.

Los artesanos, por estos años, alcanzaban a unos veinte mil en Santiago y Valparaíso y superaban los cien mil a nivel nacional. En conjunto representaban cerca del 30 de la clase trabajadora y solo eran superados en número por los peones, que constituían la mayoría de la clase popular[1].

La mayoría de los artesanos chilenos, a mediados del siglo, eran zapateros, talabarteros y curtidores, carpinteros y albañiles, sastres y sombrereros, plateros, herreros y hojalateros, tipógrafos, escoberos, almidoneros, panaderos, peluqueros y barberos.

El origen popular de los artesanos con más tradición no estaba en discusión. Hubo otros que tendieron a multiplicarse como producto del crecimiento de las ciudades (los oficios vinculados a la construcción) y otros que eran más requeridos por el consumo popular (los zapateros, los herreros, los panaderos, etc.).

Las artesanías, en realidad, desde la clase popular constituían una importante actividad productiva y una fuente también significativa de sobrevivencia para el sector popular urbano. En el quinquenio 1844-1848, el 28,4% de herramientas sobre el total de medios de producción importados, correspondieron a artesanos[2].

Los artesanos podían entonces distinguirse del sector popular más pobre y según testigos de la época, un artesano o un empleado de tienda “podía encogerse de hombros ante un peón”. O, según otro observador, los artesanos podían situarse entre la “gente decente” y el “populacho”. Según el historiador Barros Arana, finalmente, los artesanos podían distinguirse también por su afición a la lectura de los diarios y por su ilustración.

Salvo un sector de artesanos extranjeros prósperos que contaron con el apoyo oficial para instalarse en el país, los artesanos criollos producían en pequeña escala, sus productos no eran muy finos en sus terminaciones, su tecnología era más bien precaria y su situación económica, en términos generales, era poco favorable.

Las políticas oficiales, particularmente la de aranceles que estimulaba las importaciones, o la Ley de patentes que otorgaba mayores facilidades a los extranjeros, sumado a las disputas con el Municipio –en el caso de Santiago– que buscaba alejar del centro las fraguas y talleres, eran todos factores que disponían negativamente a los artesanos en relación al sistema económico y político dominante. A fines de los cuarenta, a estos hechos se agregaban los efectos de la crisis económica europea de 1848 que influía sobre la economía

nacional y se propalaban también noticias de los sucesos revolucionarios del viejo mundo (en 1848, se difundía el Manifiesto Comunista de Marx y Engels y estallaba la revolución en Francia con un movimiento obrero cada vez más activo y autónomo en sus luchas).

Una coyuntura política especialmente conflictiva, la de 1850, donde la élite se confrontó agudamente en torno al problema de la sucesión del presidente Bulnes, terminó de configurar el cuadro en donde haría su aparición en escena la Sociedad de la Igualdad.

Esta asociación popular logró convocar a un significativo número de artesanos y su mayor originalidad radicó en que por primera vez éstos se reunieron para autoorganizarse, educarse y elaborar proyectos de mejoramiento económico y social a partir de sí mismos.

La experiencia igualitaria fue, sin lugar a dudas, una causa de inquietud para la élite, por cuanto este acto de autonomía de los artesanos los hizo más visibles en una sociedad donde los sectores dominantes no veían más allá de sí mismos y de sus propios intereses y relaciones sociales.

La sociedad chilena, al promediar el siglo XIX, se hallaba en realidad lo suficientemente escindida como para que los ricos y los pobres vivieran reproduciendo sus propias culturas, sus propias formas de vida, en un rígido marco de dominación social y política.

Con todo, a estas alturas de la historia, los artesanos representaban, como ya hemos indicado, uno de los sectores laboriosos más activos en la producción de bienes y servicios en centros urbanos que venían creciendo desde los años de la Independencia.

Y corrían los últimos días de marzo, en el año de 1850, cuando un reducido grupo de santiaguinos se reunieron para sentar las bases de la Sociedad de la Igualdad. Participaron de la cita los intelectuales liberales Francisco Bilbao y Santiago Arcos; los artistas José Zapiola y Eusebio Lillo; el sombrerero Ambrosio Larrecheda y el sastre Cecilio Cerda.

La iniciativa la tomaron Arcos y Bilbao, ambos hijos de connotadas familias capitalinas y que por motivos diversos se habían encontrado en París en los días de la revolución de 1848. Allí habían intercambiado ideas y percepciones acerca de la realidad chilena y muy pronto, a su vuelta en Santiago, se propusieron constituir un núcleo que diera vida a una asociación revolucionaria. Para ello era necesario atraer a lo más destacado de los “sectores laboriosos”. Se contactaron entonces con artistas, artesanos e intelectuales con el objeto de empapar al pueblo del “germen vivificador de los buenos principios” y de realizar en Chile “una revolución pacífica, pero profunda de la sociedad”.

Arcos y Bilbao confiaban en la organización y la ilustración de las “clases obreras”. Estos factores serían la palanca fundamental para la reforma social. Bilbao, particularmente, consideraba que en estas clases “no había arraigadas ideas que zarpar, ni tradiciones, ni mezquinos intereses que vencer... allí estaba la parte más robusta del pueblo, que era necesario redimir de la ignorancia y curar de los dolores que la afligen, de las injusticias que la azotan y de las opresiones que le doblegan, impidiendo su natural desarrollo”[3].

De este modo, y de acuerdo con sus lineamientos originales, la Sociedad de la Igualdad convocó especialmente a los artesanos y trabajadores manuales que la élite comenzaba a denominar indistintamente como artesanos u obreros.

Y los convocó para emprender una acción social y política hasta cierto punto inédita en la vida política del país: producir un cambio en la sociedad a partir de

sí mismos y en función de ellos mismos. No es que antes no haya existido convocatorias políticas dirigidas a los artesanos; lo que ocurre es que todas ellas se habían inscrito simplemente en una lógica de apoyo electoral a los movimientos liberales. Por esta razón es que la principal novedad que la Sociedad de la Igualdad traía consigo fue su propósito y su intención de estimular la autoorganización, la autoeducación y el debate de proyectos de mejoramiento económico y social para los sectores populares. Por esta razón también es que Vicuña Mackenna reconoce que en el núcleo originario de la Sociedad de la Igualdad predominaban ideas “niveladoras y fundentes”, o sea igualitarias, completamente ajenas –como él mismo indica– a la política militante de aquellos años[4].

La mayor originalidad histórica de la Sociedad de la Igualdad, en consecuencia, radicó justamente en esto: en convocar a los artesanos, bajo el principio del igualitarismo, a jugar un rol histórico más protagónico en la conservadora sociedad chilena de mediados del siglo pasado. No faltaron, por este motivo las acusaciones de “rojos” o “saint-simonianos” a los igualitarios. Sin embargo, hay que reconocer también que el movimiento igualitario de los artesanos chilenos, “por la fuerza de las cosas” –como anota Vicuña Mackenna– terminó participando de lleno en la disputa partidaria que se verificó en esos años, en torno a la sucesión del presidente Bulnes.

En efecto, hacia fines de 1850, cuando se agudizó la lucha militante y de partidos, la Sociedad de la Igualdad creció más entre los liberales que entre los artesanos, tomó partido en contra de la candidatura de Manuel Montt, realizó las primeras manifestaciones públicas de que se tenga noticia y sufrió también duramente los efectos de la represión estatal.

Los primeros pasos organizativos

La primera sesión oficial de trabajo de la Sociedad de la Igualdad, que presidió Eusebio Lillo, el 14 de abril de 1850, fue más bien tranquila, "bien concurrida, pero sin discursos, ni palmoteos, ni patriotería" y pareció más la instalación de un "colegio popular" que la fundación de una "institución revolucionaria"[5].

En esta sesión inaugural se encargó a Arcos y Zapiola que elaboraran los estatutos de la asociación y por indicación de Bilbao, éstos debían comenzar con una especie de declaración de principios, que obligaba a los socios a reconocer el predominio de la razón, la soberanía popular y el amor y la fraternidad como norma moral:

"El objeto que nos proponemos es la asociación para conseguir la vida de la fraternidad en nosotros mismos en nuestras instituciones políticas y sociales, en nuestras costumbres, en nuestras creencias. Nosotros ya reunidos y que formamos el grupo No1 hemos resuelto que la Sociedad o asociación general se llame de la Igualdad. Todo socio dará su palabra de profesar los principios siguientes: Reconocer la independencia de la razón como autoridad de autoridades; profesar el principio de la soberanía del pueblo como base de toda política, y el deber y el amor de la fraternidad universal como vida moral"[6].

La estructura orgánica de la Sociedad quedó constituida por grupos, una Junta Directiva y una Asamblea General que se reuniría periódicamente los primeros y quince de cada mes.

Entre abril y octubre de 1850, la Sociedad se reunió siete veces en Asamblea General. En ellas y en los grupos se debatieron diversos proyectos de mejoramiento "obrero" y muy pronto se dio inicio a las clases y las conferencias públicas. Francisco Bilbao presentó un proyecto sobre Escuelas gratuitas y otro sobre Baños públicos e Higiene. Rudecindo Rojas abogó por un proyecto para la creación de un Banco para obreros y Santiago Arcos propuso la creación de Casas de Prenda que llevarían el nombre de "Montes de Piedad". Junto a estos proyectos se discutió también la necesidad de reformar la

Constitución y particularmente la ley electoral, que en esos años, a través del voto censitario, limitaba práctica y legalmente el ejercicio de la democracia.

Junto al debate en torno a estos proyectos, las actividades pedagógicas ocuparon la atención principal de los igualitarios. José Zapiola en sus memorias indica que en principio se había acordado establecer cinco clases: lectura, escritura, primeras operaciones de aritmética, elementos de gramática castellana y geografía. Sin embargo, en el curso de la discusión el número de asignaturas aumentó a doce: Se agregaron Historia Sagrada, Historia de Chile, Dibujo Lineal, Francés, Inglés, Música y Baile[7].

Las clases eran gratuitas tanto para los socios como para sus amigos y familiares y se realizaban por las tardes. Las diversas materias, por su parte, eran tratadas por los propios fundadores de la Sociedad: Bilbao hacía clases de filosofía Zapiola de música, Recabarren de economía política, Nicolás Villega de aritmética.

La actividad periodística tampoco estuvo ausente entre las iniciativas que promovieron los igualitarios. Eusebio Lillo tomó a su cargo la dirección del periódico, que pasaría a denominarse del mismo modo que el de los jacobinos de la revolución francesa: El Amigo del Pueblo. En su primer número, como suelen hacerlo todos los periódicos de combate, indicaba:

“Al proclamar más libertad, más justicia, se hará el acusador tenaz de los hombres que hoy estorban en Chile el movimiento social El Amigo del Pueblo viene a ser el eco de una revolución que se agita en estos instantes sobre nuestras cabezas; revolución pacífica y santa que nos dejará bienes inmensos y un horizonte político sereno y extendido”[8].

El desarrollo de la Sociedad de la Igualdad, en sus primeros meses, no fue

espectacular, pero tampoco insignificante. En abril, el número de afiliados no pasaba de un centenar. En agosto llegaba a unos seiscientos.

La lucha militante

Resultó muy difícil para la Sociedad de la Igualdad permanecer al margen del conflicto partidista que se vivía en el país, a propósito de la sucesión presidencial a la que ya hemos hecho referencia. Sin embargo, ello alejaría a los artesanos de sus propósitos más originales: producir cambios sociales mediante la autoorganización y la realización de proyectos concretos de mejoramiento económico y social.

La designación en el Ministerio de Antonio Varas, en 1850, echó prácticamente por tierra las esperanzas de los liberales de que un hombre de sus filas sucediera al presidente Bulnes. En estos años, el ejecutivo ejercía tal poder y control sobre los eventos electorales que en los hechos era mucho más decisiva la designación del candidato que la elección misma. Y el candidato era Manuel Montt, que representaba la continuidad del sistema autoritario vigente.

En este contexto, los liberales vieron en la Sociedad de la Igualdad la organización y el movimiento más consistente que oponer a la candidatura de Montt. Como reconoce Vicuña Mackenna: “En las filas de la Igualdad había sin dudas hombres inteligentes y de prestigio... que abrigaban el deseo y la esperanza vehemente de arrojar el peso de la nueva asociación en el platillo liberal”[9].

De este modo, ya en junio de 1850, la Sociedad de la Igualdad crecía más entre los jóvenes liberales que entre los artesanos, a pesar de las resistencias que ello

provocaba entre un sector de los artesanos. El hecho es que en la práctica, en las sesiones generales, hacia mediados de año, podía ya fácilmente distinguirse a los hijos de connotadas familias así como también a parlamentarios liberales que habían solicitado su calidad de socios en la organización.

A propósito de las resistencias que provocaba entre los artesanos la mayor intervención de los liberales, José Zapiola insiste en que las cuestiones políticas se abordaban más por provocación de los enemigos de la Sociedad que por voluntad propia y que los temas políticos “solo eran tratados en cuanto tenían relación con las cuestiones sociales”[10].

Con todo el hecho que terminó por precipitar los acontecimientos lo constituyó una provocación montada por la policía la noche del 19 de agosto de 1850.

Culminaba esa noche una sesión general de la Sociedad, cuando un grupo de policías acompañado de personas reclutadas en los barrios pobres, asaltó el local de los igualitarios. En el ataque, según testigos del suceso, los policías rompieron los huesos de algunos, magullaron a unos cuantos y detuvieron a otros para enviarlos a prisión[11].

La agresión, sin embargo, fracasó en toda la línea ya que otro grupo de policías que no estaba al tanto de la provocación ingresó también al local y arrestó a algunos de los asaltantes. Por otra parte, el hecho provocó tal revuelo por la evidente participación del gobierno que la Sociedad de la Igualdad que contaba con unos seiscientos miembros, triplicó sus adherentes en los días siguientes. Fue necesario entonces arrendar un nuevo local capaz de albergar las concurridas sesiones generales.

La Sociedad de la Igualdad entró entonces de lleno en la lucha política, tanto en el debate parlamentario como en la prensa y en las manifestaciones públicas.

El gobierno por su parte no pudo oponer a los igualitarios una movilización social de semejante envergadura. Recurrió entonces, primero a la represión administrativa y luego a la represión material directa con el objeto de suprimir la Sociedad de la Igualdad.

En el mes de octubre de 1850, la Intendencia dictó un bando mediante el cual prohibía las manifestaciones públicas (“pasearse ocupando la calle pública”) luego de las sesiones generales de la Sociedad de la Igualdad. Ordenaba, al mismo tiempo, que tales sesiones debían ser públicas “sin excepción de personas que se presentasen y pidiesen su libre entrada a las puertas”.

Los igualitarios protestaron alegando que el gobierno violaba sus derechos de asociación. Sin embargo, en la siguiente manifestación pública, la Intendencia impuso multas a las personas que habían participado en un desfile y procedió a la detención de quienes se negaron a pagar. Estos hechos, aunque aparentemente de escasa significación, no harían otra cosa que agudizar el conflicto entre la oposición y el gobierno. El gobierno, en verdad temía que se pudiera arribar a una situación revolucionaria: desconfiaba de la lealtad de las fuerzas militares y de la agitación social y política que comprometía tanto a un sector de élite como a los artesanos.

La oposición, por su parte, se veía favorecida por la agitación pública en la medida que ésta le permitía hacer más visible su descontento frente a la nominación del candidato oficial Manuel Montt. En este contexto, en su última Sesión General, la Sociedad de la Igualdad aprobó el siguiente voto político.

“La Sociedad de la Igualdad rechaza la candidatura de Montt, porque representa los estados de sitio, las deportaciones, los destierros, los tribunales militares, la corrupción, el asesinato del pueblo, el tormento en los procesos de la justicia criminal, la ley de imprenta, la usura, la represión en todas las cosas a que pueda

extenderse con perjuicio de la asociación“[12].

San Felipe: El pretexto para la represión

El pretexto para la represión directa en contra de la Sociedad de la Igualdad la dieron los sucesos de San Felipe. En esta ciudad se había constituido una asociación semejante a la de Santiago en un contexto de viejas animosidades entre liberales y conservadores.

El martes 5 de noviembre, según nos relata Benjamín Vicuña Mackenna, se encontraba reunida la Sociedad de la Igualdad de San Felipe y tenían en la puerta de su sede un estandarte que decía: “Respeto a la ley, valor contra la arbitrariedad”. El Intendente subrogante consideró esta proclama como ofensiva en contra del gobierno y mandó al Comandante de Policía que retirara el estandarte “por la razón o por la fuerza”.

Los igualitarios protestaron y por tal razón el socio capitán Ramón Lara fue enviado a prisión. Intervino entonces el abogado Benigno Caldera, quien luego de intentar dialogar con el Intendente y también con el pueblo, corrió la misma suerte que Lara. Considerando estas dos detenciones como arbitrarias, cundió entre los igualitarios la indignación y las emprendieron contra la casa del Intendente. Este se protegió con 16 policías y luego de alguna vacilación les ordenó hacer fuego. Sin embargo, los policías no dispararon en contra del pueblo y “rindieron sus armas”

En medio de la confusión y los golpes, el Intendente recibió un bayonetazo en una pierna y fue, por cierto, inmediatamente destituido de su cargo. Reunido luego el Cabildo, nombró a una Junta Directiva para que se hiciera cargo del

poder y lo entregara, a su momento, a la “autoridad legítima”.

La respuesta del gobierno central no se hizo esperar. De vuelta el Intendente titular, más dos escuadrones de Los Andes, se negaron a dialogar y escuchar razones y, según estableció más tarde el informe oficial, fueron detenidos “los principales cabecillas del motín”.

Apenas conocidos los sucesos de San Felipe, el gobierno en Santiago decretó el estado de sitio y la supresión de la Sociedad de la Igualdad. Alegó en su favor – el gobierno– que existían evidentes conexiones entre una y otra asociación y que se hallaba amenazado el orden y la autoridad. A las declaraciones oficiales le siguió rápidamente la represión: Bilbao debió pasar a la clandestinidad y meses después, al igual que Arcos, tomar el camino del exilio; los obreros y artesanos más comprometidos en la Sociedad de la Igualdad fueron arrestados y separados de sus cargos aquellos que eran miembros de la Guardia.

El Ministro Antonio Varas estableció luego un verdadero juicio sobre la experiencia igualitaria en su Informe al Presidente de la República, en el que justificaba la dictación del estado de sitio del siguiente modo:

“Imitando ejemplos recientes de otros países, se creó y organizó un club bajo el nombre de Sociedad de la Igualdad, que se dividió en grupos con sus jefes... En las reuniones de estos clubes se hacen predicaciones subversivas, se explotan la ignorancia y las malas pasiones de la clase poco acomodada. Los sufrimientos inseparables de los que viven del trabajo de sus manos, y aun los que tienen su origen en la condición misma del hombre, se han exacerbado para perturbar los espíritus e incitar odios... Dar unidad de acción y sistematizar la insurrección, siguiendo el ejemplo dado recientemente por la Francia, parece el pensamiento que ha presidido a la organización de los grupos. De reuniones aisladas se ha pasado a reuniones generales, de noche a reuniones a la luz del día... La Sociedad de la Igualdad se ha convertido en un foco de insurrección, donde los afiliados se alientan para cuando llegue el momento de obrar, y donde se

aleccionan y organizan para la acción...”[13].

Y respecto de los sucesos de San Felipe, para el Ministro no existían dudas de que se trataba de un movimiento coordinado:

“...el club de la igualdad había, entretanto, extendido sus ramificaciones al departamento de San Felipe. Afiliados en el club de Santiago y a su amparo, establecieron el club de San Felipe, bajo las mismas bases y con el mismo propósito”.

Para la oposición liberal, sin embargo, no existía el grado de coordinación que supuso el gobierno. Había, claro está, una similitud de ideales e intereses, pero los sucesos de San Felipe eran más bien el resultado del clima de agitación política que se venía viviendo desde el nombramiento de Antonio Varas, que el inicio de una virtual insurrección.

El movimiento militar, en realidad, vino después de la represión y del estado de sitio. En efecto, la supresión de la Sociedad de la Igualdad no tuvo como resultado una moderación del conflicto. Al contrario, la lucha entró en una fase distinta y bajo hegemonía liberal buscó –por la vía de un levantamiento militar– impedir la consolidación de la candidatura de Montt.

Los liberales y la frustrada salida militar

Pasado el verano de 1851, la oposición liberal se dio a la tarea de preparar “la revolución”. Para ello era necesario comprometer a un sector del ejército y al mismo tiempo contar con un apoyo popular significativo. Ambos factores, como

se verá resultaron insuficientes, frustrándose la iniciativa de los liberales.

El liderazgo del movimiento recayó en el Coronel Urriola, militar retirado y de reconocido prestigio en la tropa y en el Regimiento Valdivia, del que había sido su primer comandante.

Luego de los movimientos conspirativos previos todo quedó arreglado para que el Coronel Urriola, en la madrugada del día 20, tomara bajo su mando el control del Regimiento Valdivia. Ello transcurrió sin ningún sobresalto y sin que se produjera ningún disparo.

Con movimientos rápidos y antes que despuntara el sol, el Coronel tomó pronto posiciones en la Plaza de Armas de Santiago, al mando de sus hombres. Allí se suponía que se sumarían las fuerzas populares más otras unidades militares y que en conjunto avanzarían sobre las fuerzas leales al gobierno del General Bulnes.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ocurrió en las proporciones requeridas. El Regimiento Chacabuco –que se suponía parte del movimiento– no se sumó a la sublevación y los artesanos organizados militarmente no superaban los doscientos hombres.

Pero, más allá del poder de fuego de los sublevados, fueron más decisivos en la derrota del movimiento liberal, los errores estratégicos del Coronel así como las inconsistencias de la dirección política del movimiento. En efecto. Urriola que esperaba imponerse sobre las fuerzas de gobierno por su superioridad numérica, evitando de este modo un enfrentamiento armado de proporciones, permaneció por varias horas en la plaza, esperando engrosar sus filas. Ello dio tiempo suficiente al gobierno para impedir que el Chacabuco se sumara a la rebelión y para hacerse fuerte en La Moneda y en el Cuartel de Artillería.

Sumado a este hecho, cuando por fin se decidió el ataque al Cuartel de Artillería –ubicado en las inmediaciones del cerro Santa Lucía– el Coronel Urriola fue desplazado en el mando por la dirección política del movimiento y encontró luego la muerte en medio de la confusión. Ello, ciertamente terminó de cargar la balanza en favor de las fuerzas leales al gobierno.

La participación popular, por su parte, como ya se ha dicho fue menor a la esperada. Hubo artesanos que combatieron organizadamente bajo la dirección de sus jefes. Bilbao, por ejemplo, empleó parte importante de su clandestinidad adiestrando militarmente a un grupo de artesanos en el campo. Pero, sin dudas la mayoría popular jugó un rol más bien pasivo y secundario en el movimiento; en unos casos como espectador de las maniobras militares, en otros, avivando en las calles a las fuerzas revolucionarias.

Los jóvenes liberales se enfrentaron, de este modo, a una realidad muy distinta a la de las jomadas parisinas de la revolución de 1848. Vicuña Mackenna lo atribuyó a la “falta de convicciones profundas de los obreros”. Lastarria –un liberal más ortodoxo– a la “imbecilidad innata del bajo pueblo” como a errores en la conducción.

Solo Santiago Arcos fue más al fondo del problema, indicando que el débil apoyo popular se debió a “que sus intereses no se hallaban debidamente representados, ya que nada de lo que ofrezcan los partidos tradicionales podía atraerlos”[14].

La represión a los liberales y a los artesanos comprometidos en los sucesos del 20 de abril se hizo más intensa, luego del fracaso del levantamiento. Creció entonces el fantasma de la guerra civil, ya que vino la reacción de las provincias, verdadera retaguardia liberal. En Concepción ya se había proclamado la candidatura del General Cruz y en La Serena se verificó una verdadera

insurrección, con participación popular.

Los igualitarios y el levantamiento de La Serena

En la nortina ciudad se produjo en 1851 una situación semejante a la vivida en Santiago en los años 1850-51, en cuanto a la confluencia de los sectores liberales y populares, especialmente artesanos. La diferencia estuvo en que en La Serena la participación popular fue mucho más activa y organizada y la rebelión contra el gobierno central fue exitosa, al menos en una primera fase.

En La Serena se reproducía el conflicto político que separaba a liberales y conservadores en las principales ciudades del país. La actividad minera que se había venido desarrollando en la zona favorecía a los liberales que eran contrarios al centralismo capitalino, que se beneficiaba del impuesto sobre las exportaciones mineras. La región, además, no solo había sido la cuna de grandes riquezas –de los irarrázaval en Illapel, de los Vicuña en Vicuña, los Lambert en La Serena, los Urmeneta en Ovalle, Guayacán y Tongoy, y los Edwards en todo Coquimbo–[15] sino que también se había constituido ella un importante centro académico y cultural con la fundación del Instituto de La Serena.

El Instituto de La Serena se había creado con un programa de estudios semejante al del Instituto Nacional de Santiago y contaba con profesores contratados en el extranjero. Ello le permitía a la juventud serenense una mayor cercanía con el pensamiento liberal y romántico que provenía de Europa.

Por otra parte, se había desarrollado también la prensa política y liberales y conservadores se expresaban a través de sus respectivos periódicos La Serena y El Porvenir.

En este contexto y dada la mayoría liberal existente en la región, la candidatura de Montt fue ampliamente rechazada, de tal modo que conocidos los sucesos del 20 de abril de Santiago, de inmediato se formó en La Serena una “Sociedad Patriótica”. Su tarea principal sería apoyar la candidatura penquista del General José María de la Cruz.

La candidatura del general De la Cruz se había proclamado en la ciudad de Concepción el 17 de febrero de 1851 y representaba la opción liberal frente al candidato de gobierno Manuel Montt.

Muy pronto, además, después de fracasado el levantamiento capitalino del 20 de abril de 1851, arribaron a la nortina ciudad Benjamín Vicuña Mackenna y el hijo del libertador José Miguel Carrera –que llevaba su mismo nombre– para coordinar el movimiento liberal a nivel nacional.

Pero no solo se trató de la fundación de esta Sociedad, que según el estudio de Ruth Iturriaga[16], no logró llegar más allá de los conocidos liberales de la ciudad, sino que fue mucho más significativa todavía la constitución en la ciudad de La Serena de la Sociedad de la Igualdad:

“Cuando Nicolás Munizaga y Antonio Pinto, ricos pipiolos, organizaron una Sociedad Patriótica animada solo por el espíritu liberal y partidaria del General Cruz, no tuvieron más adherentes que los partidarios tradicionales del pipiolismo; en cambio cuando Pablo Muñoz, artesano y minero; Manuel Vidaurre, sastre; José María Covarrubias y Rafael Salinas, carpinteros, y Ríos, herrero, fundaron la Sociedad de la Igualdad, con la cooperación de los estudiantes, recibieron la adhesión de la mayoría de la población”[17].

En el mes de junio la oposición liberal triunfó en las elecciones presidenciales en La Serena. El clima de agitación política, sin embargo, no aminoró. Tanto porque los liberales acusaban al gobierno de haber cometido diversas arbitrariedades en Ovalle y Combarbalá como porque los conservadores fundaron una asociación denominada “El Faro”, desde la cual se dedicaron a hostilizar a la Sociedad de la Igualdad.

“El Faro” buscó ganar a un sector del artesanado sin mucho éxito y realizó una campaña con el objeto de suprimir la Sociedad de la Igualdad. El Intendente de la región, después de algunas vacilaciones, cedió y ordenó la disolución de los igualitarios. Acto seguido, y con el objeto de prevenir la reacción liberal y popular, solicitó el envío a la ciudad de un destacamento del Batallón de Línea Yungay.

La operación conservadora era clara. Había que modificar la correlación de fuerzas políticas en la ciudad, para lo cual era necesario recurrir al apoyo del gobierno central reforzando la presencia militar.

Sin embargo, pese a las medidas del Intendente, la Sociedad de la Igualdad continuó reuniéndose en las afueras de la ciudad –en el cerro de la Cruz– y la Sociedad Patriótica entró de lleno en la fase conspirativa.

Muy pronto, además, reuniéronse ambas sociedades –la Patriótica y la Igualitaria– bajo la conducción de José Miguel Carrera F. y Benjamín Vicuña Mackenna, entre otros, y en conjunto acordaron la insurrección.

El principal debate que sostuvieron ambas sociedades, en la fase de preparación de la insurrección, estuvo centrado en el carácter que ésta debía tener. Mientras los liberales eran partidarios de un movimiento principalmente conspirativo, los artesanos postulaban la movilización popular. Predominó la última opción,

aunque a instancias del secretario de la Intendencia –que participaba clandestinamente del movimiento– se acordó combinar “las formas de lucha”.

Y los sucesos se desarrollaron del siguiente modo: La noche del 6 de septiembre más de un centenar de artesanos se reunieron, a escasa distancia del Cuartel de Artillería, bajo la dirección de su jefe indiscutido, Pablo Muñoz. El día 7, al mediodía, el secretario de la Intendencia invitó a un almuerzo –en su residencia particular– a la oficialidad del mencionado Cuartel. A una señal del dueño de casa–en medio del banquete– los oficiales fueron sorprendidos y desarmados. En ese mismo instante Pablo Muñoz y sus hombres tomaron por asalto el Cuartel de Artillería. Un grupo de jóvenes echó al vuelo las campanas de la Catedral y se convocó al pueblo a la Plaza de Armas de la ciudad.

Una vez que la ciudad estuvo en manos de los revolucionarios, se procedió a la formación de un gobierno autónomo, encabezado por José Miguel Carrera Fontecilla, asesorado por una Junta o Consejo del Pueblo.

Entre las primeras medidas del nuevo gobierno se pueden destacar la expropiación del barco Fireflay con el que se buscó obtener armas en el Perú, la formación de milicias con artesanos, jornaleros y mineros y el envío de tropas al resto de la provincia.

El movimiento revolucionario de La Serena tuvo su contraparte en Concepción, donde los liberales tenían también importantes fuerzas que oponer al centralismo conservador. Las fuerzas del gobierno central se vieron entonces obligadas a hacer frente a una doble rebelión; por el norte y por el sur del país.

A pesar de ello, el gobierno central contó con fuerzas suficientes para hacer frente con éxito, aunque con grandes bajas, a ambas rebeliones. Primero, se definió la sureña en la batalla de Loncomilla el 8 de diciembre de 1851.

Posteriormente la rebelión nortina. Aquí, luego de una serie de batallas y escaramuzas militares, la ciudad de La Serena debió soportar un prolongado sitio. Este se inició el día 7 de noviembre con el bombardeo de la ciudad y culminó solo el 31 de diciembre de 1851 con la entrada de las fuerzas gobiernistas en La Serena.

De este modo, como se ha visto, el movimiento igualitario de los artesanos chilenos estuvo fuertemente vinculado a los sucesos revolucionarios, que conmovieron al país en 1851. Ello, particularmente en Santiago, San Felipe y La Serena.

Por otra parte, no es menos cierto también, que las iniciativas de los artesanos encaminadas a crear nuevas sociedades igualitarias se reprodujeron más tarde en otros lugares del país.

Hernán Ramírez reconoce seis experiencias organizativas, que recogieron años más tarde, la tradición igualitaria. El Club de La Opinión de Valparaíso, fundado en 1858 donde según El Ciudadano, Periódico del Pueblo, las clases obreras “respiraron por primera vez el aire de la filosofía y tuvieron sospecha de su dignidad e importancia”, la Sociedad Escuela Republicana de Vallenar, fundada en 1863. En 1864, la Sociedad Unión Republicana del Pueblo, fundada en Santiago por Ambrosio Larredechea. La Sociedad de la Igualdad de Valparaíso, fundada en 1872 con el objeto de propagar el liberalismo y la instrucción primaria. La Sociedad Republicana Francisco Bilbao, también de Valparaíso, fundada en 1873 y, finalmente, la Sociedad Francisco Bilbao, que se constituyó en la ciudad de Coronel en mayo de 1878[18].

Sobre los fundadores de la Sociedad de la Igualdad y

sus proyecciones

Numerosos estudios sobre la Sociedad de la Igualdad han abundado en la personalidad de sus fundadores: Arcos y Bilbao. Todos han coincidido en establecer que se trataba de personalidades muy distintas y que expresarían, en cierto sentido, proyecciones diferentes para el movimiento.

Quizás esta diferencia proyectiva resulte hoy muy discutible y no pueda simplemente reducirse a la expresión usada por el historiador Marcelo Segall: “Bilbao quería destruir la Bastilla de la Iglesia, mientras que Arcos el régimen del inquilinato”.

Es efectivo que Bilbao enfatizó más en su combate por el predominio de la “razón” y en contra de los privilegios de la Iglesia. Y que Arcos, por su parte, centró más sus ataques en el sistema económico y social predominante en la época. Ambos, sin embargo, coincidían plenamente en la necesidad de una revolución que haría posible un cambio vigoroso en la sociedad para acercarla a la igualdad, la libertad y el ejercicio de la soberanía popular.

Para Bilbao, la sociedad de su época no era más que la proyección del pasado colonial donde el pueblo vivía sometido al poder de la Iglesia y del Estado.

“Helo allí –indicaba– que puebla las cárceles, que abastece el cadalso, que gime en los carros, que enriquece al propietario, que sobrelleva el insulto, helo allí trabajando para el cura, para el Estado y para el rico...”[19].

Allí estaban los principales enemigos que combatir: la aristocracia y el clero; el

Estado y la Iglesia. Con todo, Bilbao solía cargar más los dardos sobre la Iglesia. Por esta razón se llegó a discutir, en una ocasión, su expulsión de la Sociedad de la Igualdad. Ello ocurrió cuando publicó su ensayo “Boletines del Espíritu” en el que negaba entre otros el pecado original y la divinidad de Jesucristo. La expulsión de la Sociedad no prosperó y hubieron de salir en su defensa Arcos, Lillo, Recabarren y otros. De lo que por cierto no se libró, fue de la excomunión decretada por la Iglesia.

Santiago Arcos, en cambio, profundizó más en el análisis sociológico. En sus análisis distinguió lo que él llamó en Chile “dos castas bien definidas: los ricos y los pobres”. La pobreza, indicó además, es el estado normal en que vive la mayoría de los habitantes del país[20]. El origen de las diferencias, a juicio de Arcos, se encontraba en el problema agrario.

“...mientras dure en Chile el inquilinaje en las haciendas, mientras el peón sea esclavo en Chile... mientras subsista esa influencia omnímoda del patrón sobre las autoridades subalternas... no habrá reforma posible, no habrá gobierno sólidamente establecido”[21].

Evaluando Arcos, desde esta óptica, la participación popular en la Sociedad de la Igualdad y la jornada del 20 de abril de 1850, precisó:

“... el pobre tomará parte activa cuando la República le ofrezca terrenos, ganado, implementos de labranza, en un palabra, cuando la República le ofrezca hacerlo rico y, dado ese primer paso, le prometa hacerlo guardián de sus intereses dándole una parte de influencia en el gobierno”[22].

Siguiendo este camino, Arcos llegó a esbozar el programa de una reforma agraria, que estaba aun muy lejos de realizarse y ni siquiera ser considerada por los políticos liberales de la época. Ello le permitió también evaluar muy

críticamente a la oposición liberal de su época. Aquellos –indicó– que creen “que la revolución consiste en tomar la artillería y echar a los pícaros que están gobernando fuera de la poltrona presidencial y ministerial y gobernar ellos...”[23].

La excesiva atención que los historiadores han puesto en el pensamiento y la acción de Arcos y Bilbao encuentra sobradas razones si se tiene en cuenta el significado político que alcanzó la Sociedad de la Igualdad en la segunda mitad del siglo XIX.

Ella representó, por una parte, la primera convocatoria política que apeló a los sectores populares para conferirles un rol relevante en el cambio social. En segundo lugar, puso de manifiesto los cambios sociales que se venían produciendo en el país, estableciendo además, contactos con nuevas vertientes del pensamiento político. En tercer lugar, sus postulados democráticos fueron acogidos más tarde, parcialmente por el Partido Radical y con mayor fuerza por el Partido Demócrata, la primera agrupación política que propuso explícitamente representar los intereses de los sectores obreros y artesanos. Pero, incluso más, se puede indicar también que todas las agrupaciones políticas democráticas, de la segunda mitad del siglo pasado –incluidas las socialistas– vieron en la Sociedad de la Igualdad un hito y una referencia fundacional.

Sin embargo, no se ha reconocido con la misma atención los contenidos populares y proyectivos de la práctica de los artesanos, que se expresaron en la experiencia igualitaria de 1850-51. La historiografía recién comienza a indagar en estos aspectos, sin duda relevantes en la historia social popular. Porque más allá de la agudeza analítica de Arcos y la postura radicalmente democrática de Bilbao, lo más relevante de la experiencia de la Sociedad de la Igualdad fue que allí se debatieron proyectos de mejoramiento económico y cultural, se enfatizó en la pedagogía popular y se buscó funcionar a través de una estructura de grupos que facilitara la participación más activa de los socios. Todos estos elementos van a ser parte sustantiva, más tarde, de la cultura obrera, de lo que pronto se denominaría la “sociabilidad obrera” y del proceso mismo de

formación del movimiento popular chileno.

Y, el movimiento mutualista, de los artesanos chilenos de la segunda mitad del siglo pasado, fue el primero en recoger y dar continuidad a estos ensayos y aprendizajes de los igualitarios, perfeccionándolos y proyectándolos en la línea del uso de los recursos propios y de la creación de proyectos autosustentados de mejoramiento económico y cultural.

El movimiento obrero, por su parte, avanzado el siglo, con nuevos contenidos de carácter clasista no renunciaría tampoco a esta tradición, potenciándola, claro está, en una perspectiva socialista.

La herencia de los igualitarios, si tenemos en cuenta este conjunto de aspectos, se puede seguir entonces en un doble movimiento en la segunda mitad del siglo pasado: aquel que condujo al surgimiento de agrupaciones políticas democráticas y socialistas, y aquel que condujo a la creación de organizaciones de artesanos y obreros de carácter autónomas.

Finalmente, en la experiencia igualitaria se expresaron también tensiones que de algún modo recorren la historia posterior de la organización y la acción política de los sectores populares. En primer lugar, se puede indicar las tensiones que surgieron –tanto en Santiago como en La Serena– a propósito de la relación entre las orientaciones populares y las orientaciones liberales. En el caso de Santiago, como hemos visto, siguiendo a José Zapiola, el problema se planteaba entre el mayor énfasis que los artesanos ponían en los asuntos sociales y el énfasis más político partidista que animaba a los liberales. En el caso de La Serena, las discrepancias mayores se produjeron en relación al carácter que debía tener el levantamiento. Estas tensiones, como ya veremos, influyeron en una cierta orientación a la prescindencia en la política tradicional del movimiento mutualista.

En segundo lugar, la experiencia igualitaria –al menos en Santiago– hizo evidente los serios límites que tenía la convocatoria al cambio social ignorando a la mayoría del pueblo, que no eran artesanos. Los igualitarios de 1850 no tenían ninguna propuesta que hacer a esa “turbamulta” que como reconoció el propio Vicuña Mackenna, resultó mucho más vigorosa en la jornada del 20 de abril de 1851. El problema, claro está, estaba aun lejos de plantearse para los propios actores: los jóvenes liberales estaban demasiado imbuidos de una visión romántica e inmediata del cambio político, mientras que los artesanos hacían sus primeros ensayos en la política nacional.

Los artesanos y el movimiento mutualista

Los artesanos constituyeron el primer núcleo de trabajadores, que durante el siglo XIX crearon agrupaciones sociales y políticas propias. La primera sociedad de artesanos de que se tiene noticias se fundó en Santiago en 1829. Se sabe también de la existencia de otra agrupación, del mismo carácter, fundada ese mismo año en la ciudad de San Felipe.

Estas primeras agrupaciones, al parecer, tuvieron corta vida y no escaparon al disciplinamiento portaliano de los años treinta, que significó un severo control de la vida social y de la oposición política liberal. Muchos artesanos fueron incorporados en estos años a la Guardia Cívica bajo el mando de oficiales provenientes de la élite.

En la década del cuarenta, cuando los grupos liberales lograron reorganizarse y hacer visible su oposición al autoritarismo presidencialista, los artesanos fueron convocados a participar de las contiendas electorales. En 1845-46 se fundaron algunas sociedades. Entre ellas destacó la Sociedad de Artesanos Caupolicán, dirigida por el liberal Manuel Guerrero, activo líder más tarde de la Sociedad de la Igualdad. La Sociedad de Artesanos Caupolicán, al constituirse declaraba que

su principal propósito sería el de “instruirse recíprocamente para proceder con armonía, independencia y convicción a elegir mandatarios, que por sus opiniones democráticas hagan la felicidad del pueblo”[24].

Si bien se trataba de una convocatoria tradicional, en el sentido de apelar a los sectores populares para influir en las disputas de la élite, como indica Alberto Romero, se insinuaban ya los contenidos de un nuevo pensamiento social cuando se afirmaba, por ejemplo, la necesidad de liberar el sufragio popular “de la afrentosa tutela que lo encadenaba y envilecía”[25]. Se referían por cierto al control que ejercía el ejecutivo sobre los procesos electorales.

Los nuevos contenidos a que se refiere Romero, se expresaron con mayor fuerza, como hemos visto, en la Sociedad de la Igualdad. Fracasada esta última, un grupo de artesanos volvió sobre sus pasos para crear en 1853 la Unión Tipográfica. Victorino Laynez, Jacinto Núñez, José Martínez, Francisco Maldonado y Pedro González fundaron esta sociedad que constituye la primera agrupación de artesanos orientada por fines propios. Participaron de ella artesanos y jefes dueños de taller. Se propusieron la creación de un fondo de ayuda mutua y la creación de una escuela gratuita.

El gobierno de Montt, sin embargo, puso inmediatamente bajo sospecha a la agrupación de tipógrafos temiendo que pudiera surgir de ella un nuevo germen de oposición semejante al de 1850. Un riesgo, que como indica Marcelo Segall buscó sortear primero comprando con prebendas a su fundador, Victorino Laynez, que era empleado público. Fracasado el intento, vino la orden de disolución y la represión a los tipográficos. Se allanó su local, algunos dirigentes fueron encarcelados y Laynez relegado a la ciudad de Talca.

Dos años más tarde, en Valparaíso se fundó una asociación tipográfica semejante a la de su antecesora de Santiago. En esta última ciudad, por su parte no se logró estructurar una nueva agrupación de artesanos, sino hasta 1862. El 12 de febrero de ese año, se fundó la Sociedad Unión de Artesanos ocupando Fermín Vivaceta

el cargo de presidente y José Santos Valenzuela el de secretario.

La Sociedad Unión de Artesanos

La Sociedad Unión de Artesanos, apartándose ya de la tradición política liberal estableció que sus propósitos eran:

“el ahorro y socorro mutuo de los asociados teniendo en vista favorecer su instrucción, moralidad y bienestar”[26].

Indicó al mismo tiempo su rechazo a la política tradicional estableciendo en sus estatutos que “en ningún caso se ocupara de política en el recinto social”[27]. El artesano que quisiera ser admitido en la sociedad debería pronunciar la siguiente promesa ante el directorio:

“Prometo bajo mi palabra de honor, respetar i observar los estatutos de la Unión, trabajar por su fomento y buena armonía. Prometo renunciar al uso inmoderado de licores espirituosos i al juego de azar. Si faltare a esta promesa, consiento en perder mis derechos de socio; i sufrir el vituperio de haber faltado a mi palabra solemnemente empeñada”[28].

Destaca también en los estatutos de la Unión de Artesanos las consideraciones que se realizan respecto del deber ser del artesano, que vinculan las aspiraciones ciudadanas con sus aspiraciones de desarrollo económico:

“Seamos constantes i ganará la nación en buenos ciudadanos, i nosotros ganaremos un porvenir que está lejos de conseguirse por el espíritu de ablandamiento i egoísmo; demos el mejor ejemplo que el artesano puede dar a sus correligionarios, esto es, la economía”[29].

A seis meses de funcionamiento, la agrupación fundó la Escuela Nocturna de Artesanos. Allí Vivaceta expresó lo natural que resultaba para ellos buscar en el socorro mutuo y en “el inagotable recurso de propagar la enseñanza” un camino para obtener gradualmente el progreso y con él, el bienestar.

La Sociedad Unión de Artesanos, a diferencia de la Sociedad Tipográfica, admitía socios de diversos oficios. Y, a diferencia de la Sociedad de la Igualdad, estaba compuesta únicamente por artesanos.

Al igual que la Sociedad Unión de Artesanos, fueron surgiendo en las últimas décadas de siglo otro conjunto de sociedades mutuales. Todas ellas buscando por la vía del ahorro y la ayuda recíproca hacer frente a los problemas más apremiantes de sus socios, especialmente en aspectos económicos, de educación y salud.

Normalmente las sociedades mutuales surgían por la iniciativa de un grupo de artesanos o trabajadores que convocaban luego a sus congéneres de oficio para estructurar la organización. Se redactaban entonces los estatutos y reglamentos, se le daba un nombre a la sociedad y se podía luego gestionar la personería legal.

Se elegía un Directorio general y un Consejo de 10 a 12 miembros y se estructuraban al mismo tiempo “Comisiones de Trabajo”. Estas, como indica la historiadora Angélica Illanes, eran generalmente dos:

“una llamada Comité de Socorros subsidios que es la que se encarga de la atención, visitas y cuidado de los enfermos e inhábiles, y otra que es la Comisión de Ahorros, la que, con su tesorero fiscaliza los dineros de la sociedad, los cuales están también sujetos al control abierto de cualquier asociado. Puede haber también otro tipo de Comisiones, como un Comité de Colocación, que se encarga de conseguir empleo a los socios cesantes”[30].

Para sostener la mutual, los socios debían cancelar una cuota de inscripción que fluctuaba entre \$ 1 y \$ 2 y abonar luego un pago semanal que iba de 20 centavos a un peso. Normalmente había que hacer una etapa de “noviciado” de seis meses a un año, luego del cual el socio empezaba a gozar de los beneficios y servicios que le ofrecía la sociedad.

Entre estos servicios destacaron, por cierto los servicios médicos, que en la sociedad de la época no solo eran deficitarios, sino que dependían en gran medida de la caridad pública.

Entre otros servicios que las mutuales ofrecían a sus socios se pueden mencionar: atención médica, convenios con boticas para el despacho de medicamentos, subsidios y apoyo para los tratamientos, entierro del socio o sus familiares y ayuda económica para los familiares más la concurrencia de los socios al sepelio.

En el terreno de la salud, sin duda, que los artesanos adelantaron en el siglo pasado lo que solo sería un sistema nacional de salud pública bien avanzado en el presente siglo. Como se ha visto, los diversos servicios que éstos ofrecían a sus asociados cubrían un complejo número de iniciativas y de personal, médico, paramédico, “visitadoras”, etc.

Las “visitadoras”, por ejemplo, debían asistir a sus consocios diaria y

periódicamente, según la gravedad del enfermo, dar cuenta de su estado a la “sociedad” mutual, llevarle los subsidios hasta su domicilio si fuese necesario y atender a la familia en caso de fallecimiento[31].

Otro tipo de iniciativa de los artesanos fueron las cooperativas. Tal fue el caso, por ejemplo, de los sastres, que mediante el ahorro lograron adquirir terrenos y establecer una cooperativa de producción[32].

En otros casos, las energías se destinaron prioritariamente a la educación, fundando escuelas o generando instancias de capacitación laboral, particularmente en algunos oficios que comenzaban a vincularse a la industria. Hacia fines de siglo, los artesanos plantearon de diversos modos –como demanda al Estado y generando sus propias iniciativas– el problema de la débil capacitación laboral de los trabajadores chilenos. Ello, particularmente cuando la industria comenzaba a expandirse en ciudades como Santiago y Valparaíso.

En conjunto, estas diversas iniciativas de autoorganización de los artesanos para enfrentar solidariamente sus problemas de salud y educación –problemas que evidenciaban una radical ausencia de políticas estatales eficaces para enfrentarlos– permitieron a los artesanos, empleados y obreros encontrarse, reunirse periódicamente, establecer locales propios, acordar libremente compromisos entre sí; en pocas palabras, fortalecer y crear lazos más sólidos y más ricos de sociabilidad al interior del mundo popular.

Avances federativos

En el último cuarto de siglo el movimiento mutualista hizo importantes avances entre los artesanos y también entre los primeros núcleos obreros, profesores

primarios y empleados. Los gobiernos y el Estado se volvieron también más tolerantes hacia este tipo de organizaciones. De este modo, hacia 1870 se habían constituido 13 sociedades mutualistas oficialmente reconocidas. En 1880 llegaban a 39 y cuando terminaba el siglo, en 1900, eran 240 y habían alcanzado ya una forma federativa nacional: el Congreso Social Obrero.

La necesidad de federarse, de establecer convenios entre ellas y de representar sus demandas al Estado se había ya planteado varios años antes. En efecto, al menos en Santiago en 1894 se había organizado la Confederación Obrera de Sociedades Unidas, como una respuesta a la negativa del Estado para apoyar a las sociedades mutuales y para hacer también frente a los problemas de subsistencia, cada vez más críticos entre los artesanos y los obreros.

De este modo la Confederación propició la creación de un centro que:

“conociendo las necesidades de cada sociedad... trabaje por obtener las mayores facilidades en el trabajo manual, por establecer cuando ello sea posible, barrios de obreros libres de tutelaje interesado; una institución que forme fondos para el pago de arriendos de casa del socio enfermo y cree un pequeño capital a beneficio de los deudos del socio que fallezca; que trabaje por establecer, mediante el ahorro de los asociados, una Caja de Ahorros a fin de proporcionar a los socios los artículos de necesidad para la vida y elementos de trabajo...”[33].

Fermín Vivaceta ha sido considerado uno de los principales impulsores y dinamizador práctico y teórico del mutualismo. Éste, en sus escritos, abogó incansablemente en favor de la idea de “asociación” como pilar básico del movimiento mutualista:

“En nuestras manos tenemos los obreros un tesoro inagotable que no podemos usarlo aisladamente, pero que adoptando el sistema de asociación obtendremos

un cambio que produzca asombrosos resultados. La asociación comunica a los hombres el vigor civil y la fuerza moral para sobreponerse a las dificultades, y combatiendo los inconvenientes con imperturbable constancia obtendremos el seguro triunfo del trabajo sobre la miseria...

El derecho de asociación es la más preciosa joya del sistema republicano; y la Constitución política de Chile así lo considera...”[34].

Profundizando Vivaceta en los beneficios de la asociación y en las posibilidades que abría el mutualismo, se planteó la necesidad de llegar a establecer un “sistema social”, basado en la asociación y que efectivamente fuese capaz de producir la libertad, la igualdad y la fraternidad de todas las clases trabajadoras. Encontró que tal sistema debería tener su núcleo en las cooperativas, que no solo eran útiles en épocas de crisis o calamidad, sino que también en tiempos normales podrían hacer posible acercarse a los ideales antes aludidos.

Proyecciones políticas del mutualismo

La práctica asociativa de los artesanos y de los primeros núcleos de obreros, en el último cuarto de siglo pasado, permitió a un importante sector de trabajadores chilenos –el Congreso Social Obrero en 1900 declaraba contar con unos 10 mil adherentes– romper su aislamiento, hacer una experiencia práctica de democracia social y encarar exitosamente al menos parte de sus problemas más urgentes de previsión, salud y educación. Organizarse en función de sus intereses propios, por otra parte, le fue dando inevitablemente un cierto “sentido de clase” a su movimiento, sea por la oposición que ellos representaban respecto de las políticas de la élite, sea por las iniciativas y esfuerzos propios que debían desplegar para alcanzar sus objetivos de mejoramiento económico y social.

A estas alturas los artesanos ya habían tomado bastante distancia de sus primeros aliados liberales y se sentían mucho mejor expresados en el activo Partido Demócrata. Este surgió, por lo demás, en parte como desprendimiento del viejo tronco liberal, pero sobretodo como expresión de nuevos sectores sociales. Uno de estos sectores serían justamente los artesanos que ya no estaban dispuestos a dejar subordinar o relegar a segundo plano sus propias reivindicaciones en el terreno de la política.

La historiografía, que se ha preocupado de la historia popular en nuestro país, tenía, hasta hace poco, una visión bastante sesgada y limitada del mutualismo.

Hernán Ramírez sostenía, por ejemplo, que el principal límite de Vivaceta –e indirectamente del mutualismo– estaba en que éste “no vio que los males que padecían las clases laboriosas eran el resultado de una determinada conformación económico-social”. Y que del mismo modo tampoco “pudo comprender que sus instituciones, por carecer de una concepción más amplia y combativa, solo servían para resolver muy parcialmente los problemas que afectaban a reducidos grupos de trabajadores”[35].

Ramírez valora, en cambio, que estas instituciones populares hayan sido un eficaz instrumento de educación social donde “los obreros ganaban confianza en sí, aprendían a conocer las ventajas de la organización... elevaban el nivel cultural y tomaban conciencia de sus derechos que debían conquistar”.

Segall por su parte realiza un balance semejante del mutualismo. Este cumplió una labor importante “al reunir semanalmente a sus asociados, para que cambiaran ideas en las asambleas y se prepararan para la política; organizarles cursos de cultura general y técnica gratuita, e indirectamente interesarlos en la vida nacional”[36].

En suma, para ambos autores el mutualismo constituyó algo así como “una fase preparatoria” para emprender luego el movimiento obrero las tareas mayores; aquellas que pueden provenir de una “orientación más amplia y combativa” o que podían llevar a los artesanos a “interesarse en la vida nacional”. Se trata, por cierto, de una mirada a estas alturas muy sesgada del mutualismo, donde primó el juicio político, pero sobre todo el déficit de investigación histórica sobre la práctica concreta de los artesanos organizados.

De este modo, en la medida que surgen nuevos antecedentes y estudios del movimiento mutualista y de las sociedades de socorro mutuo, aparece claro que ellas representaron y experimentaron un importante proceso de autonomía social y organizativa frente a un Estado que excluía a los sectores populares de toda forma de participación social y política.

Las sociedades de socorro mutuo, como ha indicado A. Illanes, a través de su práctica lograron “expresar un acto consciente de autonomía social organizativa...; generar desde allí una identidad popular, capaz de reconocerse y autolegitimarse; desplegar desde sus asociados una importante capacidad organizativa para hacer funcionar la práctica social del ahorro, la prestación de salud y la protección familiar y social de los asociados... (y lograron también) levantar la dignidad del pueblo emancipándolo de su humillante condición de objeto de la caridad pública...”[37].

Por otra parte el movimiento mutualista dio también inicio a una verdadera tradición popular: el recurso a la organización y la autoeducación, como pilares donde afirmar sus posibilidades de cambio social. Ambos factores permitían reforzar y recrear la sociabilidad popular. Ambos factores, como históricamente se ha demostrado, constituirían también el principal recurso estratégico del movimiento popular chileno.

Por ello, estos aprendizajes y aportes del mutualismo fueron de vital importancia cuando las organizaciones populares se diversificaron y debieron efectivamente

enfrentar “tareas mayores”. Tareas que correspondieron ciertamente a otra fase del desarrollo del movimiento popular en nuestro país.

En suma, el mutualismo debe ser comprendido en su propio contexto y racionalidad histórica. Él representa, sobre todo, un momento de afirmación de autonomía popular que se jugó básicamente en la voluntad de apelar a las fuerzas y las capacidades propias para hacer frente a sus problemas económicos y sociales más apremiantes. En este sentido, representa una primera y fundamental forma de hacer “política popular”.

El mutualismo, será, de ese modo al cambiar el siglo, la base social organizativa a partir de la cual el movimiento popular organizó sus primeras protestas sociales y politizó sus demandas en una perspectiva de cambio social más radical.

[1] Romero, Luis Alberto. La Sociedad de la Igualdad. Edit. Torcuato Di Tella, B. Aires, 1978, pág. 14. Salazar, Gabriel. El movimiento popular de industrialización en Chile (1830-1885). Inédito, Santiago, 1990, pág. 7.

[2] Salazar, Gabriel. ob. cit., pág. 8.

[3] Lagos, Tulio. Bosquejo histórico del movimiento obrero. Imprenta El Esfuerzo. Santiago, 1941, pág. 12.

[4] Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia de la jornada del 20 de abril de 1851. Una batalla en las calles de Santiago. Edit. Joven, Santiago, 1878, págs. 62 y ss.

[5] Vicuña Mackenna, Benjamín. ob. cit., págs. 80 y 81.

[6] Citado por Jobet, Julio C. En Santiago Arcos y la Sociedad de la Igualdad, Edit. Cultura, Santiago, 1942, pág. 113.

[7] Zapiola, José. Recuerdos de treinta años. Imprenta Mejía, Santiago, 1902.

- [8] Periódico El Amigo del Pueblo, Santiago, 1 de abril de 1850.
- [9] Vicuña Mackenna, ob. cit., pág. 101.
- [10] Zapiola, ob. cit., pág. 50.
- [11] Romero, ob. cit., pág. 53.
- [12] Jobet, ob. cit., pág. 135.
- [13] Jobet, ob. cit., pág. 137
- [14] De la carta de Arcos a Bilbao. En Godoy, Hernán, Estructura social de Chile. Selección de textos y bibliografía, Edit. Universitaria, Santiago, 1971.
- [15] Iturriaga, Ruth. La Comuna y el sitio de La Serena en 1851. Edit. Quimantú, Santiago, 1973, pág. 23.
- [16] Iturriaga, ob. cit., en nota anterior.
- [17] Iturriaga, ob. cit., pág. 43.
- [18] Ramírez, Hernán. Historia del movimiento obrero en Chile. Edit. Lautaro, Santiago, 1956, págs. 82 y ss.
- [19] Ramírez, ob. cit., pág. 86.
- [20] Lagos, ob. cit., pág. 14.
- [21] Lagos, ob. cit., pág. 15.
- [22] Ramírez, ob. cit., pág. 90.
- [23] Lagos, ob. cit., pág 20.
- [24] Devés, Eduardo. El pensamiento de Fermín Vivaceta y el movimiento mutualista en el último cuarto del siglo XIX. Academia de Humanismo Cristiano. Círculo de Filosofía. Santiago, mayo 1980., pág. 22.
- [25] Romero, ob. cit., pág. 44.

[26] Devés, ob. cit., pág. 23.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem.

[29] Devés, ob. cit., pág. 24.

[30] Illanes, Angélica y equipo profesional: Pablo Diasques, Ana M. Parías y José M. Pozo. Historia del movimiento social y de la salud pública en Chile 1885-1920. Solidaridad, ciencia y caridad. Edit. Colectivodeatención primaria. Santiago, 1989, pag. 40.

[31] Illanes, ob. cit., pág. 44.

[32] Lagos, ob. cit., pág. 17.

[33] Illanes, ob. cit., pág. 49.

[34] Vivaceta, Fermín. Unión y fraternidad. Santiago, 1877.

[35] Ramírez, ob. cit., pág. 170.

[36] Segall, ob. cit., pág. 273.

[37] Illanes, ob. cit., pág. 39.

Capítulo dos

Los peones: La mayoría del pueblo

Donde se narra la historia de los
más pobres que, viniendo del campo,
hicieron crecer las ciudades,
probaron suerte en la minería,
las fiebres del oro y en cuanto
oficio conocieron y
practicaron.

Y que dieron vida, de este modo,
a la extendida y multifacética socie-

dad popular del siglo XIX, hasta que

la pobreza terminó de atraparlos en

los conventillos de 1900.

La ciudad crece casi diariamente

Los artesanos constituían, en la segunda mitad del siglo pasado, solo un sector de la clase popular. Los campesinos independientes, es decir cosecheros y labradores, así como los dependientes de las haciendas, es decir los inquilinos, constituían otro sector muy significativo de la clase popular. Sin embargo, la mayoría de los pobres –el “bajo pueblo” como lo denomina la historiografía tradicional– estaba constituida por jornaleros, peones o gañanes, pirquineros o buscones, huerteros, vendedores ambulantes, sirvientes, mujeres que administraban fondas o “chinganas”, lavanderas, costureras, afuerinos, bandoleros y vagabundos de todo tipo que deambulaban en busca de algún trabajo o algún medio de subsistencia.

Muchos de ellos sobrevivían en los campos chilenos, otros probaban suerte en la minería; otros hacían crecer las ciudades principales o daban origen a los pueblos y villorrios rurales. En conjunto, compartían un origen campesino, una inserción laboral inestable, reducidos ingresos y necesidades objetivas de subsistencia. De la élite y el Estado no era mucho lo que podían esperar y en consecuencia debían estar dispuestos a vérselas con variados oficios y a emprender también las más diversas estrategias de sobrevivencia.

En sucesivas oleadas, en la segunda mitad del siglo pasado, un número significativo de los más pobres se fue instalando en las principales ciudades del país. Al mismo tiempo que en el campo se agotaban sus posibilidades de empleo y de tierras propias para hacerlas producir, en Santiago, en la década de los sesenta, el crecimiento urbano alcanzó tal ritmo que una autoridad de gobierno llegó a decir que la “ciudad crecía casi diariamente”. En 1872, otra autoridad – esta vez el Intendente– hizo finalmente el diagnóstico definitivo: en la ilustre capital de la República se habían constituido, en los hechos, dos ciudades: la de los ricos y la de los pobres. Y solo el barrio sur de Santiago, muy expresivo de la ciudad popular (o bárbara como la denominó el Intendente) alcanzaba, a estas alturas, casi la misma superficie que la vieja ciudad colonial.

El proceso, en líneas generales, fue más o menos el siguiente. En los años de la Independencia, la población urbana alcanzaba solo al 10 de la población total del país. En Santiago, los pobres convivían con la élite ocupando algunos espacios de la “ciudad decente”, pero sus construcciones más típicas –los ranchos– se ubicaban en la periferia de la ciudad.

Un barrio característico de Santiago, en aquellos años, era el que se ubicaba en el sector norte: del puente Calicanto y siguiendo la ribera sur del Mapocho hacia el oeste. Un poco más al sur las chinganas que animaban la calle de San Pablo. Al otro lado del río un extendido conjunto de ranchos en el Arenal y por la Cañadilla (la actual Independencia).

El centro social popular más concurrido lo constituía la vieja Plaza del Basural, transformada luego en el Mercado Central. Allí solían reunirse vagabundos y desocupados, puesteros, abasteros y vendedores de todo tipo. Como indica Romero, aquí se podía reconocer también “la infaltable nube de vendedores de frituras caldúas y demás”. Este era en verdad “el corazón de la ciudad popular, enclavada a dos cuadras de la Plaza de Armas, una ubicación que pese a los muchos cambios que hubo en la ciudad, nunca perdería”[1].

La fisonomía de la ciudad de Santiago, sin embargo, se fue paulatinamente transformando en los años que siguen a la Independencia. Y este crecimiento se producía principalmente a expensas de los sectores populares. Como señala Gabriel Salazar, en la década de 1860, el fenómeno era ya claramente visible: las habitaciones populares aparecían y se multiplicaban por dentro y en torno a las grandes ciudades.

Si se consideran los datos censales, la cuestión no admite discusión. En efecto, ellos indican que en 1865 existían 252.522 habitaciones en todo el país. De este total, 151.262 eran “ranchos”, es decir el 59,9% de las construcciones, y 27.246 eran “cuartos”, o sea, el 9,6%. De este modo tenemos que cerca del 70% de las habitaciones que existían en el país correspondían a los sectores populares. Lo cual era altamente expresivo de la capacidad que éstos tuvieron para transformar la geografía urbana del país[2].

El crecimiento urbano de Santiago en los años sesenta comenzó a ser visto con alarma por algunas autoridades y también por la prensa. La ciudad se extendía como producto de ensanches y construcciones que daban lugar a nuevos barrios. El crecimiento de Santiago, respecto del viejo trazado colonial, se fue orientando del siguiente modo:

“Un arrabal al norte, el Arenal que se prolongaba por las calles de la Chimba, un extendido rancherío a lo largo de la ribera sur del Mapocho y un barrio al sur de la Alameda, entre las calles de San Francisco y Maestranza aproximadamente, que se prolongaba hasta el Zanjón de la Aguada y más allá aun, cuyo crecimiento era explosivo. El barrio Yungay al oeste, y un nuevo barrio suroeste, que también se organizaron y crecieron por estos años...”[3].

De los barrios populares norte y sur de la capital existen numerosos testimonios, todos ellos destacan la pobreza de su equipamiento y la ausencia de toda norma

en la regulación de calles y de servicios públicos. En verdad, éstos últimos prácticamente no llegaban hasta la ciudad popular. El periódico El Ferrocarril, por ejemplo, describe del siguiente modo una de las calles de la Chimba: “siempre la misma, el mismo empedrado pésimo, infernal... casi los más de los días pasa anegada a causa de un derrame que se forma en la acequia de Castro... En tiempos de lluvia se forman allí pantanos que impiden a los vecinos el tránsito de noche y aun de día. Agréguese a esto que no hay sereno ni alumbrado en aquella parte de la calle, y se comprenderá que si el vivir allí no manifiesta sobrado arrojo”[4].

Avanzó el siglo y los testimonios no se modificaron. De este modo, hacia 1890, el barrio de Recoleta reproducía la misma imagen descrita por El Ferrocarril a fines de los años cincuenta. Un barrio con sus calles inundadas en invierno, polvorienta en verano y con menguados servicios de alumbrado e higiene. Para estos años el barrio de Recoleta congregaba a unos sesenta mil habitantes y a los rancheríos y cuartos de la primera mitad del siglo les habían seguido los conventillos en la segunda mitad del mismo siglo. Esta fue, por lo demás, la evolución típica que habría de seguir la habitación popular.

Del barrio sur de Santiago, sin lugar a dudas, que la descripción más elocuente la realizó Benjamín Vicuña Mackenna –siendo Intendente el año 1872– y a propósito de su Plan de Transformación de la ciudad de Santiago:

“Conocido es el origen de esa ciudad completamente bárbara, injertada en la culta capital de Chile i tiene casi la misma área de lo que puede decirse forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, cristiana. Edificada sobre un terreno eriazado legado hace medio siglo por el fundador de una de nuestras más respetables familias, desde que el canal San Miguel (actual Av. 10 de Julio) comenzó a fecundar esa llanura, no se ha seguido ningún plan, no se ha establecido ningún orden, no se ha consultado una sola regla de edilidad y menos de higiene.

Arrendado todo este terreno ‘a piso’, se ha edificado en toda su área un inmenso aduar africano en que el rancho inmundo ha reemplazado a la ventilada tienda de los bárbaros, de allí ha resultado que esa parte de la población, el más considerable de nuestros barrios, situado a barlovento de la ciudad, sea solo una inmensa cloaca de infección i de vicio, de crimen i de peste, un verdadero “potrero de la muerte” como se le ha llamado con propiedad”[5].

También en este Informe encontramos testimonios de otros barrios populares. Tal es el caso de los rancheríos y conventillos de la calle San Pablo.

“...la parte más insalubre del barrio Yungay... es la parte que está comprendida entre el río y la calle San Pablo, i la acequia de Negrete i la alameda de Matucana.

Es una inmensa ranchería que más que suburbios de una ciudad, parece una toldería de indios, cuya lonjitud será como de 15 cuadras por una anchura de 5 cuadras en parte i de 3 en otras.

La mayor parte de las murallas que dan a la calle son de quinchas o están en el suelo; otros son ranchos que están abandonados, paredes desplomadas, pantanos de inmundicias, cerros de basura, las acequias se derraman por esas callejuelas tortuosas; en fin, es un cúmulo de insalubridad difícil de pintar”[6].

Del barrio de La Chimba, en el informe ya referido, se daba cuenta también de las dificultades que la Municipalidad había encontrado entre los propietarios de conventillos para tomar medidas de bien público:

“Bueno es que en toda sociedad organizada se acaten, se respeten como es

debido los derechos individuales, i entre éstos particularmente los de propiedad; pero ante la salud pública, ante la vida de un pueblo todas las consideraciones debieran dejarse de lado, todos los obstáculos desaparecer... Sufrirán así algunos intereses individuales; pues que sufran, que sucumban; no es posible, ni es humano, ni es racional que se tolere el crimen de especular con la vida de los pobres. En un conventillo son húmedas las habitaciones, carecen de luz, de aire, entran en ella las aguas de lluvia, se encuentran en un hoyo de un metro de profundidad, (como he visto muchas), son en una palabra, una verdadera, activa i poderosa causa de muerte, i no obstante es necesario respetar los derechos individuales, es preciso reverenciar la miserable especulación:

Hace cuatro años a que la Municipalidad quiso acabar con las habitaciones insalubres, i se proponía construir otras sujetas a determinadas reglas de higiene; mas, no pudo conseguir que llegase a ser lei la ordenanza que dictó con ese objeto; su buen deseo, su previsión encontraron en su camino al derecho individual. Hoi la viruela hace cuarenta víctimas diarias. No es nada todavía?...”[7].

El crecimiento de la ciudad de Santiago, ya visible en los años sesenta, en la década siguiente puso en evidencia un conjunto de problemas urbanos que requerían de urgente solución: el completo trastocamiento del plan original de la ciudad; escasez de alumbrado público y agua potable; un ineficiente servicio de recolección de basuras y de aguas servidas; una extendida red de viviendas populares pobremente equipadas y avalada por la especulación de los propietarios de sitios y conventillos. Este conjunto de problemas urbanos llevaban consigo inevitables consecuencias sociales: hacinamiento, pestes, enfermedades. También el aumento del robo y el bandidaje.

La élite comenzó entonces a inquietarse y sobre todo a sentirse amenazada por la contaminación de las aguas, las pestes y también el bandidaje. Solo la viruela, en los años 1863-64 costó la vida al 10% de los nueve mil afectados, mientras que en 1872-73, el 60% de los siete mil afectados perdieron la vida. Y en 1876 alcanzó su punto culminante: 5.700 muertes, que representaban cerca del 4% de

la población de Santiago[8].

Efectivamente los estragos provocados por las pestes y las enfermedades infecciosas actuaron como un estímulo sobre las autoridades para que comenzaran a ocuparse y tomar medidas en relación a los problemas urbanos de la capital.

Ello fue también determinante en las proposiciones que hiciera Vicuña Mackenna en 1872. En efecto, su estudio permitió un reconocimiento global de los problemas urbanos y sociales de Santiago. Al mismo tiempo, sus proposiciones constituyeron un primer esfuerzo encaminado a producir una remodelación completa de la ciudad.

Tanto en el diagnóstico como en la propuesta de remodelación de Vicuña Mackenna destacaba el reconocimiento de la ciudad de Santiago como una ciudad escindida: De una parte, la ciudad “propia”, “ilustrada”, “opulenta” y “cristiana”. De otra parte, la ciudad “bárbara”, los arrabales o “aduares africanos”; los suburbios. Una correspondía a la vieja ciudad colonial; la otra a la extendida ciudad de los pobres.

Siguiendo este razonamiento, una de las medidas propuestas en el plan de remodelación de Vicuña Mackenna, y parcialmente realizada, fue la construcción de un “camino cintura”. Ello representaba para el Intendente las siguientes ventajas:

“1o Define la ciudad estableciendo los límites propios de ésta, demarcación que hoy día forma una de sus más imperiosas necesidades, con relación a la edilidad (es decir, al pavimento, las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la seguridad, el uso del agua potable, etc.), creando la ciudad propia, sujeta a los cargos i beneficios del Municipio, i los suburbios, para los cuales debe existir un régimen

aparte, menos numeroso i menos activo.

2o Establece alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario, por medio de sus plantaciones, contra las influencias pestilentes de los arrabales.

3o Descarga los barrios centrales de exceso de tráfico, sobre todo de el de las materias i vehículos que más dañan y destruyen el pavimento y embarazan la libre circulación de las calles frecuentadas por el vecindario.

4o Crea en derredor de la ciudad una serie de paseos circulares destinados a embellecerse en breve tiempo...

5o Marca un límite apropiado a la zona en que deben establecerse las fábricas i establecimientos capaces de producir emanaciones nocivas a la salud pública.

6o Acerca entre sí todos los barrios i abrevia todas las distancias...

7o Da, por último, acceso cómodo i espacioso a diversas calles que no tienen salida i al propio tiempo, crea nuevas avenidas dirigidas a los centros de la ciudad"[9].

Junto a éstas medidas se proponía también la canalización del río Mapocho, la transformación del barrio sur, la reforma del servicio de agua potable, la creación de nuevas plazas y apertura de calles, el mejoramiento y ampliación del servicio de acequias para la recolección de aguas servidas, la reparación de la Cárcel y el Matadero, etc.

Muchas de estas acciones deberían ser realizadas por el Municipio, otras dependerían de la filantropía pública y, en general se buscaría un sistema más activo para el barrio céntrico –la ciudad propia– que para los arrabales o suburbios, o sea para la ciudad de los pobres.

Los peones: La mayoría popular

Pero, ¿quiénes eran realmente esta mayoría popular que modificaba la geografía urbana y obligaba a la élite a tomar medidas que hicieran posible algún grado de control sobre el explosivo crecimiento de la ciudad de Santiago?

Como ya hemos adelantado, al iniciar el capítulo, esta mayoría estaba constituida por huerteros, comerciantes ambulantes, sirvientes, jornaleros, lavanderas, costureras, vagabundos. Esta mayoría, que llamó la atención de literatos, censistas y viajeros, estaba constituida principalmente por los “peones” o “gañanes”, como se les denominó en el siglo pasado.

Una mayoría popular expulsada del campo por el dominio terrateniente-mercantil y que la ciudad demostró escasa capacidad para integrarlos económica y socialmente, si se considera el débil desarrollo de la industria y de la infraestructura urbana.

Una mayoría popular que quedó, de este modo, a mitad de camino: entre su pasado campesino con el que prolongó sus relaciones, y un destino proletario poco atractivo aun y que las más de las veces se hizo esperar demasiado, o simplemente no llegó. Por esta razón, los peones debieron desarrollar las más diversas estrategias de sobrevivencia tanto en las principales ciudades del país

como emigrando también a lejanas latitudes.

Las mujeres, que llegaron primero, como producto de las crisis campesinas, las guerras y la represión moral[10] establecieron chinganas, locales de comercio y diversión, y se hicieron huerteras, sirvientas de las casas, amasadoras o hiladoras.

Los hombres, por su parte, abundaron en el comercio al menudeo –los regatones–, el trabajo a jornal en las obras públicas y en cuanto oficio se les ofreciera. En términos generales, las ocupaciones peonales fueron variadas como inestables y debieron, además, hacer frente a la represión policial y municipal que se ocupaba de defender el orden y el comercio establecido.

Por otra parte, ante lo precario e inestable que resultaba el trabajo en las ciudades los peones se vieron también en la urgencia de buscar nuevos horizontes, emigrando ahora hacia países y latitudes más lejanas: A la “búsqueda de El Dorado” en California, a la construcción del ferrocarril en Perú, a las minas del norte chico, y hacia fines del siglo, a vérselas con el salitre y poblar los campamentos mineros del norte grande.

Como ha indicado Gabriel Salazar, cuando la economía campesina entró en su espiral crítica –hacia mediados del siglo XIX– fue lanzando a los hijos de los labradores a lo largo de diversos escapes de descampesinización.

“Fue en este proceso crítico donde emergió la multitudinaria figura del ‘peón-gañán’. Es por esto que a la inversa de los inquilinos y labradores independientes, que estaban definidos por el proceso de campesinización, los peones-gañanes lo estaban por el proceso opuesto de descampesinización, que durante la segunda mitad del siglo XIX iba a entroncar con el de proletarización urbano-industrial. El peonaje de este siglo no puede ser adscrito sin más, por lo

tanto, al campesinado; en rigor constituyó un grupo social con historicidad propia”[11].

Diversos factores contribuyeron para que la economía campesina nacional entrara en crisis con posterioridad a la Independencia. Entre ellos se pueden indicar las propias guerras de independencia que significaban la leva forzosa de los hombres y el abandono de mujeres en el campo (que pronto emigrarían a las ciudades); los mecanismos de deudas, que permitían a los terratenientes apropiarse de las tierras de los campesinos cuando estos no podían pagar sus préstamos acordados con altas tasas de interés; y las más diversas opresiones que ejercían sobre los campesinos (labradores independientes o inquilinos) los hacendados, los jueces, policías, párrocos, subastadores y comandantes militares[12]. Todos estos factores fueron, sin dudas, socavando y erosionando la economía campesina chilena, que había tenido su etapa ascendente durante el siglo XVIII.

Los peones –la mayor parte de ellos, jóvenes campesinos– ya no participarían entonces de proyecto colonizador alguno, ni de posibilidades de subsistencia en el campo. Su destino inevitable era “echarse al camino”, “probar suerte” e hipotéticamente ahorrar a partir de sus reducidos e inestables salarios.

El drama histórico del peonaje, según el mismo autor, se inició en el siglo XVIII cuando los hacendados “en lugar de peones asalariados, prefirieron asentar cosecheros semi-independientes (o sea, inquilinos) en sus grandes propiedades. Las familias de esos cosecheros se multiplicaron rápidamente. Los hacendados descubrieron pronto que para cubrir su demanda de brazos no tenían más que recurrir a las mismas familias de los inquilinos[13].

Las haciendas, por su parte, alcanzaron pronto su punto de saturación y se volvieron hacia adentro para expulsar los brazos excedentes. No tenía entonces sentido para el afuerino deambular de hacienda en hacienda. De este modo, los hijos de los campesinos asentados en las haciendas o en otras formas de vida

campesina, debieron buscar nuevas posibilidades laborales. Su destino, en este proceso, era su inevitable “descampesinización”.

Un destino posible para los peones, y que de hecho exploraron, fue el de la minería en el Norte Chico. Como “buscones” o pirquineros; también como dependientes de algún minero instalado en la región. En las explotaciones mayores, fueron apires y barreteros y las más de las veces debieron instalarse en reducidos “campamentos mineros”. Se trataba, sin embargo, de un mercado laboral aun reducido y el vivir en “campamento” constituía una forma más de explotación: La alimentación era escasa, los salarios reducidos y sus dueños no permitían al trabajador instalarse en el campamento con su familia. Todo lo cual, por cierto, influyó en que los peones tendieran a rechazar estas formas de “trabajo asalariado”, que más bien constituían formas “semi-esclavistas” de explotación del trabajo.

Con todo, correspondió al peonaje minero inaugurar muchas de las explotaciones mineras que luego serían apropiadas por financistas, mercaderes y prósperos capitalistas nacionales y extranjeros.

Otra alternativa de subsistencia la constituían las ciudades. Estas, como ya hemos indicado ofrecían escasas y poco atractivas posibilidades laborales. Ello, sin embargo, estimuló la búsqueda de variadas estrategias de subsistencia.

Un camino, en el que indagaron algunos, fue el allegarse a las familias de huerteros y chacareros que rodeaban las principales ciudades del país. Ellas ofrecían “albergues y amistad” y en un cierto plazo “posibilidades de arranchamiento propio”[14].

Otra forma de subsistencia la constituían los oficios y formas de trabajo más tradicionales de la ciudad. Ocupación en Obras Públicas, por ejemplo, con

salario de presidiario. Era, en realidad, habitual desde tiempos de la Colonia ocupar a vagabundos y presidiarios en la construcción de puentes, edificios públicos e iglesias. En este tipo de labores, la jornada de trabajo seguía la tradición campesina, es decir, se trabajaba de sol a sol con un espacio de tiempo para el desayuno y el almuerzo.

También el peón podía hacerse sirviente en casa de alguna familia pudiente o simplemente deambular en busca de actividad u oficio que le permitiera asegurar el mínimo para el sustento. Algunos de ellos, con suerte podían llegar a ingresar o fundar un taller propio y adquirir una ocupación y especialización en un oficio. Así crecía, como hemos visto en el capítulo anterior, el sector de artesanos populares.

Finalmente, una mayoría de peones debió optar por formas alternativas de subsistencia. Entre estas adquirió un gran desarrollo el comercio ambulante. En efecto, los ambulantes o “regatones” abundaban en el comercio de frutos del país, artículos tomados a consignación, artesanías elaboradas por ellos mismos, artículos de recolección, como leña, frutos y los más variados comestibles: pan, helados, sopaipillas, dulces, fritangas, etc. Se trataba, la mayor parte de las veces, de un comercio ilegal, pero que representaba variadas ventajas, como por ejemplo, el no estar sometidos al régimen de contribuciones del comercio establecido. Podían también adelantarse y adquirir productos del campo antes de que éstos arribaran –por la madrugada– a los mercados de la ciudad. Su éxito, finalmente, provenía sobre todo del crecimiento del mercado que representaban sus iguales, es decir, de los peones que seguían arribando a las ciudades y que, como ya hemos visto, hacían crecer los barrios populares.

Los peones en términos generales se encontraban poco o débilmente preparados para ejercer oficios calificados. Sin embargo, como reconoce Salazar, estaban dotados de flexibilidad y disposición para acometer cualquier trabajo, imaginación para crear tecnología “en el terreno”, “combinarse” entre ellos para variadas empresas y sobre todo de una gran resistencia sicofísica a la fatiga[15]. Su educación en este sentido fue eminentemente práctica y contrapuesta al

sistema nacional de educación que estaba orientada a disciplinar y “moralizar” al pueblo, más que a calificarlo para la producción y la sobrevivencia.

De este modo, en las ciudades o en la minería, el peón podía ser apir o cargador, trabajador de la construcción o jardinero, trabajador a jornal o vendedor ambulante. En suma, dependiente de las posibilidades del mercado laboral podía alternar en una variada gama de ocupaciones y oficios.

Por otra parte, subsistir en estas condiciones suponía estar en constante movimiento, de un sitio a otro, de una ciudad a otra. El trabajo había que buscarlo allí donde se presentara o, incluso, donde la imaginación peonal suponía que podía existir. Así, de modo histórico, fue surgiendo una imagen y sobre todo, una identidad popular bien definida: la del “buscavidas”, que con mucho orgullo y seguridad en sí mismo tiene que afirmar su existencia sobre la base de sus propios recursos.

Fue éste espíritu, históricamente fundado, el que llevó a muchos peones a probar suerte fuera de las fronteras nacionales. La sociedad chilena, en este sentido, fue testigo, en la segunda mitad del siglo pasado, de una masiva emigración peonal. Así lo dejó consignado, en este siglo, Pablo Neruda en su única obra de teatro Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta:

“A California, señores,

me voy, me voy;

si se mejora la suerte,

ya sabes donde estoy:

si me topo con la muerte

chileno soy”[16].

Entre los años 1839 y 1841 cerca de 400 peones emigraron a Australia; más tarde, un significativo porcentaje de los 50 mil sudamericanos que llegaron a California, atraídos por la fiebre del oro, eran chilenos:

“Pero el primero que entró

y el primero que bailó

en el nuevo paraíso

llegó de Valparaíso,

y el que bailó con ojotas

antes que nadie y ninguno

era un roto de Quillota,

y el que llegaba después

era un negro de Quilpué,

y el que se casó al llegar

venía de Vallenar

y al igual que se murió

era natural, el pobre

del norte, de Copiapó

Pero hablar de finados

no es bueno

lo que hay que dejar sentado

en este canto sereno

es que aunque nada ganó

el primero que llegó

fue un chileno”[17].

Y la emigración peonal al extranjero no terminó allí. Entre 1868 y 1875 cerca de 30 mil peones fueron enganchados al Perú, entre otros para la construcción del ferrocarril en ese país. También, ya antes de la Guerra del Pacífico, un número cercano a los diez mil había encaminado sus pasos hacia las explotaciones salitreras de Tarapacá y Antofagasta. Sobre 80 mil lo hicieron, en las décadas posteriores a la guerra. Finalmente, Chiloé y el sur de la Argentina fueron otros derroteros que siguió la emigración peonal. Entre 1870 y 1895, más de cinco mil se instalaban en Chiloé y sobre los 40 mil en Argentina.

En medio siglo, un número cercano a los 200 mil peones abandonaron el núcleo central de Chile, lo que equivalía al 20% de la población hábil y al 10% de la población total del país[18].

Sin lugar a dudas, que la masiva emigración peonal reforzó la imagen del hombre de pueblo como la de “buscavidas”, la del que se echa al camino o a recorrer los mares en busca de mejor fortuna. Neruda percibió también esta

dimensión subjetiva del peón al recrear la historia de Joaquín Murieta. Y lo expresa con mucha claridad y, por cierto a su modo, en el diálogo amoroso que Murieta entabla con su prometida; ambos en viaje hacia California:

Joaquín Murieta: Todo lo que me has dado ya era mío

y a ti mi libre condición someto

Soy un hombre sin pan ni poderío

Solo tengo un cuchillo y mi esqueleto.

Crecí sin rumbo, fui mi propio dueño

y comienzo a saber que fui tuyo

desde que comencé con este sueño:

antes no fui sino un montón de orgullo.

Teresa: Soy campesina de Coihueco arriba

llegué a esta nave para conocerte

te entregaré mi vida mientras viva

y cuando muera te daré mi muerte

(...)”[19].

Esta era, en suma, la mayoría popular peonal que exploró en la minería –por el norte y el sur del país– que pobló e hizo crecer explosivamente las ciudades y que, con una movilidad extraordinaria, no solo recorrió el país de punta a cabo, sino que también –como ya hemos visto– se vio en la obligación de probar suerte fuera de nuestras fronteras nacionales.

Esta mayoría peonal, considerada en conjunto, es decir tanto la urbana como la rural, en la segunda mitad del siglo pasado, llegó a representar aproximadamente el 60% de la clase trabajadora chilena[20].

Las condiciones laborales no se modificaron sustancialmente, para los peones, si no hasta las últimas décadas del siglo. Recién, en estos años, comenzó a hacerse notar la influencia de empresarios extranjeros y contratistas que extendieron el trabajo asalariado. También, como veremos en el capítulo siguiente, comenzó a abrirse paso en estos años una moderna industria nacional.

En el intertanto se fueron agotando o limitando las estrategias propias de sobrevivencia peonal y tanto los “enganches mineros” como la naciente industria

comprometían solo a un sector de la clase popular.

En el intertanto también, el asentamiento en las ciudades fue deteriorando la salud física de los peones y sus condiciones ambientales de vida. Se incubaba, de este modo, lo que más tarde la élite denominaría la “cuestión social”, es decir, el conjunto de problemas económicos y sociales que representarían los sectores populares urbanos y proletarios.

Y la ciudad que terminó por atrapar a los más pobres

El deterioro de la salud física y de las condiciones ambientales, como se comprenderá, fueron un resultado inevitable de la densidad del poblamiento peonal, así como la escasez de servicios que la ciudad ofrecía.

Hacia 1872, por ejemplo, solo la cuarta parte de la población de Santiago contaba con agua corriente. Vicuña Mackenna indicaba al respecto que, siendo éste un “elemento esencial después del aire”, a la fecha era un privilegio y más que eso “un monopolio”.

El alcantarillado, por su parte no se construyó hasta 1906, por lo que el viejo sistema colonial de acequias continuó prestando sus servicios. Estas solían cruzar los patios de las casas y allí se depositaban las aguas servidas y todo tipo de desperdicios que la corriente se encargaba de transportar.

Junto al deficitario servicio de agua potable, las acequias fueron señaladas, por diversas autoridades médicas y administrativas, como como uno de los principales focos infecciosos de la ciudad. El doctor Ricardo Dávila Boza, por

ejemplo, reconoció el problema del siguiente modo:

“Las acequias corren a tajo abierto por el interior de las casas i de edificios públicos de toda especie, cuarteles, hospitales, escuelas, curtiembres, etc., etc., en una extensión no inferior a cinco kilómetros dentro del recinto urbano i reciben i acarrean todos los desperdicios, basuras i aguas inmundas de los lugares por donde pasan, sin excluir los excrementos de los enfermos de afecciones eminentemente contagiosas ni las aguas con que se han lavado las ropas usadas por ellos.

Estas acequias se desbordan con inusitada frecuencia, tanto en las calles como en el interior de las casas, i de sus aguas se usa en grande escala para el riego i aun para el lavado ¿se podría inventar un sistema más perfecto i eficaz para la propagación y diseminación de los jémenes morbosos dentro del área de una ciudad?”[21].

Estos factores, sumados a las precarias condiciones de vivienda –conventillo y hacinamiento– fueron causas suficientes para que las epidemias y enfermedades ganaran terreno entre los habitantes de Santiago.

Ya hemos indicado en páginas anteriores los estragos provocados por la viruela entre los años 1863-1870. Otras causas frecuentes de muerte fueron también la tuberculosis, la tifoidea y enfermedades gastro-intestinales y en menor medida, la sífilis.

Un resultado inevitable del deterioro de las condiciones de vida de los más pobres así como de lo limitado de los servicios públicos fue el que la ciudad de Santiago se ubicara entre las ciudades con la más alta tasa de mortalidad del mundo occidental.

El doctor Adolfo Murillo estimó que ésta superaba al 50 por mil en los años 1890-93 y que recién hacia fines de siglo había descendido al 37 por mil. El Anuario Estadístico, por su parte, para los años 1865-1882 –años en que mejoró el servicio de estadística– había establecido una tasa de mortalidad promedio del 35 por mil. En cualquier caso, el doctor Murillo no exageraba cuando afirmaba que Santiago era una de las “ciudades más mortíferas del mundo civilizado”[22].

Sin embargo, donde los problemas eran más graves aun era en relación con los niños. El propio doctor Murillo, siguiendo ahora no su propia información, sino la que provenía del Anuario Estadístico, indicaba que los niños que morían antes de cumplir un año de vida, en 1893 alcanzaba al 36,83 por 100; al 37,85 por 100 en 1894 y al 38,41 por 100 en 1895. Ello representaba un promedio para el trienio del 37,63.

Si se considera ahora el porcentaje de párvulos, es decir, de niños de 0 a 7 años que morían cada año, sobre el total de defunciones, las cifras suben aun más. En efecto, en el último tercio del siglo la mortalidad de párvulos de 0 a 7 años no bajó del 58 por 100. Así por ejemplo, en Santiago el año 1897 de los 12.269 fallecidos 6.781 eran párvulos[23].

Las causas más directas de muerte de párvulos, según los estudios del doctor Ricardo Dávila, eran las siguientes:

“...las afecciones agudas del tubo gastro-intestinal, en primer lugar, en segundo lugar, las fiebres infecciosas o contagiosas, i las afecciones agudas o crónicas del aparato respiratorio, en tercer lugar”[24].

Las altas tasas de mortalidad, tanto de párvulos como de adultos, nos remiten

necesariamente a las precarias condiciones de vida de los más pobres –donde las pestes y enfermedades hacían sus mayores estragos– pero también a los deficitarios servicios de salud y a los lentos avances que hizo la noción de “higiene pública” entre las autoridades políticas y administrativas. Ello estimuló, como hemos visto en el capítulo anterior, variadas iniciativas de salud pública entre los artesanos.

Así, por ejemplo, hasta avanzado el siglo, Santiago no contó más que con dos centros hospitalarios. El San Juan de Dios para los hombres y el San Francisco de Borja para las mujeres. Junto a estos establecimientos existían también la vieja Casa de Expósitos. El hecho concreto es que todavía en 1875, cuando Santiago contaba con unos 150 mil habitantes, no contaba con más de mil camas de hospital. Sus efectos saltaban a la vista y eran conocidos por todos: diariamente los hospitales debían rechazar pacientes que requerían con urgencia de una atención especializada[25].

Por otra parte, ingresaban a los hospitales los más graves y si se considera los problemas de infraestructura de los hospitales –un caso típico era el San Juan de Dios– el número de pacientes que fallecía era lo suficientemente alto como para que en los sectores populares se generara una gran desconfianza hacia los hospitales y la medicina moderna.

Por cierto que las epidemias y la extensión de algunas enfermedades obligaron a las autoridades –en el último tercio del siglo– a tomar medidas que incrementaran y mejoraran los servicios asistenciales. Fue necesario crear nuevos hospitales, como el de San Vicente, una Junta de Lazaretos que debió habilitar nuevos establecimientos en períodos de mayor dureza de las pestes y un Consejo de Higiene Pública, que comenzó a funcionar bajo la Intendencia de Vicuña Mackenna, en los años setenta.

Las condiciones de vivienda, como ya hemos adelantado, fueron también un poderoso factor de deterioro de la salud física de los sectores populares. A los

tradicionales “ranchos” de la primera mitad del siglo, le siguieron los “conventillos”–hacia fines del siglo– como una de las formas más extendidas de habitación popular.

El conventillo era básicamente un alineamiento paralelo de piezas separadas por un patio común por el que frecuentemente atravezaba una acequia. Las piezas o cuartos que se arrendaban por separado solían cumplir con variadas funciones: dormitorio, cocina, comedor, y en algunos casos, lugar de trabajo. Del hombre cuando instalaba allí su pequeño taller, de la mujer cuando realizaba en él labores de costura o de planchado. Era también frecuente que el cuarto albergara algunas aves que, por cierto, contribuían a la alimentación del grupo familiar, o algunos “gallos de pelea” que el jefe de hogar usaba en competencias que eventualmente podía reportar también algunos beneficios económicos.

El hacinamiento que implicaba la vida en el conventillo fue reiteradamente denunciado en la segunda mitad del siglo pasado. En 1876, por ejemplo, la Junta de Lazaretos indicaba que en el 40% de los cuartos de conventillo vivían “a más de animales y aves, entre ocho y diez personas”[26]. Los materiales de construcción de los conventillos eran, por lo común, de ínfima calidad. Adobe elaborado de barro conseguido en algún lugar cercano; paja y caña para el techo y el piso normalmente de tierra endurecida.

El conventillo, sabemos, persistió por largo tiempo en la sociedad chilena, como una forma muy extendida de habitación popular. Todavía, en los años cuarenta del siglo XX, cerca del 40% de los más pobres de Santiago vivían en cités y conventillos y la mayor parte de ellos eran, reiteradamente, declarados insalubres.

Sin lugar a dudas que la literatura social fue la vía por la que mejor se expresó la realidad del conventillo. Probablemente la descripción que hace Baldomero Lillo en uno de sus cuentos de principios de siglo sea la más conocida:

“Entre dos hileras de cuartos, cuyo aspecto sórdido denotaba la desidia o la avaricia del propietario, extendíase un espacio de quince metros de ancho por cuarenta de largo, cruzado por alambres y cordeles que sostenían piezas de ropa de todas formas y colores. Separados entre sí por delgados tabiques, las habitaciones carecían de ventanas y solo tenían una puerta, cuya parte alta ostentaba algunos agujeros para dar paso al aire del exterior. Obreros y jornaleros ocupaban estos cuartos. En el más grande con frente a la calle, tenía su habitación la portera o mayordoma, encargada de las importantes funciones de cobrar los alquileres, de dar los desahucios a los reacios en el pago y a los que no rindiesen el acatamiento debido a su alta investidura de representante del propietario... La pieza donde entraba la mujer estaba llena de trastos. En el centro alzábase una mesa cubierta con tapete de hule muy viejo. Junto a la pared destacábanse dos catres de fierro con sus camas, y en el suelo, esparcidos aquí y allá, había baldes con lejía, atados de ropa y ollas y cacharros de toda especie. Cerca de la puerta, una gran jaula dividida en compartimentos, veíanse varios gallos ingleses de pelea...”[27].

El conventillo, en el último tercio del siglo constituía una realidad que impactó tanto a visitantes extranjeros como a la propia élite dirigente. Y entre algunas autoridades existía consenso en muchos de ellos que debían sencillamente desaparecer y no tendrían más utilidad que la de ser usados como material para terraplenar calles.

No era sin embargo fácil terminar con el conventillo, ya que éste era también un negocio lucrativo para muchas connotadas familias. Tal era este hecho y las ganancias que producía, que Juan Enrique Concha llegó a decir que “usura y conventillo” habían llegado a ser “palabras sinónimas”[28].

El hacinamiento que implicaba la vida en el conventillo se compensaba con el uso cotidiano del patio común, pero más frecuentemente por la calle, la cantina y el burdel, que en algunos casos se establecía en el mismo conventillo.

La vida familiar, por cierto, se hallaba fuertemente condicionada por lo reducido de las piezas, la falta de intimidad y la promiscuidad. Sin embargo, hay que reconocer también que ésta no solo se hacía en el cuarto de habitación sino que en su contexto. Este incluía el patio común y la calle.

El patio común del conventillo, en este sentido, era escenario de una rica y fuerte sociabilidad: lugar de juego de los niños, del lavado de ropas, del intercambio de cuentos y noticias, etc. Ello contribuía –por cierto– al desarrollo de fuertes lazos de solidaridad entre los habitantes del conventillo y podía traducirse en el cuidado común de los niños y en el apoyo en situaciones aflictivas, como enfermedades, muertes o desgracias.

Con todo, el conventillo evidenciaba ya una profunda crisis en la sociedad popular. Las estrategias de subsistencia peonal tocaban techo en su desarrollo y los más pobres fueron crecientemente atrapados por la ciudad y su miseria que le era consustancial. Creció entonces el consumo del alcohol, la familia tendió a desintegrarse y las enfermedades y pestes –como ya hemos visto– cobraron sus mayores víctimas entre ellos. Influyó, por último, complicando más las cosas, una economía que hacia fines del siglo si bien se revitalizó con las exportaciones salitreras, vivió periódicos ciclos recesivos que redundaron en inflación o encarecimiento de los productos de primera necesidad.

Cuando ello se produjo no solo vieron comprometida su subsistencia los más pobres, sino también los artesanos y la naciente clase obrera que ya se asentaba en las explotaciones mineras del norte y sur del país, como asimismo en importantes establecimientos industriales en Santiago y Valparaíso.

La “cuestión social” hizo entonces crisis, justo cuando cambiaba el siglo, pero ya no solo como extensión de la miseria entre los pobres, sino que también como protesta social y política en contra de esa miseria. Pero antes de referirnos a la

cuestión social, es necesario que examinemos a un tercer actor social popular: los obreros chilenos.

[1] Romero, Luis Alberto. “Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile. 1840-1895 (vivienda y salud)”. Revista Nueva Historia No 9, Londres, 1984, pág. 10.

[2] Salazar, Gabriel. Labradores, peones y proletarios. Edic. SUR, Santiago. 1985, pág. 229.

[3] Romero, ob. cit., pág. 11.

[4] Romero, ob. cit., pág. 25.

[5] Vicuña Mackenna, Benjamín. Transformación de Santiago. Imprenta de la librería de El Mercurio. Santiago, 1872. págs. 24 y 25.

[6] Vicuña Mackenna, B., ob. cit., pág. 31.

[7] Vicuña Mackenna, B., ob. cit., págs. 34 y 35. Firma la nota al Intendente L.A. Irrarrázaval.

[8] Romero, ob. cit., pág. 52.

[9] Vicuña Mackenna, ob. cit., págs. 18 y 19.

[10] Salazar, ob. cit., pág. 254.

[11] Salazar, G., ob. cit., pág. 34.

[12] En Labradores, peones y proletarios Gabriel Salazar estudia acuciosamente el largo proceso histórico que siguió la mayoría popular campesina y luego urbana, desde la época colonial hasta fines del siglo XIX.

[13] Salazar, ob. cit., pág. 151.

[14] Salazar, ob. cit., pág. 153.

[15] Salazar, ob. cit., pág. 150.

- [16] Neruda, Pablo. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, Edit. Zig-Zag. Santiago, 1967.
- [17] Neruda, ob. cit., pág. 38-39.
- [18] Salazar, ob. cit., pág. 254.
- [19] Neruda, ob. cit., pág. 35.
- [20] Salazar, ob. cit., pág. 150.
- [21] Dávila Boza, Ricardo. “Mortalidad de los niños en Santiago. Sus causas y remedios”. Rev. Chilena de Higiene, Vol. 5. Santiago, 1899, pág. 334.
- [22] Murillo, Adolfo. “La mortalidad en Santiago”. Revista Chilena de Higiene, Vol. 1. Santiago, 1899. pág. 42.
- [23] Murillo, ob. cit., pág. 45.
- [24] Dávila, Ricardo, ob. cit., pág. 303.
- [25] Un análisis completo de las enfermedades, sus efectos y los modos en que los encaró la sociedad chilena a fines del siglo pasado se encuentran en los capítulos VII y IX del trabajo de Luis A. Romero ya citado.
- [26] Romero, ob. cit., pág. 32.
- [27] Antología de Baldomero Lillo, Nicomedes Guzmán. Santiago, segunda edic., Zig-Zag, págs. 132-133.
- [28] Romero, ob. cit., pág. 21.

Capítulo tres

Los obreros: Distintas vertientes de proletarización

Donde se narran algunas de las

principales formas y caminos que siguió

la proletarización en Chile, en la segunda

mitad del siglo XIX.

En la minería del cobre primero, luego

en el carbón, el transporte, sobre todo

el ferrocarril, la industria metalúrgica y

también de vestuarios y alimentos y

finalmente en el salitre.

Origen minero e industrial

El surgimiento de la clase obrera chilena constituye un largo y peculiar proceso, que con avances y retrocesos se fue plasmando en la segunda mitad del siglo XIX. La originalidad y también la complejidad del proceso de constitución de la clase obrera chilena forma parte y se explica en el curso de nuestra poco estudiada historia económica y social.

Sería muy sencillo afirmar –como solía hacerse en círculos militantes– que la clase obrera chilena tiene un origen minero y que se formó en la pampa salitrera del norte y en las vetas carboníferas del sur. Sin embargo, esta afirmación no da cuenta de los ciclos mineros de la plata y del cobre y, en particular, de este último, que dio origen a la industria de fundiciones. Ambos ciclos mineros fueron anteriores a la Guerra del Pacífico.

Otra afirmación frecuente en relación al origen de la clase obrera chilena es aquella que enfatiza en el origen industrial de ésta. Y la industria, se indica de modo general, no habría hecho su aparición en las grandes ciudades del país sino hasta fines del siglo pasado. La investigación histórica, sin embargo, ha demostrado fehacientemente de dos importantes –aunque limitados– ciclos industrializadores en la segunda mitad del siglo pasado: uno anterior a la Guerra del Pacífico y otro que sigue a ésta, sobre todo en los años que preceden a la “revolución” del 91.

Si seguimos, por otra parte, los más difundidos manuales de historia política tradicionales, la clase obrera no emergería en la historia sino hasta principios de este siglo. Es decir, cuando ésta ha hecho notar su presencia en la escena política como protesta y como amenaza al orden social y político vigente. O sea, solo

cuando se han constituido ciertos liderazgos –Recabarren, por ejemplo– partidos e ideologías, que tienden a ser presentados como influidos del exterior, es decir, como ajenos a nuestra tradición nacional. En suma, la clase obrera habría emergido históricamente al momento que la élite no la pudo ignorar.

El problema, sin embargo, es un poco más complejo y no es, por cierto, puramente ideológico (¿cuándo y en qué circunstancias surgió la clase obrera chilena?). Es necesario, como hemos adelantado, verlo en el contexto de la evolución de nuestra estructura económica; pero más que eso y junto con ello, es necesario considerar el origen de la clase obrera chilena como una dinámica histórica de configuración de una identidad social: la identidad obrera o proletaria.

En efecto, ambos procesos son claves en la constitución de una determinada clase social. No basta solo con el hecho de que se produzcan cambios en la estructura económica que den origen a diversos núcleos de asalariados. Se requiere también que esos núcleos de asalariados se “sientan” clase obrera.

En el caso chileno, concretamente, la evolución de la estructura económica, para los efectos de nuestro tema, representa variados problemas. En primer lugar, no se verificó entre nosotros una “revolución industrial” (a la inglesa) a partir de la cual se configuraran diversos núcleos de proletariado industrial en las ciudades. En segundo lugar, entre nosotros, el predominio del capital mercantil-financiero, que surgió del comercio de exportación agrícola y minero, no favoreció especialmente el desarrollo de una industria nacional.

La industrialización en Chile, en la segunda mitad del siglo XIX siguió diversos cursos y comprometió a diversos sectores sociales. Por una parte, empresarios-mercaderes, que hicieron fortuna a partir del comercio de exportación –cuyo centro neurálgico estuvo en Valparaíso– y que invirtieron en la minería y en la industria de fundiciones, del transporte y también en la metalurgia. Por otra parte, ingenieros y artesanos extranjeros que se avecindaron en el país y que

acogiéndose a ciertas ventajas legales instalaron talleres e industrias, introdujeron nuevas tecnologías y diversificaron la producción nacional. Finalmente, fue también un actor relevante en la industrialización el artesanado y el empresariado popular, que utilizando tecnología local desarrolló variadas ramas industriales, especialmente en el vestuario y el consumo interno de alimentos y servicios.

La industrialización chilena logró avanzar a partir de estos actores sociales “productivistas” a pesar de que la hegemonía de las clases dominantes nacionales la mantuvo siempre el sector de mercaderes y financistas, es decir, ese sector que no busca realizar sus ganancias en la órbita de la producción, sino que en la órbita de la distribución y el intercambio.

Así por ejemplo, en la minería la situación evolucionó de acuerdo con las demandas del mercado internacional y las “ventajas comparativas” del país en cuanto a sus riquezas naturales. En este sentido, se verificaron verdaderos ciclos económicos dominados por el auge de nuestros metales: primero fue el ciclo de la plata, luego el del cobre, y en el último cuarto de siglo, el del salitre.

No cabe duda que el sector minero fue el más dinámico tanto desde el punto de vista de los recursos económicos que produjo para el país como también respecto de los procesos de proletarización. Sin embargo, como veremos más adelante, subordinado como estuvo el sector minero a los mercaderes (habilitadores se denominaban), asentados en Valparaíso, no fue capaz de sentar las bases para un desarrollo capitalista nacional de mayor envergadura.

Ya volveremos sobre estos problemas. Por ahora, nos interesa dejar sentado que el proceso industrializador –tanto en la minería como en la manufactura– no se vio especialmente favorecida, en el contexto de la hegemonía mercantil y del modelo de desarrollo exportador que predominó en Chile en el siglo pasado. En segundo lugar, y éste problema es clave para comprender la evolución del movimiento popular chileno en el siglo pasado, los procesos de proletarización

no solo fueron limitados, sino que también –en muchos casos– tendieron a ser rechazados por los sectores populares, cuando ellos implicaron formas de explotación del trabajo pre-capitalistas o semi-esclavistas.

Por este conjunto de razones, históricas y estructurales, la clase popular chilena, en el siglo XIX, tendió a ser bastante heterogénea: Avanzaban, por una parte, procesos de proletarización limitados, sino rechazados o abortados en la industria y la minería; persistían formas de producción artesanal y de producción industrial popular, aunque con serios límites en su horizonte económico y político. Y, al mismo tiempo, grandes contingentes peonales –como se ha visto en el capítulo anterior– ensayaban sus propias estrategias de sobrevivencia.

Esta diversidad de formas de participación y gestión económica, sin dudas que influyó significativamente en la configuración de las identidades populares. Así por ejemplo, los pequeños industriales populares se sintieron muchas veces artesanos, obreros o industriales dependiendo de la suerte que corrían sus empresas y de las solidaridades populares para enfrentar sus problemas de sobrevivencia. Del mismo modo, importantes sectores peonales que la historiografía vio como obreros, no evolucionaron nunca hacia esta nueva identidad si se considera los problemas de estabilidad laboral, las formas de explotación a que fueron sometidos –por ejemplo, en la minería– o a los problemas en relación a la calificación de la mano de obra que debieron enfrentar los peones en las nacientes industrias.

Nos interesará en este capítulo seguir algunos de estos procesos en la minería y en la industria, aunque, advertimos, solo muy parcialmente, ya que la información y la investigación histórica es aun tremendamente limitada en relación a estos problemas.

Con todo, antes de entrar a referimos en concreto a las diversas vertientes de proletarización, parece útil dibujar a grandes rasgos el contexto económico nacional en que se fueron constituyendo los primeros núcleos proletarios.

Hegemonía mercantil y minería del cobre

En términos generales, como se sabe, el desarrollo económico nacional –en la segunda mitad del siglo pasado– estuvo centrado en la agricultura y la minería. Ambas actividades orientadas y estimuladas especialmente por el comercio de exportación.

Agricultores y mineros no siempre expresaron intereses armónicos y comunes en relación al Estado y a las políticas que en este ámbito se definían. Las políticas de impuestos y particularmente de aranceles para la exportación e importación de bienes, por ejemplo, fueron siempre un tema conflictivo en la medida que se favorecía o perjudicaba a uno u otro sector. Con todo, también en términos generales se puede decir que la fracción mercantil y la agraria tendieron a hegemonizar la conducción económica del Estado.

Este predominio no siempre se impuso por la vía del consenso y la persuasión. En más de una ocasión fue el telón de fondo y la base real de serios y graves conflictos al interior de la élite dominante. Las revoluciones liberales de 1851 y 1859, así como la denominada “revolución del 91” son quizás los hitos más relevantes de estas confrontaciones y de la afirmación de la hegemonía del sector agrario y mercantil.

En la década del cincuenta ese sector se había visto especialmente favorecido por el boom de las exportaciones trigueras hacia Australia y California en una primera etapa y hacia Europa en los años posteriores. En Valparaíso, a estas alturas, se había constituido un sector mercantil-financiero de punta, del que participaban capitalistas nacionales y las grandes casas comerciales inglesas. Así

se cerraba el círculo clásico de una economía tradicional dependiente: producción para la exportación y constitución de un centro neurálgico para los grandes negocios.

Con todo, a la base de este sistema no solo estaban ni siquiera principalmente las exportaciones agrícolas, sino que las mineras. Estas desde hacía ya tiempo hacían los aportes más significativos al presupuesto nacional y al comercio de exportación[1].

En el sector minero, el cobre adquirió un importante dinamismo entre los años 1850-70, lo que se tradujo en un aumento de las exportaciones del metal rojo[2] y en el desarrollo de la industria de fundiciones. En efecto, en estos años Tomás Urmeneta establecía en el Norte las más grandes fundiciones de cobre de su tiempo en Guayacán y Tongoy y aportaba también capitales para la construcción del ferrocarril de Coquimbo a Tongoy. Los Cousiño, por su parte en el Sur, junto a la explotación carbonífera establecieron pronto su propia fundición de cobre y otras industrias menores en la región.

El incremento de la producción minera y los procesos de modernización industrial que ésta conllevaba encontraron, no obstante, variados obstáculos. En primer lugar, de tipo político administrativo, como producto del predominio en el Estado de la fracción agraria y mercantil, poco proclives a apoyar la modernización capitalista de tipo industrial y más proclives a usufructuar del impuesto a las exportaciones que los mineros debían cancelar al Estado.

Por otra parte, y aquí radica quizás el obstáculo mayor, los productores mineros estuvieron siempre subordinados al capital mercantil de Valparaíso. Ello se traducía en la sujeción de los productores a los “habilitadores” (financistas que adelantaban préstamos a los productores a un interés usurero). De este modo, el predominio mercantil tendió a favorecer a los grandes empresarios, que iniciados como habilitadores lograron acumular capitales suficientes como para diversificar sus inversiones. Un caso típico es el de Agustín Edwards.

Éste, como explica el historiador Marcelo Segall, luego de iniciarse como habilitador, logró ampliar sus negocios y fundir minerales de cobre y plata al tiempo que recibir dinero para prestarlo a interés. Al crecer su capital, contribuyó a financiar la construcción del ferrocarril de Caldera a Copiapó, lo que le reportó ganancias suficientes para establecer una casa bancaria. Cuando sobrevino la crisis minera de 1870, la mayor parte de los productores y pirquineros cayeron en la ruina y paralizaron. Todos estaban atados a sus habilitadores. Edwards era uno de ellos y, portador de numerosas garantías, las hizo efectivas, adquiriendo mineral francamente depreciado respecto de su valor real. Cuando se recuperó la demanda y subieron los precios Edwards logró hacer crecer su capital, hacerse un rico banquero y el “rey del cobre”. Su casa bancaria de préstamos mineros se convirtió entonces en el Banco Edwards, con capitales suficientes como para establecer diversas sucursales en el exterior[3].

Asimismo, los grandes empresarios nacionales unieron pronto su suerte al capital extranjero. En efecto, en la medida que los negocios se hacían y definían en Valparaíso, muy rápidamente las casas comerciales inglesas comenzaron a participar de la especulación minera. Así, por ejemplo, hacia 1876 la Casa W. Gibbs & Co. hacía avances por el valor de \$1.500.000 a la compañía formada por Urmeneta y Errázuriz y por \$ 800.000 a Seruco Hermanos[4], Siguiendo estos derroteros, muy pronto el capital extranjero superaría al capital criollo en el negocio minero. El punto culminante, con todo, en lo que se refiere a la intervención del capital extranjero en la minería se produciría hacia fines del siglo en el salitre

En la producción de cobre, hacia la década de los setenta, era ya visible una mayor calificación laboral de los trabajadores chilenos y según Salazar se podía distinguir, a estas alturas, una cierta estratificación entre ellos: “una capa de empleados o proletariado industrial en la cima (ingenieros, mecánicos, maquinistas, ensayistas, etc.), otra de artesanos en el medio (herrerros y carpinteros) y otra de peones en la base (barreteros, apires, chancadores, etc.)”[5]. Estos últimos realizaban, por cierto, las labores más duras en la faena y

estaban normalmente obligados a residir en los campamentos.

Barreteros y apires cumplían, en realidad, con dos tareas de primera importancia en las faenas mineras. El primero era el encargado de seguir y explorar la veta del mineral mediante picota, pala y dinamita. El apir, en cambio, es quien se encargaba de transportar el mineral extraído.

La imagen de estos trabajadores, principalmente peones enganchados para la explotación minera del cobre y la plata, es quizás la que mayor huella ha dejado en la conciencia popular. También la literatura y los informes de viajeros que pasaban por el país dejaron su testimonio sobre estos trabajadores. La descripción que hizo Charles Darwin en su paso por Chile quizás sea la más conocida.

“Cuando llegamos a la mina, inmediatamente me chocó el pálido aspecto de los peones... La mina tiene 180 metros de profundidad, y cada apir sube una carga de 200 libras de peso... Incluso jovencitos imberbes, de 18 a 20 años, con escaso desarrollo muscular –están casi desnudos– ascienden con esa gran carga desde esa profundidad... los apires suben esa carga 12 veces al día, o sea, 2.400 libras diarias... y ellos son empleados durante los intervalos en machacar piedras...Aun sabiendo que este es un trabajo voluntario, es, sin embargo, tremendamente repulsivo ver el estado en que ellos llegan a la bocamina: sus cuerpos doblados hacia adelante, agachados, con sus brazos apoyados en los escalones, sus piernas arqueadas, sus músculos temblorosos, la transpiración chorreando de sus rostros sobre el pecho, las aletas de la nariz distendidas, las comisuras de los labios violentamente recogidas hacia atrás, y la expulsión del aliento dificultosa... Luego de tambalearse sobre montones de mineral, vacían su carpacho; en dos o tres segundos recuperan su respiración, limpian la transpiración de su frente y, aparentemente muy frescos, descienden otra vez a la mina, a paso rápido”[6].

Vicuña Mackenna se refirió también a las “costumbres” de barreteros y apires, indicando que éstos vivían aislados en los montes “sin ver la diferencia entre el

día y la noche dentro de las lóbregas paredes de sus pirques”. Reconoció también, como lo hacen diversos ensayistas y analistas de la época, que su sustento alimenticio se componía de productos tan baratos y chilenos como “porotos con ají y un puñado de higos como postre”[7].

Precarias también eran las condiciones de vivienda de los peones mineros, quienes estaban obligados a residir en los campamentos. Estos originalmente fueron pequeños y consistían en ranchos o galpones construidos en la ladera de un cerro, con techos de ramas o cueros. Allí solían estos trabajadores reponer sus energías luego de jornadas de doce a catorce horas como promedio. En estos sitios residían solo hombres, lo que evidentemente tendió a reforzar la camaradería masculina y al “compadre”. Este era amigo, hermano, consejero y compañero de fortunas en la búsqueda de la sobrevivencia.

Y fue también en la minería del norte chico donde se estableció, por primera vez, el peculiar sistema de “ficha-salario”. Nos referimos al sistema de pagos de los salarios en “fichas”, cuyo uso, como se sabe, se prolongó en la minería hasta las primeras décadas del presente siglo.

El sistema consistía en que los propietarios de las minas (plata y cobre en estos años) emitían vales o fichas como una forma de pago del salario, con los cuales los trabajadores debían adquirir sus productos de primera necesidad en el almacén (pulpería) de propiedad de las minas. Existen evidencias de que el sistema comenzó a utilizarse, hacia los años treinta, en Chañarcillo, como asimismo en las diferentes minas de cobre de la Copiapó Mining Company y en la firma García Huidobro, propietaria de minas y fundiciones en Catemu y Putaendo[8].

Si bien esta forma de pago fue condenada legalmente –aunque sin mucha eficacia práctica– por el gobierno de Manuel Montt, el sistema de ficha-salario se extendió en la segunda mitad del siglo prácticamente a las más importantes explotaciones mineras, como asimismo a establecimientos de fundiciones,

ferrocarriles privados e incluso, hacia la agricultura. El secreto del sistema ficha-salario consistía en que representaba un doble beneficio para los propietarios de minas: “No necesitaban capital en efectivo para cancelar los jornales. El posible salario volvía a sus cajas, es decir, casi no existía. Y, además, reducían sus necesidades de crédito en dinero, de préstamos de habilitación”[9].

No resulta fácil, finalmente, indicar con precisión el número de trabajadores involucrados en las explotaciones mineras en estos años. Ignacio Domeyko, en su estudio sobre depósitos metalíferos en Chile, publicado en 1876, calculó en aproximadamente 33 mil los trabajadores mineros en las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua y Santiago[10].

Las explotaciones carboníferas

Otra veta minera, cuya explotación se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, es la explotación de carbón de piedra en la zona sur del país.

Las primeras explotaciones carboníferas se iniciaron en la región de Lota y Coronel en los años cuarenta. La producción en una primera etapa era reducida y se destinaba principalmente a la Compañía de Vapores de Valparaíso. Un estímulo importante, años más tarde, lo constituyó la industria de fundiciones que se desarrolló en el país. Joaquín Edwards, por ejemplo, buscando disminuir costos instaló hornos de fundición en Lirquén y un vecino habilitó minas para abastecerlo en 1843[11].

Jorge Rojas Miranda y Matías Cousiño han sido reconocidos como los pioneros de la explotación carbonífera en cuanto introdujeron métodos de explotación modernos. Pioneros relativos en realidad, porque, al igual que en el norte chico,

fueron siempre peones –buscones y pirquineros– quienes iniciaron normalmente las explotaciones mineras. Rojas se estableció en Coronel y Cousiño en Lota. Ambos se habían desempeñado con anterioridad en actividades mineras en el norte del país.

En la década del sesenta las explotaciones carboníferas se encontraban ya en pleno apogeo. En Lota particularmente, al lado de la mina se ha instalado una maestranza que repara máquinas y produce algunas piezas de repuesto. Funciona también un pequeño astillero y una fábrica de ladrillos y baldosas que ocupa entre “ochenta y cien brazos”. Entre todos estos establecimientos, el mayor –sin dudas– es la fundición de cobre –de propiedad de los Cousiño– que en estos años poseía catorce hornos, ocupaba unos 150 trabajadores y producía anualmente cinco mil quintales de cobre en barra[12].

Se fue constituyendo de este modo un importante núcleo proletario en esta región del país que cubría una variada gama de trabajadores y oficios; desde los barreteros de la mina hasta los lancheros del puerto, pasando por los trabajadores de la maestranza, la fundición y la germinal industria regional.

El barretero, mediante picota y cuña, tenía por tarea avanzar sobre la veta. Como años más tarde los describiría Baldomero Lillo:

“Pedro María, con las piernas encogidas, acostado sobre el lado derecho, trazaba a golpes de piqueta un corte en la parte baja de la veta. Aquella incisión que los barreteros llaman circa alcanzaba ya a treinta centímetros de profundidad, pero el agua que se filtraba del techo y corría por el bloque llenaba el surco cada cinco minutos, obligando al minero a soltar la herramienta para extraer con la ayuda de su gorra de cuero aquel sucio y negro líquido que, escurriéndose por debajo de su cuerpo, iba a formar grandes charcos en el fondo de la galería”[13].

Acumulada una cierta cantidad de carbón, era depositado en cajones donde el barretero introducía una ficha que le permitía individualizar su trabajo y hacer el cobro respectivo en las fechas de pago. Hacia 1880, la jornada laboral era de doce horas diarias y se trabajaba con sistema de turno.

El carbón, una vez depositado en los cajones, era recogido por los “carreros y carretalleros”. Esta tarea propia de un apir podía ser ayudada por animales de tiro que movilizaban los carros con el mineral a través de los piques. Estos animales eran habitualmente usados hasta agotar sus capacidades. Una suerte semejante corrían los trabajadores debido a los frecuentes accidentes del trabajo –en particular por las explosiones del famoso gas grisú– y al desgaste físico normal que producía la actividad al interior de la mina.

A ello se refiere, en otro de sus cuentos Subterra, Baldomero Lillo:

“La extracción de un caballo de la mina, acontecimiento no muy frecuente, había agrupado alrededor del pique a los obreros que volcaban las carretillas en la cancha y a los encargados de retornarlas vacías y colocarlas en las jaulas. Todos eran viejos, inútiles para los trabajos al interior de la mina, y aquel caballo que después de diez años de arrastrar allá abajo los trenes del mineral era devuelto a la claridad del sol, inspirábales la honda simpatía que se experimenta por un viejo y leal amigo con el que se han compartido las fatigas de una penosa jornada (...) Allí abajo (comentaban) no se hace distinción entre el hombre y la bestia. Agotadas las fuerzas, la mina nos arroja como la araña arroja fuera de su tela el cuerpo exangüe de la mosca que le sirvió de alimento...”[14].

Como solía ocurrir en las minas del norte, también en Lota y Coronel era frecuente el trabajo de menores. Francisco Aracena, en sus estudio sobre la minería del cobre y el carbón –publicado en 1884–, describió del siguiente modo el trabajo de los niños en la fábrica de ladrillos de Lota:

“Las diversas operaciones han sido hábilmente combinadas y distribuidas en los distintos grupos de niños de ocho a catorce años de edad, que todos al fin, o el trabajo de todos juntos, asemeja a una gran máquina a vapor puesta en movimiento y siendo cada una de las piezas de esta gran máquina representada por un grupo de muchachos más o menos numerosos”[15].

Siguiendo este estudio se puede apreciar también el importante desarrollo que ha alcanzado Lota en la década de los ochenta, con sus diversos establecimientos:

“Depósitos carboníferos; su enorme fundición de cobre; sus magníficos artefactos de arcilla allí mismo elaborados, sus ferrocarriles y sus túneles; sus vapores y su gran muelle de fierro; su maestranza y talleres de vapor de carpintería y herrería; los tres o cuatro mil operarios que ocupa; su célebre parque y otras tantas obras”[16].

Entre los diversos establecimientos que prosperaron en la región, sin lugar a dudas que el lugar más destacado lo ocupó la Compañía Explotadora de Lota y Coronel. Este establecimiento, de propiedad de los Cousiño, fue la base de la enorme riqueza acumulada por esta familia y financió la Viña (ubicada en el sector oriente de Santiago), el parque Lota y otras propiedades, amén de las empresas de la Compañía que se instalaron en la región.

Al finalizar el siglo, la Compañía, con minas y puertos en Lota y Coronel, producía 240 mil toneladas de carbón al año y ocupaba cerca de 2 mil trabajadores. Era propietaria, además, de la fundición de cobre –considerada una de las más modernas de la época– que con sus 42 hornos producía entre 50 y 60 mil quintales métricos al año y ocupaba a 500 trabajadores[17].

Desde el punto de vista de los oficios y la estratificación laboral, en las explotaciones carboníferas se podía distinguir un sector reducido de empleados

directivos –que gozaban por cierto de la confianza de las compañías–; luego un importante sector de empleados, técnicos, mecánicos y artesanos, y finalmente, en la base, los operarios de fábrica y diversas categorías de trabajadores de menores ingresos. En la capa directiva y de técnicos existía un importante contingente de migrantes europeos o trabajadores especializados enganchados especialmente por las compañías.

Respecto de las condiciones de vivienda, en la región del carbón y especialmente en Lota se tendió a marcar muy radicalmente la diferencia entre la vivienda para técnicos y directivos y la vivienda para obreros. Aracena describe de esto modo una población obrera en Lota en la década de los ochenta:

“...galpones bien contruidos de ladrillos o adobe y techo de tejas y corredores en uno de sus frentes. Estos galpones son divididos proporcionalmente, teniendo cada departamento su respectiva chimenea... En cada galpón pueden acomodarse doce familias, de manera que la reunión de tantos galpones uniformados formando verdaderas calles ha venido a crear de tal suerte una verdadera población de mil doscientos a mil quinientos habitantes”[18].

Finalmente, desde el punto de vista político y administrativo las compañías contaban con un enorme poder que les permitía incidir en la elección de concejales municipales, en los magistrados de justicia y también en el gobierno. Los propietarios de mina contaban además con una especie de policía privada que tenía poderes para allanar, castigar o aprehender a los trabajadores y sus familias. La vigilancia de esta policía revestía particular importancia para los efectos de hacer cumplir la obligatoriedad que tenían los trabajadores de adquirir sus productos de primera necesidad en la pulpería de la mina. El régimen de salarios seguía, por su parte, un curso semejante al de otras explotaciones mineras: se utilizaba el sistema de fichas y era frecuente el atraso en la liquidación de los salarios.

El transporte y en especial el ferrocarril

Junto a la minería de la plata, el cobre y el carbón, en la segunda mitad del siglo, el transporte y la industria adquirieron también un importante desarrollo.

La libre circulación de productos, el acceso a los puertos, el abaratamiento del transporte, etc., tareas normalmente muy importantes para una economía mercantil y exportadora, llevaron a los gobiernos de la época a priorizar en las obras públicas. Esta fue otra vertiente de progresiva proletarización de artesanos y peones locales. Fue también una tarea que obligó a la importación de mecánicos y técnicos extranjeros.

Entre 1865 y 1875 prácticamente se triplicó la red caminera y a partir de 1868 se creó un servicio permanente para la mantención y mejoramiento de los caminos. También, en estos mismos años se agilizó la construcción de diques y muelles de fierro en los puertos, especialmente en Valparaíso, que concentraba gran parte del movimiento comercial de exportación del valle central.

Al iniciarse la década del cincuenta, habitualmente recalaban en la bahía de Valparaíso unas 250 embarcaciones. Muchas de ellas, provenientes de los mares australes, solicitaban reparaciones y se detenían en el puerto para reabastecerse. Los requerimientos del comercio, por otra parte, exigían de la construcción de muelles y diques. Así entonces en 1873, se autorizó a la Compañía Inglesa de Navegación del Pacífico para que construyera un muelle en la bahía. Otro muelle fue construido por el particular Pacífico Álvarez, que en esos años contaba con cincuenta lanchas para el embarque y desembarque de mercaderías. Se sabe también que para la década del setenta, la Compañía de Diques Flotantes contaba con dos diques y que esta misma Compañía contaba con carpinteros, herreros, fraguas y fundiciones para hacer todo tipo de reparaciones[19].

Con todo, el mayor progreso en los transportes, en estos años, fue la construcción del ferrocarril. Su construcción y la extensión de vías fue relativamente espectacular entre 1860 y 1880. Como indica el historiador Luis Ortega, el ferrocarril, que en 1861 contaba en la zona central con 159 km. de vías, alcanzó una extensión total de 950 km. en 1878[20]. La red para ese año unía a Valparaíso por el norte con la ciudad de Angol por el sur y contaba, además con dos ramales: uno a Los Andes y otro a Palmilla.

El ferrocarril, como es conocido, impactó muy profundamente las economías dependientes como la nuestra, no solo porque significaba un progreso evidente en el transporte de productos mineros y agrícolas, sino porque llevó también aparejado un importante estímulo para el desarrollo de la industria metalúrgica. En conjunto, por otra parte, su construcción y operación implicó la movilización y calificación de un significado contingente de mano de obra.

El ferrocarril en Chile tuvo su origen en el norte del país, en las explotaciones mineras. De este modo el primer ferrocarril que se construyó en el país fue el que unió la ciudad de Copiapó con el puerto de Caldera a fines de 1851.

El Estado, sin embargo intervino muy pronto y en 1852 se inició la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso y en 1855 se comenzó la extensión de líneas hacia la ciudad de Talca. En los años siguientes las obras continuaron hasta llegar a la región de La Frontera hacia fines del siglo. Por su parte, en el norte, la construcción de líneas férreas continuó en manos de particulares y empresas mineras. Como se ha dicho, la primera vía fue la que unió Copiapó con Caldera. A esta le siguieron otras líneas, como la de Carrizal Bajo, cuya construcción se inició en 1865; el ferrocarril a Tongoy ese mismo año y el de Chañaral, que se empezó a construir en 1872[21].

Como se aprecia fácilmente, el ferrocarril del sur unió el puerto de salida de los productos agrícolas –Valparaíso– con el fértil valle central y, luego, éste con la región de La Frontera, rica zona en la producción triguera incorporada al

capitalismo comercial chileno a partir de la denominada “pacificación de la Araucanía” en los años ochenta. Por otra parte, el ferrocarril del norte cumplió con la tarea de mejorar y abaratar el transporte de minerales –particularmente de cobre en los años 60 y 70 –hacia los puertos de embarque para el exterior.

Como ya hemos adelantado, la construcción del ferrocarril implicó la movilización de importantes contingentes de mano de obra. De este modo, el ferrocarril fue una “vía” significativa de proletarización de artesanos y peones.

En este proceso de proletarización hay que distinguir –como lo hace el historiador Guillermo Guajardo– entre las tareas que correspondían a la fase de “construcción” del ferrocarril y las tareas de la fase de “operación” del mismo.

La fase de construcción no implicaba una mayor calificación de la mano de obra. Se requería, por cierto, abundante músculo y esfuerzo físico. Mientras que las faenas de operación requerían de mano de obra calificada, que en las primeras décadas de funcionamiento del ferrocarril fue satisfecho fundamentalmente con trabajadores y técnicos extranjeros.

Consideremos, en primer lugar, las tareas de construcción del ferrocarril. En estas ha llamado la atención la cantidad de trabajadores ocupados. Ellos eran principalmente peones. Así lo demuestra el cuadro siguiente que indica el número y la categoría de los trabajadores que participaron en la construcción del ferrocarril de Santiago a Quillota.

[1] Marcelo Segall a este respecto indica que el movimiento comercial aduanero, en estos años, reiteradamente mostró la mayor cuantía de las exportaciones mineras. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 1850 las exportaciones agrícolas aportaron aproximadamente un cuarto del total de

ingresos aduaneros. Los tres cuartos restantes provenían principalmente de la minería. En el caso de las entradas generales de la nación, la incidencia del aporte minero era aun mayor. Ver en Segall M., Desarrollo del capitalismo... ob. cit., págs. 42 y 43.

[2] En su libro del cobre. Benjamín Vicuña Mackenna establece que las exportaciones de cobre que entre 1844 y 1853 habían alcanzado a \$ 23.887,062; subieron en el decenio siguiente, es decir, entre 1854 y 1863 a \$ 49.462,996 y entre 1864 y 1873 a \$132.860,689 y entre 1874 y 1882 a \$ 144.015,388. Benjamín Vicuña Mackenna, El libro del cobre y del carbón de piedra en Chile, Imprenta Cervantes, Santiago, 1883, pág. 450.

[3] Segall, Marcelo, El desarrollo del capitalismo..., ob. cit., págs: 73 y ss.

[4] Salazar, Gabriel. Labradores, peones... ob cit., pág. 200.

[5] Salazar, Gabriel. Labradores, peones... ob cit., pág. 226.

[6] Citado por Salazar. ob. cit., pág. 203.

[7] Citado por Segall, ob. cit., pág. 64.

[8] Segall, Marcelo. “Biografía social de la ficha salario”, Revista Mapocho, No2, Santiago, 1964, pág. 99.

[9] Segall, ob. cit., pág. 100.

[10] Citado por Hernán Ramírez en Historia del movimiento..., ob. cit., pág. 73.

[11] Figueroa, Enrique y Sandoval, Carlos. Carbón: cien años de historia (1848-1960), Edic. Cedral, Santiago, 1987, pág. 21.

[12] Figueroa, ob. cit., pág. 32.

[13] Lillo, Baldomero. Subterra, cuento “El pago”, edit. Renacimiento, Santiago, 1980, pág. 55.

[14] Lillo, Baldomero, ob. cit., cuento “Los inválidos”, págs. 5 y ss.

[15] Citado por Figueroa y Sandoval, en Carbón..., ob. cit., pág. 34.

[16] Figueroa y Sandoval, Carbón..., ob. cit., págs. 35 y ss.

[17] Figueroa y Sandoval, Carbón..., ob. cit., págs. 35 y ss.

[18] Citado por Figueroa y Sandoval en Historia de los trabajadores del carbón, Cedral, Documento de trabajo, 1985. pág. 56.

[19] Arredondo, Contreras y otros autores. “Aproximaciones sobre los inicios del proceso de industrialización en Valparaíso: 1848-1879”. Tesis de grado. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 1989, págs. 16 y ss.

[20] Ortega. Luis “Acerca de los orígenes de la industrialización chilena, 1869-1879”. Revista Nueva Historia, Año 1, No2, Londres, 1981, pág. 5.

[21] Guajardo, Guillermo. Los trabajadores de tracción y maestranzas de los Ferrocarriles del Estado. 1852-1914. WUS, Chile, 1988, págs. 9 y ss.

Cuadro N°1

Ocupaciones							Total
Contabilidad	1	3	.	1	.	.	5
Cuerpo de Ingen.	1	5		1			7
Adm. de faenas	12	23	7	8	4	1	55
Mayordomos	119	2	6	5	1	2	135
Herreros	96	1	6	2	1	.	106
Carpinteros	64	10	10	1	.	.	85
Albañiles	112	4	1	2	2	3	124
Mineros	669	669
Carreteros	28	28
Peones	7.877	7.877
Varios empl.	33	14	8	2	1	2	60
Total	9.012	62	38	22	9	8	9.151

Fuente: Ramón Rivera Jofré. Reseña Histórica del Ferrocarril entre Santiago y Valparaíso acompañada del plano de línea, biografía y retrato del contratista Enrique Meiggs. 1a edición, Santiago, septiembre de 1863.

A los peones les estaban reservadas principalmente las tareas del movimiento de tierras, construcción de zanjas y terraplenes. Para ello el uso de la pala, el chuzo y la carretilla eran fundamentales. Al mismo tiempo, instalaban durmientes, rieles y anclajes en la línea.

Los peones chilenos impresionaron especialmente al contratista Enrique Meiggs, de nacionalidad norteamericana, quien dirigió las obras en la construcción del ferrocarril de Santiago a Quillota. Le impresionaron principalmente por su disposición para el trabajo físico al punto que, reconociendo esta virtud, se propuso reducir el tiempo para la construcción de la mencionada vía de tres a dos años.

“Meiggs reconoció en el obrero chileno fuerzas físicas imponderables, que no había encontrado aun en los trabajadores irlandeses, respetados como los más vigorosos. Estas circunstancias influyeron en él para decidirlo a apresurar la obra”[1].

Fue también un hecho reconocido por todos –y ello por cierto contribuyó al éxito de Meiggs– que el trato entre patrón y peón se modificó sustancialmente con este contratista extranjero:

“No los trataba jamás como se acostumbra entre nosotros, a manera de esclavos sometidos al capricho y a la terquedad de sus patrones”[2].

Años más tarde, Antonio Acevedo Hernández en *Raza Fuerte* describió de este modo a los “carreros”, un tipo de labor desempeñada por peones en las faenas de construcción de las vías.

“Durante su curso el convoy se va deteniendo a fin de que bajen las cuadrillas que están acantonadas en las diversas partes que las necesidades del trabajo lo consultan. Cada cuadrilla está mandada por un cabo.

Al fin quedan en tren solamente los carreros... Llegado el tren al corte, los carreros empiezan su trabajo, que es a trato. En la época que me ocupa, 1887, el valor de la carrada era de veinte centavos por cada trabajador, siendo el número de éstos, ocho: seis carreros propiamente dichos, es decir, encargados de llenar y descargar los carros, y dos chuceros cuya misión es tener siempre tierra o lastre listo para llenar los carros. La capacidad de cada carro es más o menos de doce metros cúbicos que los trabajadores cargan en cuarenta minutos. No hay para qué decir que el esfuerzo de estos hombres es colosal.

Apenas dada la señal de trabajo, empiezan a tirar paladas y más paladas sin levantarse, dínamos que son máquinas, que no tuvieran nervios humanos. Nadie habla, nadie muestra su cansancio. Se oye solo el chasquido de la tierra al caer y al ser desprendida por la pala; la respiración fatigosa, rítmica, con sabor a quejido del trabajador a quien ciega el sudor que cae abundantemente como lluvia de energías y se pierde en la tierra dominada.

Es un torneo anónimo de fuerza, de resistencia, en que cada cual trata de superarse”[3].

Si bien en la construcción del ferrocarril los trabajadores chilenos se destacaron

por su enorme capacidad física y su disposición al trabajo, distinta fue la situación cuando los trenes entraban en operaciones.

En efecto, como hemos adelantado, las faenas de operación requerían de una mayor calificación de la mano de obra, ya que la explotación de una línea comprendía variadas labores en estaciones, desvíos, bodegas, talleres de reparación, depósitos de máquinas, maestranzas y en el manejo del equipo rodante de máquinas y carros.

Por otra parte, la cantidad de trabajadores ocupados –al menos en una primera fase– disminuyó sustantivamente respecto de la etapa de construcción. Solo en la construcción del ferrocarril de Santiago a Quillota se ocuparon –como hemos visto– cerca de 10 mil trabajadores, siendo la mayor parte de ellos peones. Mientras tanto, algunos años más tarde –en 1875– las tres principales empresas ferroviarias del país* ocupaban aproximadamente a 3.600 trabajadores. A los peones aquí les estaban reservadas las tareas menores, como carga y descarga, reparación de vías y edificios, como aprendices en la maestranza, etc. Y esto porque carecían de conocimientos técnicos adecuados y de una experiencia laboral de tipo industrial.

De este modo, tanto los cargos técnicos directivos que ocupaban ingenieros como los cargos de maquinistas y mecánicos fueron –en la fase de operación– ocupados mayoritariamente por extranjeros.

Así tenemos entonces, como se aprecia en el cuadro siguiente, que en 1882, la composición de empleados del Departamento de Locomotoras y Maestranza del ferrocarril Santiago-Valparaíso era la siguiente:

	Extranjeros	Nacionales	Total	
Dirección	7	1	8	
Jefes de Taller	7	-	-	
Maquinistas	32	-	32	
Fogoneros	8	32	40	
Mecánicos	33	27	60	
Herreros	8	9	17	
Majadores	-	27	27	67,9%
Fundidores	1	4	5	
Carpinteros	8	45	53	
Caldereros	3	35	38	
Aprend. mec.	6	5	11	
Pintores	-	7	7	
Tapiceros	2	1	3	
Subtotal	115	193	308	
Peones	-	145	145	32,1%
Total General	115	338	453	

En porcentaje	Extranjeros	nacionales
Dirección técnica y obreros	37,3%	62,7%
Peones	-	100%
Total del departamento	35,3%	74,7%

Fuente: ANMI, vol. 974. Ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. “Nómina de los empleados del departamento de locomotoras y maestranzas en 25 de mayo de 1882”. Citado por Guajardo, Guillermo en Los trabajadores... ob. cit., pag. 1.

Los trabajadores nacionales debieron, en consecuencia, hacer un largo y costoso aprendizaje técnico para acceder a las formas industriales modernas que requería la operación ferroviaria.

Los peones tuvieron que empezar “desde abajo” en la limpieza de carros y locomotoras, en reparaciones menores, en los talleres y hacer carrera desde allí. A falta de institutos técnicos, por otra parte, este aprendizaje debió realizarse “in situ”; ahí en la faena y sobre la marcha. Haciendo amistad con un gringo dispuesto a compartir sus conocimientos; desempeñándose por algunos años como fogonero o aprendiendo de mecánico.

“Se reclutaban los ‘mecánicos’ entre los peones de talleres, lo cual permitía tener un trabajador barato que se iba formando con el contacto diario con su trabajo. Generalmente se empezaba de limpiador, raspando y puliendo el óxido de las piezas en reparación. De ahí pasaban a mecánicos aprendices, a fogoneros y algunos a maquinistas, mayordomos de maquinistas o jefe de máquinas, que eran los puestos máximos a los cuales podían ascender. Pero, a pesar de exigirse a esos niveles conocimientos prácticos y teóricos sobre el funcionamiento de las máquinas, muchos por su formación solo trabajaban con rudimentarios conocimientos”[4].

Otro tipo de trabajadores que pudieron acceder a los ferrocarriles eran los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. Sin embargo, éstos también encontraban sus propias dificultades, ya que la Escuela los formaba más como artesanos que como un obrero mecánico especializado.

Tanto los peones como los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios debieron vencer el dominio impuesto en los talleres por los jefes extranjeros. Estos, por cierto, contaban con salarios superiores y muchas veces se mostraban reacios a convertir a los trabajadores chilenos en sus alumnos o aprendices.

Con todo, junto al empeño personal que mostraban los trabajadores chilenos por aprender un oficio que los convirtiera en auténticos “obreros ferroviarios”, también los superintendentes –funcionarios estatales– que no dirigían directamente lo técnico, buscaron romper el predominio de los mecánicos extranjeros y favorecer la calificación de la mano de obra nacional.

Así, por ejemplo, en el Reglamento para Maquinistas y Fogoneros del Ferrocarril del Sur de 1865, se establecía que el maquinista estaba obligado a enseñar al fogonero a abrir y cerrar el registro del vapor, poner la palanca de cambio en marcha, conocer de las alturas del agua en la caldera, etc. También se le indicaba al maquinista que tuviera a cargo a un alumno de mecánica que debía ponerlo al corriente principalmente de la combustión, vaporización, alimentación y manejo de la máquina[5].

Los problemas de calificación de la mano de obra nacional persistieron prácticamente hasta las primeras décadas del presente siglo, a pesar de que algunos funcionarios insistieron en buscar medidas eficaces para enfrentar el problema. Por ejemplo, se propuso anexar la Escuela de Artes y Oficios a la Maestranza de Ferrocarriles y de ciertas coyunturas económicas críticas –como la crisis de 1874-75 o la Guerra del Pacífico– hubo que incentivar una acelerada capacitación de la mano de obra.

Con todo, el ferrocarril fue un sector estratégico en la proletarización de un importante segmento de trabajadores chilenos y no solo en relación a la industria del transporte, sino que también en relación a las industrias afines que éste

estimuló.

[1] Rivera Jofré, R. Reseña histórica..., ob. cit., pág. 93.

[2] Ibidem.

[3] Acevedo Hernández, A. Raza fuerte. Edic. Federación Obrera, Santiago, 1921 (la primera edición es de 1915). Págs. 104 y ss.

* Las principales empresas ferroviarias eran el Ferrocarril de Santiago a Valparaíso (FCSV), el Ferrocarril del Sur (FCS) y el Ferrocarril Chillán-Talcahuano(FCCT).

[4] Guajardo, ob. cit., pág. 13.

[5] Guajardo, ob. cit., pág. 14.

La industria metalúrgica

Tal fue el caso, destacado en su época, que alcanzó la industria metalúrgica. Diversos estudios acerca de los orígenes de la industrialización en Chile han coincidido en señalar a la metalurgia como un sector especialmente dinámico al punto de que, con anterioridad a la Guerra Civil del 91, se llegaron a construir en el país locomotoras y vagones de tren, puentes de metal, navíos, calderas, motores a vapor y diversas maquinarias y materiales para la agricultura, la minería y la industria.

Si se considera a la industria de fundiciones que surge junto a la minería del cobre y las maestranzas y otras empresas que se vieron estimuladas por el ferrocarril entre los años 60 y 70 destacan los siguientes establecimientos: la Compañía Chilena de Fundiciones de propiedad de Urmeneta y Errázuriz en Guayacán y Tongoy que ocupaban a 350 y 93 trabajadores, respectivamente; Las fundiciones Edwards, Lamben y de la Compañía Británica en Coquimbo y Ovalle, que en conjunto ocupaban a más de 400 trabajadores. En Valparaíso, por otra parte, destacaban Balfour & Lyon, propietarios de “La Victoria”, que ocupaba a 123 trabajadores, y “La República”, que ocupaba a 76 personas. En Santiago, también en 1876 se fundaron los establecimientos “Libertad” y “Nutken” y en Lota, por el sur, los Cousiño ocupaban a 450 trabajadores en la fundición de “La Compañía”.

Junto a estos establecimientos, con el ferrocarril adquirieron mayor relevancia las maestranzas, entre las que cabe destacar la del Ferrocarril de Caldera a Copiapó y la Maestrana del Ferrocarril Central, de propiedad del Estado y que se instaló en Valparaíso[1].

La Maestrana de ferrocarriles contaba con equipos y fuerza de trabajo

suficiente como para la mantención y reparación de carros y locomotoras así como de puentes y vías. A lo largo de la década del setenta “la capacidad de producción de esa maestranza fue aumentando mediante la incorporación de maquinarias de otras empresas públicas y compras de equipos en el extranjero ... en 1877 fundió 43.953 kg. de fierro sin forjar, 164.573 kg. de fierro fundido y 19.173 kg. de piezas de bronce. El proceso de expansión no solo se reflejó en el buen cumplimiento de sus funciones propias, sino también en una importante diversificación de su capacidad productiva, la que habría de ser de gran importancia al final de la década... al momento del inicio de la Guerra del Pacífico, la maestranza fue llamada a producir material bélico...”[2].

Semejante fue el caso de la Fundición Nacional, de propiedad del Estado, establecida en Limache en 1865. Esta empresa que originalmente fue fundada para producir material bélico, en el contexto de la guerra con España de 1865, tuvo un importante crecimiento y mostró una gran capacidad para diversificar su producción. A fines de la década de los sesenta ofrecía al público –mediante avisos en la prensa– servicios “en toda clase de fundición, herrería, caldería, mecánica, etc., a precios mui equitativos”. Dentro de sus ofertas figuraban para la venta “máquinas para curvar planchas, para tascar cáñamo, máquinas para sembrar trigo, máquinas pequeñas para segar pasto, prensas para pasto, trapiches para moler metales, turbinas, ventiladores, molinos para aceite, descansas de diferentes clases de fierro y de bronce, poleas, ruedas dentadas, coronas de rochete, cañerías de fierro... etc.”[3].

Por cierto que a estas alturas la Fundición de Limache más que atender las necesidades de la industria bélica –que también realizaba– estaba en mejores condiciones de atender pedidos de particulares para el desarrollo de la agricultura, la industria y la minería. Predominó, no obstante en el gobierno de la época, el criterio “liberal” poco proclive a que el Estado actuara como empresario. Así, por decisión administrativa la Fundición fue cerrada en 1874 por estimar el gobierno que no cumplía con los fines para lo cual fue creada y que otros establecimientos particulares podían cumplir con una función semejante a la de la Fundición.

En la Fundición de Limache se enfrentaron problemas semejantes al ferrocarril en relación a calificación de la mano de obra nacional. El personal más calificado, a cargo de las tareas más complejas estaba en manos de técnicos extranjeros. En este caso, se discutió también la posibilidad de trasladar la Escuela de Artes y Oficios de Santiago y anexarla a la Fundición.

Al Estado en realidad le fue difícil tomar decisiones eficaces en relación a la instrucción técnico-profesional. Mayor interés y eficacia, a este respecto, mostraron los propios trabajadores, en especial los artesanos. Tal fue el caso que se vivió en la propia fundición de Limache donde se fundó en 1868 una Escuela Nocturna, costeadada por los artesanos y dirigida gratuitamente por el ayudante mayor don Juan Nepomuceno[4].

La actitud ambivalente del Estado en relación a la formación técnico-profesional como respecto también de un apoyo más decidido a la industria fueron sin duda factores que atentaron negativamente para el desarrollo de este sector –el metalmeccánico– y la industria en general. En 1875, cuando el país vivía los efectos de una profunda crisis económica y la situación de los empresarios metalúrgicos era crítica, se negaron a participar de la “Exposición de las Artes y de la Industria”, programada para septiembre de ese año. Uno de sus representantes dirigió una nota al presidente del certamen en la cual expresó:

“Me apresuro a poner en conocimiento de Ud. que nuestra Casa, de acuerdo con las demás..., han resuelto no presentar en la próxima exposición ningún artículo manufacturado en nuestros talleres... paso que justifican dos poderosas razones... mal podemos nosotros entrar en competencia de precio con fabricantes extranjeros que tienen a su disposición capitales baratos, una salida segura y amplia para sus productos, y artífices expertos, en tanto que nuestra industria no goza de ningún crédito en la plaza, y tenemos que abarcar una fabricación más variada y por tanto menos económica, a la vez que atender a un largo aprendizaje de obreros nacionales.

A lo anterior podemos agregar que mientras la manufactura extranjera entra libre de derechos, nosotros tenemos que pagar derechos de aduana por casi todas las materias primas que consumimos.

El segundo motivo que nos impide asistir a un concurso tan desigual está en las difíciles circunstancias que atravesamos. El estado presente de nuestros negocios... no nos faculta para incurrir en los gastos que la preparación de artículos para la exposición demandaría, cuando la perspectiva de encontrar mercado para ellos es tan remota y nebulosa... Somos de Ud. atentos y seguros servidores. En nombre de las Casas de Santiago: Debonnaire y Lerov, Klein Hermanos, Müller y Montiguel; de Valparaíso: Thompson Borrowman, Cathill, Morrison y Ca., Lever y Ca., Costa e Hijos, Balfour, Lyon y Ca., Carlos Debonnaire”[5].

Es evidente que esta nota ahorra muchos comentarios. Allí estaban indicados los principales límites que encontró el proceso industrializador chileno, al menos en este rubro tan importante para incentivar y abastecer de máquinas y medios de producción a otras ramas de la industria.

[1] Un cuadro completo de las industrias metalmeccánicas describe Luis Ortega en *Acerca de los orígenes...*, ob. cit., págs. 30 y 31.

[2] Ortega, ob. cit., pág. 35.

[3] Arredondo y otros autores en *Aproximaciones...*, ob. cit., pág. 269.

[4] Arredondo ob. cit., pág. 105.

[5] Citado por Arredondo ob. cit., págs. 279 y 280.

Otros establecimientos industriales

Con anterioridad a la Guerra del Pacífico y también luego de ella, otro conjunto de industrias alcanzaron desarrollos significativos, especialmente en los rubros de alimentos y textiles.

En 1876, entre las fábricas de aceite comestible destacaba el establecimiento de Manuel Delpiano, que empleaba a 33 personas y producía 25 mil galones al año, la Refinería de Azúcar de Viña del Mar—fundada en 1870— y que cinco años más tarde producía 4.800 toneladas de azúcar fina y que trabajaba, a estas alturas, en forma continuada las 24 horas del día con cuadrillas de 75 operarios en cada turno. Algunas panaderías se habían mecanizado también en estos años y comenzaba a usar máquinas a vapor. La industria molinera, por su parte, prosperaba en las ciudades de Talca y Valparaíso.

En la industria textil, la fábrica de Paños Bellavista Tomé y la Fábrica de Paños El Salto de Santiago constituían los principales establecimientos industriales del ramo[1]. Este último establecimiento se especializó en la producción de telas para el Ejército, por lo que en los años de la Guerra del Pacífico entregó abundante material para el vestuario militar. Elaboraba también casimires y paños para ropa civil y diversos productos, como mantas, frazadas, chalones. En 1883 funcionaba con una turbina “lefel”, que podía desarrollar hasta 50 caballos de fuerza y con un caldero tubular de fuerza de 10 HP[2].

Junto a esta vertiente de industrialización, la mayor parte de ella surgida por iniciativa de ingenieros extranjeros avencidados en el país, hay que considerar las artesanías de mayor tradición y al empresariado popular que constituía

también un dinámico sector en la producción de bienes alimentarios y de vestuario popular.

Así tenemos que en la producción de lanas y vestuario, realizado principalmente por las mujeres del pueblo, se contabilizaban todavía hacia mediados del siglo, 85.084 hilanderas y tejedoras, a pesar de que ya en estos años había impactado el flujo de importaciones textiles procedentes de Europa. Este oficio de la mujer popular tendió a disminuir en los años siguientes como producto de las importaciones y de la competencia interna de tipo industrial. Creció, sin embargo, el número de costureras independientes y también el de aquellas que fueron contratadas a domicilio primero y luego proletarizadas por la naciente industria textil. En efecto, mientras que en 1854, se contabilizaban 63.518 costureras, en 1895 llegaban a 129.330[3].

La industria popular

La producción popular tendió a diversificarse en la segunda mitad del siglo como producto de las corrientes migratorias campo-ciudad y de la escasa capacidad de integración laboral (y espacial) que mostraron las ciudades chilenas. Los censos nacionales consignaron estas realidades mostrando un significativo aumento de los artesanos que, como ya hemos visto en el capítulo primero, llegaron a representar –en 1854– el 29% de la clase trabajadora[4]. Aumentó también la importación de herramientas y maquinarias para artesanos, de tal modo que entre 1844 y 1853 llegó a representar el 28 del total de máquinas y herramientas importadas[5].

Se trataba, por cierto, de una producción a pequeña escala, realizada en talleres rústicos y pobremente equipados donde laboraban 3 a 4 personas, normalmente familiares. En Santiago, destacaban las fábricas de almidón de la zona poniente de la capital; las fábricas de jabón y velas de la zona sur y un sinnúmero de

talleres (fábricas) como carpinterías, tornerías, curtiembres, fábricas de aceite, cervezas, tejas, ladrillos, herrerías, marmolerías, molinos de trigo, mueblerías, platería, dulcerías, panaderías, etc. Entre todas estas “industrias” destacó la producción textil que tuvo un centro muy significativo en la provincia de Maule:

“El centro de la producción textil popular parece haber sido la provincia de Maule. El Censo realizado en esta provincia en 1844 –el único que se completó– indica que existían en ese año 8.841 ‘fábricas y talleres’, de los cuales 7.975 (87) correspondían a ‘hilanderías y telares’, que eran operados por 12.409 trabajadoras. Según los funcionarios de la Intendencia de Maule, el valor anual de lo producido por las hilanderas y tejedoras alcanzaba a la suma de \$ 225.000 de 45 d”[6].

Las tejedoras de Maule, al igual que en otros lugares del país, producían alfombras, ponchos y frazadas; ceñidores, esteras, medias, bayetas, huinchas, telas de cañamoy lino; etc.

Por su parte, en los astilleros de Constitución, la producción de diversos tipos de embarcaciones (barcas, goletas, lanchas y botes) alcanzó también una producción importante, sobre todo en la etapa anterior al de la industria de fundiciones. En estas tareas de desempeñaban principalmente carpinteros y calafateros.

Estos centros de producción popular ejercían evidentemente un gran atractivo sobre los hombres del pueblo, de tal modo que se concentraba en ellos una importante cantidad de trabajadores dispuestos a ejercer cualquier oficio y alcanzar de este modo su sustento. Tal es el caso que denuncia Vicente Pérez Rosales, en 1853, en relación a los astilleros de la ciudad de Puerto Montt:

“...a estos astilleros concurre toda clase de jentes, tanto del territorio de la

colonia como de los departamentos de Chiloé, a cuya sombra acuden vagos, ebrios, jugadores, hombres perseguidos por la justicia, etc... a la gran feria del corte de maderas en el Sur... no está demás el que V.S. se sirva tener presente que a los astilleros de la boca denominada del Este, a los de Coygüin i Puerto Montt no concurren menos de 3.000 trabajadores...”[7].

La actividad productiva popular no era menos significativa en los barrios de las principales ciudades del país. Tal era el caso, por ejemplo de los “mataderos particulares” de los cuales en 1844 en Santiago había 15 en la Cañada del Colegio San Miguel, 9 en la calle San Diego y 9 en la calle atravesada de San Miguel a Yungay. En total en la ciudad había 66 de estos establecimientos.

La industria y la producción popular, bastante dinámica hacia mediados del siglo, tendió a declinar en las décadas siguientes, como producto de la competencia que significó la industria a cargo de los ‘ingenieros extranjeros’; una ley de patentes francamente desfavorable y la ausencia de políticas económicas que estimularan esta producción. Al contrario el librecambismo dominante en las élites dirigentes del país hizo que tanto los artesanos como los trabajadores populares independientes reclamaran una mayor protección para la industria y la producción nacional. Este conjunto de obstáculos que limitaron las capacidades de la “industria popular” no fue obstáculo para que persistiera entre los sectores populares una fuerte vocación productivista –que se hizo notar entre los artesanos por ejemplo en la segunda mitad del siglo– en oposición a la tendencia mercantil predominante en la élite.

En conjunto, las diversas actividades productivas y laborales en que se desarrollaron los sectores populares en el siglo pasado, tuvo como consecuencia una enorme heterogeneidad en su composición social. En efecto, como hemos visto hasta ahora, muchos de ellos persistieron en formas de trabajo independiente en la producción y en el comercio; otros deambulaban como peonaje itinerante; otros fueron “enganchados” para las faenas mineras y persistieron como peones o evolucionaron hacia formas proletarias modernas; otros hicieron un largo proceso de calificación de sus capacidades en la naciente

industria; otra mayoría subsistió trucando de un oficio en otro a través de toda su existencia. La mayoría, sino todos, compartieron precarias condiciones de vivienda en los denominados campamentos mineros o en los barrios pobres de las grandes ciudades del país.

La minería del salitre

Veamos finalmente una de las mayores vertientes de proletarización que se verifica en el último cuarto del siglo pasado: nos referimos a los trabajadores del salitre.

La historia de la pampa salitrera se halla asociada en la conciencia nacional popular a dos grandes sucesos: la Guerra del Pacífico y más tarde, el surgimiento del movimiento obrero clasista en nuestro país.

Y probablemente no pueda ser de otro modo, ya que efectivamente fue la guerra la que sancionó la integración al territorio nacional de las dos grandes provincias salitreras: Tarapacá y Antofagasta. La guerra, como suele ocurrir la mayoría de las veces en la historia, tuvo importantes causas económicas; algunas de coyuntura y otras que venían preparándose desde tiempos más largos.

Los hechos más relevantes anteriores a la guerra quizás puedan resumirse en dos: el negocio de habilitación minera (es decir, las inversiones de capitales chilenos), que ya era muy sustantivo tanto en Tarapacá como en Antofagasta, y el aumento de la población nacional en estas provincias; la primera peruana y la segunda boliviana.

Respecto del negocio de habilitación minera, Billinghamurst indica que el mercado del nitrato se incrementó a partir de la guerra europea de 1870 y que ya en esta época Iquique y Pisagua contrajeron fuertes deudas con el mercado de Valparaíso. Se formaron también en estos años sociedades anónimas con capitales que iban de 200 mil a medio millón de pesos, de tal modo que el mercado financiero de Valparaíso se hallaba representado desde 1870 en adelante, en Tarapacá, en unos \$6.200.000[8].

Pero el salitre no solo atrajo a los inversionistas chilenos, sino también a una significativa cantidad de peones y otras categorías de trabajadores que se fueron instalando en la región salitrera. En el caso de la provincia de Tarapacá, de acuerdo con el censo levantado por los peruanos, en 1876 había 38.226 habitantes. De ese total 17.013 eran peruanos y 9.664 eran chilenos. Iquique, por su parte contaba con la mayor cantidad de nacionales: 6.048 eran chilenos y 4.429 peruanos. En el caso de Antofagasta, la situación era aun más pronunciada. En el Censo levantado por la Municipalidad de esta ciudad en 1857 se estableció que de los 5.384 habitantes, 4.530 eran chilenos y 419 bolivianos. Y, en el mineral de Caracoles, ubicado en la región, la mayoría de los trabajadores eran también chilenos[9].

Y en la coyuntura inmediatamente anterior a la guerra pesó fuertemente la crisis económica europea, que afectó tanto a la economía chilena como a la de los países vecinos. En el caso chileno, en estos años cayeron las exportaciones de cobre y plata, los bancos se mostraron insolventes y la agricultura también se vio seriamente afectada.

Por otra parte, el gobierno peruano, que había procedido a la nacionalización del salitre, se mostró también pronto insolvente, con lo que se benefició la provincia de Antofagasta, donde a estas alturas existían los mayores intereses chilenos. La aplicación de un impuesto por parte del gobierno boliviano, finalmente, fue la chispa que encendió los ánimos y sirvió como pretexto para el inicio de la guerra.

El triunfo militar tuvo muy pronto dos consecuencias económicas de importancia: se incrementó considerablemente el presupuesto nacional como producto de los ingresos provenientes del impuesto a la exportación salitrera y se afianzó el capital inglés en la pampa. Como demuestra el historiador Hernán Ramírez, las rentas fiscales ordinarias que en 1879 eran de \$15.396.568 subieron a \$26.410.417 de 30 peniques de 1880, para llegar a \$53.202.548 de 24 peniques en 1890. Y, por cierto que creció también el comercio de exportaciones e importaciones[10].

Por su parte, el predominio inglés se hizo también notar pronto a través de los negocios de John Thomas North, conocido en la época como el “rey del salitre”. Este inglés negoció hábilmente con la compra de bonos salitreros en el Perú en el período de mayor depreciación y gracias a sus conexiones con el mercado financiero de Valparaíso, logró convertirse en el principal empresario salitrero.

La explotación del salitre concentró una importante cantidad de trabajadores en actividades directamente vinculadas a la extracción y procesamiento del nitrato y también en las denominadas tareas auxiliares, como transportes, obras portuarias, oficios mecánicos y artesanales, etc. En la extracción y elaboración del salitre laboraban 7.124 trabajadores en 1882. Esta cifra, subió a 13.060 en 1890; 20.264 en 1901; a 30.600 en 1905, llegando a su peak en 1913, con 53.161 trabajadores en faenas[11].

Estos trabajadores gruesamente realizaban las siguientes tareas:

a) Faenas de extracción del salitre: Laboran aquí barreteros, particulares, carreteros y otros, b) Faenas de transformación y elaboración del salitre y sus derivados: Este trabajo se conocía como el de “la máquina” y lo realizaban acendrados, desripiadores, canaleros, canchadores, etc., c) Faenas auxiliares: se incluyen aquí las tareas propiamente industriales realizadas en maestranzas y

talleres de “la Oficina”: Comprendía a herreros, mecánicos, carpinteros, fundidores, etc.[12].

Respecto de los trabajadores asalariados no salitreros, que también eran numerosos, no tenemos información precisa. En todo caso, hacia 1912, se estima que habrían llegado a unos 10 mil, desempeñándose sobre todo en actividades portuarias, de artesanías y servicios en los principales puertos salitreros. Entre todos ellos se podían distinguir diversas categorías de trabajadores y oficios: trabajadores de aduanas, de bodegas almacenadoras de salitre, trabajadores portuarios, como lancheros y cargadores; trabajadores industriales, trabajadores de talleres de carpintería, de la construcción, del ferrocarril, etc.

El régimen de salarios, por su parte, se hallaba diferenciado de acuerdo a las formas laborales genéricas del área salitrera. Así se podían cancelar trabajos “a destajo”, “a tarea” y por “jornada”. En el primer caso –trabajo a destajo– el monto del salario estaba regulado por la capacidad de producción directa del trabajador, es decir la capacidad física que podían realizar carreteros y barreteros, por ejemplo. El trabajo “a tarea” constituía una forma intermedia entre el denominado “a destajo” y “a jornal”. Estaba regulado por la cantidad de trabajo diario o tarea mínima que un trabajador podía realizar. En esta categoría podían caer los carreteros de la pampa y también los desripiadores y canchadores que laboraban en “la máquina”. Finalmente el salario “a jornal” era el que se les cancelaba a los trabajadores de las tareas auxiliares: herreros, carpinteros, mecánicos, etc. Demás está decir tanto el denominado “trabajo a destajo” o “a tarea” constituían las formas máximas de explotación, por cuanto su determinación es inversa al grado de desarrollo tecnológico de las faenas y el trabajador, en consecuencia, solo puede incrementar sus ingresos aumentando su esfuerzo físico para mejorar su rendimiento productivo[13].

Respecto de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros del salitre, se sabe que representaban variados problemas. Estos provenían no solo de las condiciones geográficas adversas de la región, sino que además del sistema de pago de los salarios –fue en estas explotaciones donde mayor extensión alcanzó

el sistema de “ficha-salario”; de las trabas que ponían las compañías a la libertad de comercio –los trabajadores estaban obligados a adquirir sus productos en la pulpería–; de los peligros que implicaban ciertas faenas –fue por ejemplo reiterada la denuncia para poner rejas protectoras a los “cachuchos” (hornos metálicos en que se procesaba el caliche)–; de las condiciones de vida en los campamentos –estos estaban débilmente equipados, amén de que debían soportar una alta densidad de población.

Si a esto sumamos que muy pronto, después de la Guerra, los empresarios del salitre descubrieron la necesidad de “combinarse” para hacer frente a las crisis y acordaron, en consecuencia montos de producción, precios, salarios, etc. Y todo ello, frente a la más completa desprotección de los trabajadores (considérese que a la fecha no existía ningún tipo de legislación laboral de parte del Estado). En fin, fueron todas estas causas suficientes para que en la pampa empezara a cundir el “malestar” entre los obreros.

Y así hubo de reconocerlo la primera Comisión Consultiva, creada por el gobierno, que visitó la zona del salitre en 1904. Según esta Comisión los salarios eran elevados en relación a los que se pagaban en la zona central del país y los peligros en las faenas no eran menores que los que enfrentaban otros trabajadores en otras regiones. En suma, según estableció esta Comisión: “Faltan a primera vista causas eficientes de una cuestión social perturbadora de la pampa salitrera”. Con todo, la Comisión tuvo que registrar el hecho de que los trabajadores manifestaban “malestar”:

“Muchos obreros se quejan con insistencia de que su condición material es poco holgada, a pesar de los elevados salarios que reciben. Se quejan del monopolio del comercio ejecutado exclusivamente por los patrones en las pulperías de su propiedad; cuyos artículos son malos o alterados en peso y medida; de la emisión de fichas o vales que solo les habilitan para adquirir sus consumos en dichas pulperías a precios demasiado altos, o que son cambiados con descuentos en el caso de haberlos usado como moneda para adquirir mercaderías de comerciantes extraños. Se quejan también de las hostilidades de que son

víctimas por el hecho de comprar a estos últimos; de la mala o deficiente administración de justicia que no alcanza a corregir las injusticias que sufren ni a reparar sus agravios; de la insalubridad de las habitaciones, y en fin de otros abusos que parecería inoficioso enumerar”[14].

Habría sido probablemente mucho más “oficioso” que la Comisión de 1904 enumerara las quejas que fundamentaban el malestar obrero, ya que solo dos años más tarde, en 1906, se produciría una importante manifestación de protesta popular en Antofagasta, y en 1907, la más significativa movilización obrera en Iquique, que culminaría de modo cruel y sangriento.

En verdad, en ambos casos, el malestar y la protesta fueron acalladas con violencia y represión. Ello vino a poner de manifiesto no solo que la cuestión social “existía”, sino que además, un modo tremendamente irracional y agresivo de la élite para enfrentar los problemas sociales que comprometían a la sociedad chilena al comenzar el siglo. La protesta de principios de siglo, contra lo que se ha creído no fue solo obrera, sino que involucró a los más diversos sectores populares, y antes que el norte salitrero, tuvo sus estallidos en Santiago y Valparaíso.

[1] Un estudio completo de la industria por rama de la producción, con anterioridad a 1879, se encuentra en el trabajo ya citado de Luis Ortega Acerca de los orígenes...

[2] Espech, Ramón. Colección de artículos encaminados a demostrar la necesidad de crear manufactura nacional y los medios de conseguirlo. Tomo I, Imprenta Victoria, Santiago, 1877, pág. 144.

[3] Salazar, Gabriel. Labradores, pág. 285.

[4] Salazar, Gabriel. El movimiento popular de industrialización en Chile (1830-1885). Santiago, 1989, inédito, pág. 7.

[5] Salazar, Gabriel. El movimiento popular de industrialización en Chile (1830-

1885), pág. 8.

[6] Ibidem.

[7] Salazar, Gabriel. El movimiento popular de industrialización en Chile (1830-1885), pág. 11.

[8] Billingham, Guillermo. Estudio sobre la geografía de Tarapacá (páginas de un libro). Trabajo escrito para El Ateneo de Iquique. Santiago, Imprenta El Progreso, 1886. Citado por Reyes, Enrique en El desarrollo de la conciencia proletaria en Chile. El ciclo salitrero. Coedición Orbe, Santiago y Universidad del Norte, pág. 59.

[9] Reyes, Enrique. El desarrollo de la conciencia proletaria en Chile. El ciclo salitrero. Coedición Orbe, Santiago y Universidad del Norte, pág. 53.

[10] Ramírez, Hernán, ob. cit., pág. 178.

[11] Reyes, ob. cit., pág. 73.

[12] Reyes, ob. cit., págs. 77 y ss.

[13] Una descripción completa de faenas y salarios en Reyes, ob. cit., págs. 82 y ss.

[14] Reyes, E., ob. cit., sección documentos, págs. 131 y ss.

Capítulo cuatro

La cuestión social y la protesta popular

“Mientras tanto que la prensa i la
autoridad niegan la existencia de la
cuestión social, ella sigue su curso sin que
la fuerza ni nada pueda detenerla. Ella sacude
al pueblo, lo despierta. Lo ajita i lo nace
entrar en la lucha, ella va penetrando
por todas partes como el agua que busca
el vacío; hablándole al productor sobre sus
derechos usurpados i sobre sus conquistas.

A su fuerza de convicción no le resisten las
ambiciones políticas, fanatismos y prejuicios.

Es por eso que jermína ya en el pueblo...

I tómesese en consideración que su
propaganda casi se debe únicamente al
elemento jenuino, nativo del pueblo, i no al
elemento extranjero, cómo se ha dicho

en la prensa”

Diario Jerminal
, Stgo., 26 de abril de 1904.

La Comisión Consultiva de gobierno que visitó la pampa salitrera el año 1904

reconoció causas suficientes para que existiera “malestar” entre los trabajadores nortinos. Sin embargo, ello no autorizaba para diagnosticar—como señaló la Comisión— que se verificara en la región “lo que propiamente entiende la economía política por cuestión social”.

Para Santiago y Valparaíso, sin embargo, o para Lota y Coronel, no se requerían “Comisiones Consultivas” para saber si existía o no “malestar” entre los trabajadores y menos aun para reconocer si existía o no la “cuestión social”. En realidad cualquier observador independiente podía apreciar el asunto simplemente porque aquí la pobreza era indisimulada y se manifestaba en extendidos arrabales y conventillos, en condiciones sanitarias y urbanísticas subhumanas, en epidemias difíciles de conjurar, en subempleo y desempleo abierto, y en estos mismos años, en una creciente inflación que empeoró las condiciones de subsistencia popular.

Al cambiar el siglo, la sociedad popular enfrentaba, en realidad, una de sus más agudas crisis históricas. Se agotaban, por una parte, los caminos de subsistencia peonal cuando fue perdiendo sentido emigrar a las fiebres de oro que tocaban ya su fin. Por otra parte, las condiciones de vida en las grandes ciudades se habían francamente deteriorado en los conventillos de 1900.

La situación no era más favorable para los artesanos, que difícilmente prosperaban como producto de la creciente competencia industrial y la débil o casi nula protección estatal. Compartían, en consecuencia, los artesanos, progresivamente la suerte de los más pobres. Los sectores obreros, finalmente, si bien crecían en número en importantes establecimientos mineros e industriales, no veían satisfechas sus demandas para alzar sus salarios, fuertemente deprimidos como producto de la inflación, y no se abrían tampoco espacios ni condiciones mínimas para negociar con sus patrones.

Había en consecuencia, razones suficientes para que se extendiera el malestar entre los sectores populares, y más todavía si se considera que el ciclo salitrero

había significado un incremento importante de los negocios y del consumo de la élite. Con todo, la élite por mucho tiempo todavía, prefirió atribuir los síntomas de malestar al impacto de la propaganda anarquista y socialista, es decir, a las “ideas perturbadoras del orden social” que iban ganando espacio –”como el agua que busca el vacío”– entre los obreros, los artesanos y entre los elementos cultos y empobrecidos de la clase media.

Para la élite era mucho más fácil no ver y no escuchar y confiar todavía en el “Estado en forma”, es decir en ese Estado “de derecho” afanosamente construido a lo largo del siglo XIX. Muy articulado en la superestructura y bien conectado al mercado internacional, pero con una débil e insuficiente legitimidad social en la base, sobre todo en la popular. Es que en realidad se trataba de un “Estado en forma” más para sí mismo que para el conjunto de la nación. Ello por cierto era un problema muy difícil de reconocer, no solo porque la élite se sentía y se proclamaba a sí misma la mejor expresión de la nación, sino porque además reconocerlo tendría que haber significado emprender una reforma sustantiva del Estado, para hacerlo efectivamente nacional.

Era entonces más fácil persistir en los formalismos legales y academicistas: en la región salitrera y en Chile, dirían también muchos, no existe “lo que propiamente entiende la economía política por cuestión social”. La cuestión social, sin embargo, no quedaba resuelta con este tipo de sentencias. En efecto, ella ya se había manifestado como protesta social en 1890, a través de la huelga minera y portuaria que debió enfrentar el gobierno de Balmaceda y se volvería a manifestar –al cambiar el siglo– con mayor regularidad e inusitada fuerza en la huelga marítima de Valparaíso, en las protestas populares de Santiago en 1905, en Antofagasta en 1906 y finalmente –cerrando este ciclo de manifestaciones populares– en Iquique, en 1907.

En todos estos casos, la “cuestión social” fue enfrentada recurriendo al expediente de la fuerza, o sea a la represión lisa y llana de los movimientos de protesta popular. La represión, como bien sabemos los chilenos, por una experiencia histórica directa, reiterada a lo largo del siglo XX, no es más que la

confesión de una carencia de legitimidad social y política de los sectores dominantes de la sociedad. Es el intento de disciplinar a la sociedad – particularmente a la popular– ya no por la vía del consenso y la negociación, sino que por la vía del silenciamiento y de su negación como interlocutor. De este modo, en los primeros años del siglo, a pesar de que no se reconocía la existencia de la “cuestión social” fue necesario recurrir al lenguaje metálico de las ametralladoras y los sables para intentar demostrar que la cuestión social efectivamente “no existía”.

La primera década del siglo XX chileno, es, en este sentido, tremendamente paradigmática. En efecto, ella puso de manifiesto la precariedad del Estado nacional para hacerse cargo de los problemas “nacional-populares” (fundamento último de la nación) y evidenció, por otra parte, la decisión “social y política” de las clases populares para enfrentar de modo colectivo la resolución de sus problemas “económicos y sociales” más apremiantes.

En la primera década del siglo, teniendo como telón de fondo el empobrecimiento de las condiciones de subsistencia popular, opresores y oprimidos se terminaron de descubrir y de reconocer; unos y otros hicieron evidentes sus disímiles identidades, largamente construidas a lo largo del siglo XIX, y tanto los unos como los otros agudizaron la lucha de clases. Los movimientos sociales populares esbozaron, en este proceso, sus primeros proyectos políticos de largo aliento.

La prensa conservadora de principios de siglo destacó el hecho de que las ideas anarquistas ganaban prestigio y “mal aconsejaban” a los obreros y a los “pobres sin cultura”. Y llamó también la atención sobre las acciones vandálicas y “vergonzosas” que protagonizaron los más pobres. Reconoció, es cierto, la “justicia” de algunas de las demandas de los trabajadores y la necesidad de que el Estado interviniera en los asuntos económicos y sociales. Criticó también a algunos empresarios para que se abrieran a un mayor diálogo con sus trabajadores. Pero la verdad sea dicha: no encontró mayor eco en los círculos del poder.

Si la protesta social no fue el producto únicamente de las ideas anarquistas, que ciertamente ganaron en extensión y prestigio entre el “elemento jenuino” y “nativo del pueblo”, fue entonces el producto de una nueva situación histórica – particularmente crítica– a la que se debieron enfrentar los sectores populares.

La protesta obrera y popular de 1903-1907 fue quizás la manifestación más aguda de que en el país las cosas no marchaban bien. Y hubo muchas voces – además de las que se expresaron como huelgas y estallidos populares– que denunciaron y llamaron la atención sobre la situación que se vivía al cambiar el siglo. Recabarren, por ejemplo, saltó a la palestra con motivo del Centenario para decir que había pocos motivos para las fiestas entre los sectores populares, y el doctor Julio Valdés Cange, en agudas cartas dirigidas al Presidente de la República por estos mismos años, puso todos los puntos sobre las íes: En Chile la distancia entre ricos y pobres se hacía cada vez más insoportable.

En este contexto la cuestión social no solo se manifestó como protesta, sino que también como el más significativo esfuerzo de organización popular. Este, asentado sobre tradiciones mutualistas –en cuanto a la auto-organización– y tradiciones peonales –en cuanto a su distancia y oposición al Estado oligárquico– dio lugar a un movimiento popular con marcados rasgos de autonomía.

Por ello, quizás no deba extrañar que importantes sectores populares chilenos abrazaran el ideario anarco-sindicalista. Este, como veremos, enfatizaba en la libertad, en el anti-autoritarismo y particularmente en el protagonismo histórico de los “productores”, es decir, de los propios trabajadores. Tampoco debe extrañar que los trabajadores, bajo las condiciones de un Estado liberal y financiado por las exportaciones salitreras, confiaran más en sus propias fuerzas que en la acción social del Estado, que por cierto también demandarían. Así lo revela, entre otros, el tipo de organización popular que germinó entre los trabajadores, centrándose unas veces en la organización de la solidaridad, y otras

tantas en la “acción directa” para lograr la satisfacción de sus demandas.

Los movimientos sociales populares de principios de siglo tendieron rápidamente a politizarse, como producto del protagonismo que alcanzaron y de las oposiciones que encontraron en la sociedad de la época. Al hacerlo, rechazaron la política de los partidos denominados “históricos” (conservadores, liberales, radicales, etc.). Y con razón, pues estos eran mayoritariamente los partidos de la élite. Debieron, en consecuencia, avanzar en la configuración de una política propia, es decir, de una “política popular”.

Esta política popular, que se abrió paso al cambiar el siglo, fue el producto de la acción organizativa, reivindicativa y de protesta que protagonizaron los propios actores sociales. Fue también el producto de diversos centros sociales y de ilustración obrera; de la constitución de una corriente al interior del partido demócrata que buscó “socializar” su política; de la nutrida actividad desplegada por la prensa obrera para denunciar las injusticias de que eran víctima los productores y proclamar los nuevos ideales sociales. Como resultado de este proceso surgieron también los primeros partidos populares.

Configurar una “política popular” no era por cierto una tarea sencilla, ya que a medida que crecía “el malestar” en el pueblo, se extendía la huelga y la protesta y crecían también las organizaciones, los problemas se hacían más complejos. En efecto, el movimiento popular al politizarse debía avanzar en tareas que se verificaban en el campo propio (organización y educación fundamentalmente) con el objeto de autofortalecerse, pero al mismo tiempo tenían necesidad de proyectar su movimiento al conjunto de la sociedad, con el objeto de producir cambios en ella.

Y muy pronto se comprobaría que los cambios, sobre todo en el ámbito económico y social, suponían no solo hacer expresiva su protesta (la agitación social), sino que arribar también a un nuevo orden social y que ello no sería posible si las fuerzas populares no eran lo suficientemente autónomas y fuertes.

Se empezaba a constituir de este modo la cuestión principal de una estrategia y una política popular: los cambios solo son posibles si las fuerzas populares son poderosas. Este principio, en términos generales, orientó la acción social y política popular en los inicios del siglo. Por ello, su principal mérito quizás sea el haber inaugurado muchas formas para hacer política desde la base popular.

¡La cuestión social existe!

Cuando la élite se aprestaba a celebrar el Centenario de la República, la situación económica y social de los sectores populares había empeorado en tal grado que se hacía exasperante. Por esta razón Recabarren en su famoso Ricos y pobres, luego de describir el estado de la “última clase de la sociedad que constituye probablemente un tercio de la población del país, es decir más de un millón de personas”, se preguntaba si se podía “asociar al pueblo” a los regocijos del primer centenario”[1].

El hecho más contundente, la distancia entre ricos y pobres, lo hacía notar también el doctor Julio Valdés Cange en sus Cartas al Presidente:

“La impresión más viva que recibe el viajero observador al estudiar nuestra organización social, es la que produce el contraste entre la jente adinerada i la clase trabajadora; porque en Chile hai solo dos clases sociales, ricos i pobres, esto es, explotadores i explotados; no existe la clase media: los que no somos ricos ni menesterosos i aparentemente formamos el estado llano, somos jente de tránsito, salida del campo de los explotados i en camino para el de los opulentos”[2].

Por su parte, el dirigente popular Alejandro Escobar Carvallo, en sus memorias reconoce también que la situación de los pobres al finalizar el siglo había empeorado. En efecto, Carvallo indica que en los años de la revolución del 91 la situación general del país “era relativamente próspera” y que el costo de la vida en las ciudades “sumamente bajo” a pesar de que los salarios eran también bajos. Sin embargo al finalizar el siglo, el cuadro económico y social se había modificado negativamente.

A las diversas clases y capas sociales nacionales “las distanciaba una atmósfera de incompreensión de impermeable orgullo y de retraimiento recíproco. Esta atmósfera se hacía más densa en escala descendente, hasta llegar a pesar como un manto de plomo sobre el nivel inferior de la clase obrera y campesina”[3]. Para este último nivel, el de los más pobres, según el mismo testimonio de Carvallo, la situación era ruinosa “pues en las clases bajas no existía porvenir para las nuevas generaciones”.

Los artesanos, por su parte se hallaban en pleno proceso de proletarización, manteniendo “sus pequeños talleres” o incorporándose “a la maestría asalariada de las fábricas, que ya comenzaban a extender su red industrial en la zona central del país permitiendo la formación de una vasta clase obrera industrial”[4].

Recabarren, por su parte, al realizar su balance de 100 años de vida republicana reconoce el siguiente cuadro social:

“La clase capitalista, o burguesa, como le llamamos (que) ha hecho evidentes progresos a partir de los últimos 50 años, pero muy notablemente después de la guerra de conquista de 1879 en que la clase gobernante de Chile se anexó a la región salitrera”.

(...)

“La última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810... En cuanto a su situación moral podríamos afirmar que en los campos permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más... La última clase de la sociedad... no ha adquirido ningún progreso evidente en mi concepto digno de llamarse progreso”.

(...)

“(La clase media) ha ganado un poco en su aspecto social y es la que vive más esclavizada al qué dirán, a la vanidad y con fervientes aspiraciones a las grandezas superfluas y al brillo falso. Debido a estas circunstancias que le han servido de alimento, esta clase ha hecho progresos en sus comodidades y vestuario, ha mejorado sus hábitos sociales, pero a costa de mil sacrificios...”[5].

Pero ¿cuáles eran los hechos concretos que fundamentaban tan negativas percepciones en Recabarren, el doctor Valdés Cange o Alejandro Escobar, sin abundar todavía en las reiteradas denuncias que se hacían desde la prensa obrera de la época?

La vivienda popular

Ya hemos indicado que en la segunda mitad del siglo XIX las principales ciudades del país y en particular Santiago, fueron testigos de una constante migración campesino-peonal*. En los años setenta “la ciudad crecía casi

diariamente” y en los años setenta Vicuña Mackenna llamaba la atención de la opinión pública y de los concejales municipales indicando que convivían en Santiago prácticamente dos ciudades: la “ciudad propia”, es decir la de la élite, y la “ciudad bárbara”, es decir la popular.

El Intendente Vicuña Mackenna tomó medidas que sin duda transformaron la geografía urbana de la capital, pero no fueron capaces de conjurar el explosivo crecimiento de la capital y todas las secuelas sociales –en vivienda, salud, etc.– que este crecimiento implicaba. En efecto, hacia fines del siglo, las condiciones de la vivienda popular se habían hecho más críticas y las iniciativas políticas de parte del Estado para enfrentar esta situación eran tremendamente ineficientes y de escasa magnitud, como también lo era la acción caritativa o filantrópica, en la que todavía confiaba Vicuña Mackenna, en los años 70.

Según Eyzaguirre y Errázuriz, tanto en el campo como en la ciudad la propiedad de los trabajadores sobre sus viviendas “apenas existe”. Según estos informes, en el campo como en las minas es frecuente el sistema de “vivienda en préstamo” mientras trabajan en el predio o la mina. En las ciudades, por su parte, el sistema dominante es el arriendo por mensualidades[6]. Y en el sistema de arriendo mensual, la forma de vivienda popular más extendida era el conventillo. Este surgió tanto del aglutinamiento de los viejos “ranchos” campesinos instalados ahora en la ciudad como del subarriendo de antiguas casas patricias. En este último caso, como indica Gonzalo Vial, quienes habitaron estas casas fueron víctimas de la necesidad y también de la codicia de quienes practicaban el negocio del subarriendo. Las viejas casonas de la élite –de hasta tres patios– ahora se sobrepoblaron:

“Tres, cuatro, hasta ocho personas ocupaban una pieza. El agua que daban uno o dos pilones de aquellos patios fue ardorosamente disputada. Los servicios higiénicos –ya escasos y rudimentarios cuando solo eran empleados parsimoniosamente por los pocos habitantes primitivos de la residencia– presentaban ahora un espectáculo de pesadilla. Puertas, chapas, ventanas, vidrios, pinturas, papeles, cielos, entablados, baldosas... todo fue destruyéndose,

inutilizándose, desapareciendo; cuarteándose las murallas; rompiéndose tejas, techos, desagües. Reinaban la oscuridad y la fetidez. No se subsanaba ningún desperfecto. Pues comúnmente el dueño de la casona la había dado en arrendamiento a un intermediario, conociendo muy bien el objetivo de aquél y, por ende, cobrando un canon que presuponía y pagaba la destrucción paulatina, pero total. El intermediario era quien subarrendaba las piezas; naturalmente, estaba aun menos inclinado a hacer reparaciones”[7].

Junto a este tipo de conventillo surgido del subarriendo de antiguas casonas, estaba el otro tipo de conventillo surgido del alineamiento de cuartos y piezas en torno a un pasadizo o callejuela interior. Y más abajo aun, en la escala de la vivienda, estaban los”cuartos redondos”, piezas subarrendadas que no daban directamente a ningún lugar abierto. Gonzalo Vial, siguiendo información de prensa, en un cálculo conservador estima que hacia 1910, cien mil personas, aproximadamente la cuarta parte de la población de Santiago, vivían en 25 mil piezas de conventillos, cuartos redondos y ranchos[8].

El conventillo que, como hemos visto en el capítulo II, atrapó a los más pobres cuando se agotaban las estrategias de subsistencia peonal, era un negocio muy rentable para sectores de la élite. Con una inversión muy baja, las rentas percibidas no solo pagaban en corto plazo las precarias construcciones o las deterioradas casas patricias subarrendadas, sino que constituían para muchos sectores una fuente estable de ingresos. Tan extrema era esta situación, que cuando se tomaron algunas iniciativas para demoler conventillos declarados insalubres, el Estado no consideró el pago de indemnización a los propietarios.

Agreguemos que en el período que nos ocupa el canon de arriendos siguió también la espiral inflacionaria. En efecto, Vial ha calculado que entre 1895 y 1910 estos experimentaron un alza de aproximadamente un 24%. Esta cifra es muy cercana a los cálculos que ofrece Recabarren para el mismo período.

El Estado, por cierto, se tomó su tiempo para enfrentar seriamente el problema

de la habitación popular. El Congreso, por ejemplo, se tomó 19 años para dictar la famosa Ley de Habitación Obrera, promulgada en 1906. Esta establecía la formación de un Consejo de Habitaciones para obreros que contaba con una serie de atribuciones para demoler o declarar insalubres los conventillos, otorgaba ciertos beneficios a las “casas higiénicas”, establecía algunos beneficios tributarios para la construcción y las cooperativas, etc. Aprobó también la destinación de 600 mil pesos para construcción de habitaciones obreras[9].

El Consejo de Habitaciones para obreros, que funcionó al amparo de la Ley de 1906, operaría hasta el año 1925. Y si bien en su haber hay que anotar la demolición de muchos conventillos, la reparación de otros tantos, la declaración de viviendas higiénicas de 193 cités y más de 4 mil casas, su acción en términos generales estuvo muy por debajo de la magnitud que representaba el problema de la vivienda popular. Por ejemplo, los 600 mil pesos aprobados por la ley en 1906 estaban agotándose al finalizar ese mismo año[10].

Tanto como producto de la acción filantrópica de particulares y de la Iglesia, y también del Estado, se construyeron las primeras poblaciones obreras. El Consejo construyó, por ejemplo, una población obrera de cien casas en el barrio San Eugenio (en 1912 se entregaron 92 de estas a sus usuarios); otras casas para obreros fueron construidas en este período por la Fundación León XIII y la Institución “Sofía Concha”. Sin embargo, en conjunto estas eran soluciones tremendamente parciales: “Ante la magnitud del problema tales iniciativas eran gotas en el mar”[11]. Con razón entonces el doctor Valdés Cange era tan pesimista frente a la construcción de habitaciones para obreros. En su carta decimoquinta al Presidente Barros Luco le decía que tenía el temor de que “la cosa quede en el papel”.

Por otra parte, en lo que se refiere a la habitación de obreros en el salitre, la situación no era mejor. En efecto, en este caso las construcciones siempre tuvieron un carácter provisorio y las compañías no demostraban mayor interés en invertir en este rubro. De esto modo la habitación minera típica fue la del

“campamento”:

“Las habitaciones que las oficinas dan a sus operarios son grandes barracas de fierro galvanizado, divididas en piezas pequeñas, en cada una de las cuales se instalan dos o tres trabajadores si son solteros, i uno solo si es casado. En algunas salitreras, que, por haber adoptado procedimientos de elaboración más perfectos, necesitan menos operarios que antes, se dan dos cuartos de habitación a los matrimonios con familia. Estas barracas, que constituyen lo que se llama campamentos, son las habitaciones más terribles que se puede imaginar: en el día el fierro se caldea con el sol que cae a plomo y refleja sus rayos en aquellas arenas abrasadas i los cuartos se convierten en hornos; en la noche la temperatura, aun en verano, baja mucho, i la habitación de obrero pasa del calor insufrible a un frío que muchas veces no le permite conciliar el sueño; diferencias de 30 grados entre el día i la noche son corrientes”[12].

Otra forma de construcción, distinta a la barraca de metal, fue la de “costra o costrón” (una tierra endurecida que se encuentra sobre el caliche). Esta forma tenía la ventaja de neutralizar los fuertes cambios de temperatura, propios del desierto chileno, pero representaba el inconveniente de que era caldo de cultivo para todo tipo de bichos y en especial la temida vinchuca, conocida por sus nocivos efectos para la salud.

La deteriorada vivienda popular, tanto en las minas, en las ciudades, como también en el campo, tenía su contraparte en las refinadas viviendas patricias, de los administradores y empleados de confianza de la mina o del patrón que visitaba por temporadas sus posesiones en el campo.

En el caso minero, el contraste estaba muy cerca, allí mismo en el campamento en las casas de la administración. Estas eran “unas veces sencillas y otras lujosas, pero siempre cómodas, limpias, bien tenidas por una prolija ama de llaves, con sabrosa comida y excelentes alcoholes, y en las cuales –siendo inglesas las oficinas– los empleados seguían la etiqueta imperial y se vestían con

esmero para la cena”[13].

En el caso de Santiago el contraste entre el hacinado conventillo y la espaciosa mansión oligárquica no admitía comparación. Como indican Gross y De Ramón “la clase alta santiaguina habitaba casas de grandes dimensiones equivalentes a los antiguos solares de la traza primitiva de la ciudad y a veces más aun como era el caso del “palacio” Concha Cazotte, pudiendo recibir y alojar cómodamente a tres generaciones de una misma familia. Sus grandes patios aseguraban la privacidad suficiente a la familia y también permitían el aislamiento de sus individuos en sus habitaciones o en el interior de sus huertos e invernaderos; en el gran comedor podían instalarse sin problemas cincuenta o sesenta personas; en sus diversos salones, llamados según el color de su empapelado y todos ellos colmados de pesados muebles, espejos, cuadros, mesas, alfombras y lámparas, podía celebrarse grandes fiestas y todos sus numerosos invitados cabían sin problemas y aun tenían espacio para danzar los complicados bailes de la época que requerían de muchos metros por pareja”[14].

Y se podría seguir enumerando esas contrastantes diferencias que se verifican en Valparaíso, donde los ingleses contaron con cerro propio (Cerro Alegre) o en Lota, donde la esposa de Cousiño tuvo su monumental parque propio.

En ciudades como Santiago, entre el conventillo y la mansión patricia se podía distinguir también todo ese tipo de construcción intermedia, habitadas por artesanos, comerciantes, empleados, etc. Se trataba de barrios más bien grises, pobremente equipados y que en el mejor de los casos reproducían cuadros y paisajes de pueblos provincianos.

El deterioro de la salud del pueblo

Como hemos insistido, el poblamiento peonal de ciudades como Santiago, Valparaíso o Concepción fue creciente en la segunda mitad del siglo XIX. En la década del sesenta, la Municipalidad de Santiago se vio en la necesidad de administrar algún tipo de medidas al desordenado crecimiento de la ciudad. Pero el problema no era solo contar con “plan regulador”, sino que mucho mayor: la ciudad tal cual se venía desarrollando era presa fácil de grandes pestes y epidemias. Por esta razón junto con los planes de la edilidad en orden a establecer algún “plan” para Santiago, hubo de crearse por estos mismos años un Consejo de Higiene, ampliar la capacidad hospitalaria, crear nuevos lazaretos, importar vacunas, etc. Con todo y a pesar de las constantes denuncias de los médicos –verdaderos intelectuales orgánicos de la causa popular, algunos de ellos– y también de la acción autosostenida de los artesanos a través de mutuales, los problemas de salud pública continuaron –y el conventillo los agravó– hacia fines del siglo.

El conventillo, decimos, agravó los problemas de salud pública por el hacinamiento de la población popular que él conllevaba, pero también contribuían decididamente a empeorar los problemas los deficientes servicios sanitarios y de agua potable. Sabido es que todavía al finalizar el siglo Santiago no contaba con sistema de alcantarillado y las aguas servidas corrían a tajo abierto por las famosas acequias. Estas normalmente cruzaban por el último patio de las casas patricias y por el pasadizo central de los conventillos.

Entre las pestes y epidemias más frecuentes, al finalizar el siglo, se pueden señalar la peste bubónica –fantasma constante, aunque intermitente–; el cólera, que el año 1886 arrasó la zona central y se extendió hasta Arauco. Comprometió a más de diez mil víctimas. La viruela era por su parte endémica. Particularmente duro fue un brote de ella –según Vial– en 1905. La Sociedad Nacional de Agricultura calculó en diez mil el número de trabajadores afectados. Y si se considera el período que va entre 1905-1910, el número de afectados fue de 18 mil, que terminó por representar el 3% de la mortalidad general de la población en el mencionado período.

Para el mismo período, finalmente, más crueles fueron las epidemias de fiebre tifoidea, que anotó un total de 25 mil muertes. En conjunto, la bubónica, el cólera, la viruela y el tifus eran las enfermedades que mayores estragos hacían entre los más pobres, comprometiendo muchas veces también a otros estratos sociales. Entre sus causas, que más estimulaban la propagación de las epidemias, estaban las pésimas condiciones sanitarias de nuestras principales ciudades.

Como siempre suele ocurrir, los niños eran los más expuestos a la enfermedad y a la muerte. Confabulaban para ello no solo las causas sanitarias hasta aquí anotadas, sino también el deterioro general de la salud física y mental por la que en este período atravesaba la familia popular. La escasez de trabajo, el alza del costo de la vida que se hizo muy notorio en los primeros años del siglo XX, la vida en el conventillo, etc., fueron también causas suficientes para que creciera el alcoholismo, la prostitución y las enfermedades venéreas. La familia tendió también entonces a desarticularse, de tal suerte que en los años 1906-1910 el 37% de los nacimientos fueran ilegítimos y que el año 1909 superaran al 50% de los nacidos.

Así las pestes infantiles entre 1905 y 1910 alcanzaron su peak: el sarampión exterminó a más de 10 mil niños y adultos; el coqueluche a 14 mil; la difteria y el crup a unos 2 mil y la gripe a más de 18 mil[15].

El alcoholismo, como hemos adelantado, también creció. En los años del cambio de siglo el consumo anual por habitante alcanzaba a los 18 litros, que representaba el doble y hasta el triple de cualquier otro país. El consumo desmedido de alcohol era frecuente en los barrios populares de las ciudades, pero también en los campamentos mineros. Por ello, el Dr. Valdés Cange, indicaba que las fondas instaladas en los campamentos, que contaban con la aprobación de los administradores, era otra de las tantas formas de explotación. Algo semejante ocurría en el campo, donde era frecuente que el pago de jornales fuera acompañado de un importante consumo de alcohol, suministrado por los patronos. Pero el alcohol, como se sabe, no suele venir solo, sino que trae sus compañías. Dos de ellas quizás hayan sido las más importantes en el período que

nos ocupa: el juego y el burdel. Este último era pieza obligada en los pueblos mineros del norte y se instalaba normalmente al interior del mismo conventillo en ciudades como Santiago.

Para 1916, que existe una estadística confiable, se hallaban registradas en Santiago sobre 500 prostitutas. Sin embargo, todo indica que su número era muy superior. Para algunos observadores la cifra real debe haber bordeado las 10 mil si se considera la práctica clandestina del comercio sexual[16] y si se considera también que cuando la prostitución crece en estos niveles es porque ella representa una estrategia de subsistencia para un importante sector de mujeres del pueblo.

El cambio de siglo sorprendió de este modo a los más pobres de la sociedad popular en un verdadero callejón sin salida, o como ha indicado Salazar, en la más profunda crisis la sociedad popular[17]. En efecto, en esta coyuntura, si bien la industria aglutinaba a importantes sectores laborales, la inflación depreciaba sus salarios y su capacidad de absorción de mano de obra era limitada; por otra parte, el régimen parlamentario hacía muy poco para hacer frente a la miseria que se extendía y a la inflación que golpeaba las ya precarias estrategias de subsistencia peonal. El conventillo se convirtió entonces en el último bastión para albergar a una clase popular con sus ingresos deprimidos, cuando los tenía, y su salud quebrantada por las epidemias, el juego, el alcoholismo y el hacinamiento. En este contexto era muy difícil hablar de futuro.

Es la situación de un peón que describe A. Romero en La viuda del conventillo; un peón que se encuentra en el final de su jornada:

“Pintor, albañil, gañán al día. Hizo de todo y cuando el maletín de las vocaciones se quedó vacío, el pobre hombre se arrió al conventillo, despacito y fumando, fumando pensó una porción de cosas, la vista perdida en el cielo alto y azul.

Fidel Astudillo se daba cuenta de que no hacer nada es un trabajo duro, difícil, abrumador, máxime cuando el agraciado tiene sus debilidades, sus gustos, sus vicios –suerte perra la de uno– gruñía el maestro Fidel, dejando correr las horas que, también como el agua de la acequia, pasaban por delante de su silla sin dejar ni el más leve rastro...”[18].

Y para colmo, inflación

En el período que nos ocupa, la dependencia de la economía chilena del mercado internacional, el salitre mediante, era causa frecuente de desequilibrios económicos. Esta fue la razón que llevó, por ejemplo, a los salitreros a “mancomunarse” (y fijar cuotas de producción, reducción de trabajadores, etc.). Pero, existían también causas que podríamos denominar internas para los periódicos desequilibrios. Una de ellas fue la supresión del patrón oro y las emisiones de “papel moneda” que permitían ajustar los negocios de la élite, favorecían la especulación (cuando había dinero abundante) y tenían como consecuencia una creciente inflación.

Es famosa la “fiebre bursátil” de 1904-1905 que llevó a la constitución de un abundante número de empresas que no tenían más respaldo que la especulación financiera y el crédito fácil. Ángel Heredia, personaje central de la novela Casa grande de Luis Orrego Luco logró en este tiempo vivir la ilusión de prosperidad y atender las demandas de su aristocrática esposa. Sin embargo, sin producción real y concreta, a la fiebre bursátil de 1905 le siguió muy rápidamente el derrumbe y el colapso: muchas empresas recién creadas “quebraron”, se restringió el crédito y cayeron las reservas bancarias.

Según el historiador Julio C. Jobet, la fiebre bursátil de 1905 “se prestó para las más atrevidas especulaciones que causaron luego la ruina de muchas personas”. El mismo autor indica a renglón seguido:

“Sin embargo la crisis que se abre a continuación no afectó a los grandes magnates (agricultores y banqueros), pero se aprovecharon de ella para obtener nuevas emisiones que hicieron descender más el cambio, agravando la miseria de las masas por el encarecimiento continuo de la vida, especialmente de los artículos de primera necesidad para el pueblo”[19].

En este sentido, para Jobet y otros autores el alza de los precios “fue uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la cuestión social en Chile”[20].

Destaca asimismo Jobet que el peligro inflacionario fue también comprendido en su época por el destacado político liberal de la élite, Enrique Mac-Iver, en un discurso dirigido a sus colegas en el Senado, en mayo de 1906:

“Este estado de profunda agitación y excitación de las clases trabajadoras, esta carestía intolerable de la vida, que puede ser indiferente para los que tienen negocios en la Bolsa ¿no piensan mis honorables colegas, que pueden traer envueltas las huelgas futuras, con todas sus consecuencias? Los que estamos aquí podemos defendemos de la baja de la moneda, los que tienen ganado saben que éstos subirán de valor, los que tienen otros negocios tienen campos de donde reponerse de las perturbaciones del valor de la moneda; pero los pobres, los que están afuera, los que viven de salarios, esos no tienen medios de defensa; esos son los débiles en la lucha por la vida; esos son las víctimas...”[21].

Veamos ahora cómo se reflejaba la situación descrita en el nivel de los salarios:

“Los jornales que ganan los inquilinos y que son variables según las regalías de que gozan... en los años 1907-1908 fluctuaban de 0,20 centavos a \$ 1 en moneda corriente de 10^{1/2} d. En cuanto a las peonadas ambulantes, “forasteros” ganaban

un salario que variaba de 0,80 centavos a \$ 1,60, sujeta a diversa escala (con “ración” o sin ella, a trata o al día) y según las localidades y faenas. Es así como los salarios de un real de principios del siglo XIX eran de 2 reales a mediados y de 10 reales a principios del actual; en cuanto al valor de la moneda había disminuido de 47 d. a mediados del siglo XIX, a 12 a comienzos del siglo XX”[22].

Y, en el caso de los mineros y otras zonas del país la situación era la siguiente:

“Los salarios en las minas de Tarapacá y Antofagasta eran de \$ 5 a 6 en el interior y de \$4 a 5 en la costa, en moneda de $10^{1/2}$ d. En las provincias de Atacama, Coquimbo y Aconcagua de \$2 a 3,50 en la costa y de 2 a 4 en el interior. En las minas de carbón se pagaban hasta \$ 5, 50. En Magallanes \$6. En las industrias el salario medio de los hombres era de \$3,80 y para las mujeres y niños de \$1,80, en moneda de $10^{1/2}$ d., con una jornada de 9 a 12 horas. Si a veces pueden considerarse elevados los salarios debe recordarse que, desde la Revolución de 1891 hasta 1908, el costo de la vida se había duplicado y el valor de la moneda había descendido a la mitad, por lo que los precios de artículos de consumo se cuadruplicaron”[23].

Pero la inflación en relación a la economía popular tuvo también otro tipo de consecuencias. Entre éstas se pueden señalar el aumento de “cuentas al fiado” en los almacenes, los “pagos semanales” para la compra de vestuario, y el más socorrido: el empeño de prendas, artículos del hogar e incluso de herramientas de trabajo en las famosas agencias de empeño.

La inflación se tradujo en estrechez, miseria, pero junto con ello entregó a los sectores populares urbanos al negocio de la usura. Al comenzar el siglo había en Santiago más de ochenta agencias de empeño, la mayor parte en manos de extranjeros. Muchos de ellos habitaban en el mismo local de la agencia, pero más que sus propias condiciones de vida, lo más duro del oficio eran los abusos que cometían avaluando en muy bajo precio las prendas empeñadas aplicando

tasas de interés que llegaban al 120% anual.

Mediante este sistema era prácticamente inevitable que el agenciero se quedara con las prendas empeñadas. Ello movió a la opinión pública y al gobierno y se estableció entonces como norma que las prendas no recuperadas por sus dueños debían ser rematadas. El resultado no fue más feliz y así tenemos que:

“el año 1908, en Santiago, 177.524 especies empeñadas y rematadas, cuya tasación sumara aproximadamente setecientos mil pesos, dieron setecientos cincuenta mil pesos. De éstos, 93% correspondió a los agencieros, 6% a los martilleros y solo 1% a los dueños. Pero lo que efectivamente cobraron los últimos (por causa de los brevísimos plazos y engorrosos trámites para reclamar la devolución) fue todavía menos: apenas 242 pesos, 7 centavos... ¡0,032 sobre el producto de los remates!”[24].

No debe extrañar entonces, como veremos más adelante, que en la gran protesta popular en Santiago, en 1905, hayan sido asaltadas muchas casas de empeño y que se hubiese manifestado un fuerte sentimiento antiextranjero.

No sería completo el cuadro que hemos venido describiendo si no nos refiriéramos a las condiciones de trabajo en que se debían desenvolver los trabajadores chilenos en los primeros años del presente siglo.

Condiciones de trabajo, una causa frecuente de protestas

Las denuncias sobre condiciones de vida y de trabajo de los obreros chilenos estuvieron presentes prácticamente en todos los manifiestos, peticiones y quejas que se hicieron presentes a la autoridad. Tal es el caso de las “quejas” que hicieron presentes diversos delegados obreros al Intendente de Iquique y a un Ministro que se encontraba de visita en la ciudad, en marzo de 1904.

Reunidos con la autoridad, según informa El Pueblo de Iquique, luego de los saludos de rigor, el Ministro preguntó a los delegados sobre sus nombres, procedencias, cantón, oficio, etc., manifestando el interés del gobierno por “tomar contacto directo con los obreros”.

Los delegados obreros fueron tomando la palabra y exponiendo sus quejas. Manuel Montenegro explicó, “que el trabajo era rudo porque se trabajaba a todo sol de la mañana a la tarde en la extracción del caliche, con un diario de \$1,50... Que por la carretada de caliche se paga al operario también \$ 1,50, pero que a veces se les hace botar algunas carretadas a pretexto de ser de escasa ley y que después es recogido y echado a los cachuchos para su beneficio. Que muchas veces los operarios hacen acopios de buena o regular ley, y cuando ese acopio ya está hecho, se les rebaja el precio por carretada, sin ninguna forma de aviso...”.

Otro delegado, de apellido Barrios expuso “que allí no existe el libre comercio, que se cobra contribución por las verduras, de parte de los jefes de oficina; que se persigue a los comerciantes impidiéndoles el acceso a los campamentos y que se toma y quita por contrabando cualquier compra de comestible hecha fuera de la pulpería”.

El delegado Álvarez, por su parte, indicó “que los correos son deficientes, que se viola la correspondencia y se intercepta la circulación de impresos. Que se cobra un peso de contribución para médico y botica por cada persona, formándose con esto grandes cantidades y que ese dinero debe darse a la Beneficencia, por cuanto ningún enfermo se medicina en las oficinas sino en el Hospital de Iquique... Que las habitaciones para los operarios son inmundas, malsanas y

enfermizas...”

Finalmente, el delegado Ponce hizo presente lo rudo del trabajo que no se corresponde con el mezquino salario “por cuanto el trabajador en las máquinas hace su servicio a un calor de 125 grados; en la pampa a todo viento y sol, y que los primeros no pueden resistir a tan rudo trabajo más de dos años y que un cargador se inutiliza en un año, y que se impone la necesidad de velar, de parte del Gobierno, con respecto a la falta de garantías, la desigualdad y los abusos que existen entre el capital y el trabajo”[25].

Y así continuaron las quejas relativas a salarios, seguridad industrial, multas indebidas, ineficacia del sistema escolar y de salud, ausencia de libertad de comercio y abuso con las fichas, etc. Estas demandas ya veremos se repitieron una y otra vez en la pampa, hasta que fueron acalladas temporalmente en la Escuela de Santa María en 1907.

En una mirada más general a las condiciones de trabajo de los asalariados en Chile en esta época se puede decir que no existía ningún tipo de previsión social, salvo la que se proveían los propios trabajadores a través de sus sociedades mutuales y otro tipo de organizaciones. No hubo tampoco, sino hasta 1916, ninguna legislación sobre accidentes del trabajo. Tampoco se había legislado sobre la duración de la jornada de trabajo, que podía fluctuar entre 9 y 12 horas diarias e incluso aun más. Y el trabajo de niños y mujeres carecía de todo tipo de reglamentación, a pesar de que en conjunto representaban alrededor del 30% de la fuerza de trabajo. En fin, como es sabido, en Chile se careció hasta 1924 de todo tipo de legislación que regulara las relaciones capital-trabajo. Recién este año se dictaron las primeras leyes laborales que fueron ampliadas y refundidas luego en el Código del Trabajo en 1930.

El resultado de esta situación fue claro en las primeras décadas del siglo: el trabajo se encontró en una evidente desventaja y desprotección respecto del capital. A los trabajadores, en consecuencia, no les quedó más camino que

demandar al Estado, pero más que eso, extender sus propias organizaciones –que resolvían algunos de sus problemas previsionales, de salud e incluso de educación– y, enfatizar, por otra parte, en la confrontación con sus patrones para obtener un mínimo de justicia.

La protesta popular: La otra cara de la cuestión social

“Conoció el malestar la Comisión i vio el principio de perturbación ¡Bueno! Cuando la autoridad constata esas existencias! Esto prueba que la miseria existe entonces, i, como un efecto surge ese principio de perturbación.

¿Queréis llamar también solo principio de perturbación a la veintena de huelgas ya producidas?

Si la autoridad no ha negado del todo la cuestión social y lo reduce solo a principios de perturbación, es porque en ellos se recuerda haber asesinado al pueblo muchas veces”

Diario Jerminal

, Stgo. 28 de abril de 1904.

La cuestión social, al cambiar el siglo, tuvo a nuestro juicio una doble manifestación: por una parte volvió cada vez más opresivas las condiciones de vida popular, como ya hemos visto en las páginas recientes. Pero, por otra parte, se manifestó como protesta contra el orden social y político existente.

Los obreros y los artesanos, en la medida que habían avanzado más en organización y extensión, estuvieron a la vanguardia. Pero cada manifestación significativa de ellos –aquellas que trascendieron regional o nacionalmente– estuvo acompañada por la presencia masiva de los más pobres. En este sentido, la protesta social de principios de siglo no fue solo obrera o artesanal. Más que eso, fue popular.

Valparaíso 1903: La huelga marítima

Llegaba al día 15 el mes de abril de 1903 cuando muchos porteños se enteraban por la prensa del inicio de una huelga de gente de mar. Se trataba de los trabajadores encargados de las tareas de carga y descarga de la Compañía Inglesa de Vapores (Pacific Stean Navegation Company).

Los huelguistas según El Mercurio de Valparaíso reclamaban, inicialmente, una modificación en los horarios de trabajo que hasta ese momento era de seis de la mañana a seis de la tarde.

“Piden los operarios que las horas de trabajo sean en la época de invierno de siete de la mañana a cinco de la tarde, dejándoles el tiempo que en la actualidad se les concede para el desayuno de ocho y media a nueve, y para el almuerzo de una a dos”[26].

Reclamaban también los estibadores de la Compañía Inglesa un alza de sus salarios, que habitualmente eran alrededor de un 10% más alto que el de sus homólogos de la Compañía SudAmericana de Vapores. Los trabajadores buscaron sacar ventaja de la tradicional voluntad de la Compañía Inglesa de pagar un poco mejor que su rival, la SudAmericana[27]. Y, por cierto que sus

salarios se habían venido depreciando como producto del alza del costo de la vida.

El gerente de la Compañía Inglesa, J. W. Sharpe, se negó terminantemente a considerar las demandas de los estibadores y amenazó además a los huelguistas con el envío de “nuevas cuadrillas de trabajadores que ya tenía contratados”.

Considerando la actitud hostil de Sharpe, los trabajadores se entrevistaron, la misma mañana del día 15, con el Director del Territorio Marítimo, contraalmirante Arturo Fernández Vial. Éste, que era además presidente honorario de varias sociedades obreras, les “prometió ayudarlos y ver modo de arreglar las dificultades pendientes”[28]. El número de trabajadores comprometidos en la huelga, en esos momentos, alcanzaba a unos 600.

Dos días después de declarado el movimiento, los trabajadores dirigieron una nota a Sharpe en la que hacían presentes nuevamente sus demandas y su decisión de someter sus diferencias a un arbitraje:

“...los abajo suscritos tenemos el honor de poner a vuestra deliberación los siguientes acuerdos tomados por los estibadores y jornaleros ocupados en la carga y descarga de los vapores y buques que recalán en este puerto:

1o Al jefe del territorio marítimo, don Arturo Fernández Vial, nombrándolo como árbitro nuestro, la que fue aceptada por más de 200, que era el número de la reunión.

2o Pasar una circular a la Compañía de Vapores y a las casas consignatarias de buques y a la Cámara de Comercio de este puerto, como igualmente a la

gubernación marítima y a la Intendencia de la provincia.

3o Que el tiempo de trabajo sea de 7 A.M. a 5 P.M., siendo este tiempo permanente, con una hora de comida de 11 a 12 o de 12 a 1 P.M.

En caso de ocupamos después de la hora antes dicha será un trabajo extra; su valor por horas de cincuenta centavos en mercaderías y de sesenta centavos en metales y carbón.

4o En ningún caso podrá haber medios días ni tres cuartos de días.

5o El trabajo por días será por mercaderías de \$4, por carbón y metales \$5; días festivos según declarados por

Lei de la República

tendrá un

recargo del 25%^[29].

L

a respuesta se Sharpe a la nota de los estibadores en huelga fue del todo negativa. Argumentó que los sueldos por ellos recibidos eran lo suficientemente altos, que con los sobretiempos estos alcanzaban a \$45 e incluso a \$ 5 y que la Compañía podría prescindir de sus servicios:

“Pero como parece que un número considerable de las personas que Uds.

representan no están dispuestos a trabajar con dicho sueldo por considerarlo muy arduo y mal remunerado, debo decirles que creo no habrá inconvenientes de parte de la Compañía en encontrar otros medios de efectuar las operaciones sin la concurrencia de sus representados”[30].

El contraalmirante Fernández Vial, por su parte, intentó persuadir a la Compañía para que llegará a algún acuerdo con los trabajadores, pero no obtuvo ningún resultado positivo. A él le parecía que “las demandas obreras eran justificadas en vista de las presentes necesidades de la clase obrera, la cual tiene hoy mayores exigencias que antes... Actualmente... todo cuesta más caro, la ropa, los víveres, la casa, etc. (declaró a El Mercurio)...”[31]. Pronto tales declaraciones de simpatía con el movimiento de estibadores, así como sus iniciativas para favorecerlos, le costaría su puesto en la Armada.

El día 18 de abril los estibadores de la Compañía Inglesa solicitaron al gremio de los lancheros que apoyaran su movimiento y ese mismo día además se plegaban a la huelga los estibadores de la Compañía Sudamericana de Vapores. Los lancheros lo harían a partir del lunes 20 junto a los jornaleros de Aduana.

Y cada gremio que se incorporaba al movimiento lo hacía ya no solo en solidaridad con los estibadores de la Compañía Inglesa, sino haciendo presente sus propias demandas. Tal fue el caso, por ejemplo, de los jornaleros de Aduana que se dirigieron a las autoridades de la provincia en los siguientes términos:

“Dado el escaso jornal que se nos asigna, y la carestía de todos los artículos de vida, nuestra situación es de miseria, teniendo apenas lo suficiente para comer. Vuestras señorías saben que aun cuando el valor nominal de la moneda es siempre el mismo, su valor efectivo es casi un tercio menor al que legítimamente le correspondía. De aquí que no es el número de pesos que debe considerarse, sino su capacidad para adquirir los alimentos o servir las necesidades de nuestros hogares. Con el objeto de que se nos oiga y se nos atienda en nuestras peticiones, hacemos el amargo sacrificio de paralizar nuestro trabajo, ya que ni la lei ni las

autoridades judiciales o de gobierno han dictado prescripciones en resguardo o protección del desválido...”[32].

E indican luego sus demandas que pueden resumirse en: aumento de tarifas, anticipos de jornales por mercaderías no desembarcadas, “matrícula” como medida de moralidad; elección de los capataces y que estos no sean designados por los contratistas, que los pagos se los hagan directamente los funcionarios y no los capataces, y lo que como norma incluye todo movimiento huelguístico al finalizar su petitorio: “que no se suspenda a ningún trabajador por haber participado en la huelga”.

El día 20, cuando ya diversos gremios se habían declarado en huelga, la actividad normal del puerto prácticamente cesó. Como indica De Shazo, la mayoría de los tripulantes que se encontraban a bordo de los barcos de las Compañías los abandonaron y se dirigieron a Valparaíso para sumarse al movimiento; ninguna carga fue movida a través de la Casa de Aduana porque los contratistas no podían encontrar a nadie que reemplazara a los aduaneros en paro; la mayoría de los barcos permanecieron cargados en la bahía con sus cargamentos de perecibles descomponiéndose, ya que los lancheros tampoco trabajaban[33]. A estas alturas, el número de huelguistas llegaba a unos cuatro mil.

Los diversos gremios comprometidos en la huelga mentaron constituir un frente unido de tal forma de solidarizarse en sus peticiones y no volver al trabajo mientras no se resolviera globalmente el conflicto. La iniciativa provenía de las “sociedades de resistencia” de orientación anarquista que se habían activado al calor de la huelga. El pacto no prosperó por diversas razones; entre otras, porque los trabajadores pertenecientes a sociedades mutualistas se mostraron desconfiados de los anarquistas. Hubo críticas a Magno Espinoza, presidente de la Sociedad de Empleados de Vapores, que era partidario de conducir la huelga de un modo más activo. Pesó, sin embargo, también para que no se firmara el acuerdo, la negativa de los lancheros. Estos no fueron partidarios de la iniciativa por cuanto tenían posibilidades de negociar por separado con sus empleadores.

En el intertanto, el contraalmirante Fernández Vial, con fecha 22 de abril, era destituido de su cargo y transferido a la División de Evoluciones de la Armada. Ello era, por cierto, una suerte de sanción que le imponía el jefe de la Armada, Almirante Jorge Montt. Este último, en realidad, falló en favor de las Compañías y la prensa afín a los empleadores a quienes Fernández Vial no les simpatizaba.

Cuando ya el movimiento se prolongaba por más de una semana, tanto los estibadores como los lancheros alcanzaban acuerdos con algunos empresarios. Sin embargo, el conflicto con las grandes Compañías no tenía visos de solución. La actividad comercial, por su parte, ya sentía los efectos de la paralización del puerto:

“El comercio sufre considerablemente con este estado de cosas –comentaba El Mercurio–; sabemos de varias casas comerciales que han dado orden que sus mercaderías se desembarquen en Talcahuano y sean traídas por tierra a Valparaíso. La fábrica de cervezas Valdivia ha paralizado los trabajos a causa que no ha podido desembarcar los barriles que tiene a bordo de los vapores surtos en la bahía”[34].

Así como Fernández Vial manifestó sus simpatías por el movimiento de los trabajadores marítimos, entre algunos funcionarios de aduanas existían también opiniones favorables a los trabajadores en paro. Tal es el caso de un alto funcionario que, a pesar de manifestar no estar de acuerdo con las peticiones de alza de salarios de los jornaleros, sí coincidía con ellos en sus críticas a los capataces:

“...estos explotan a los operarios. Tienen los capataces cantinas y despachos en los cuales obligan a los trabajadores a consumir licores y provisiones, y al fin de semana les descuentan el valor de lo consumido. El que no se aviene a hacerse cliente de la cantina o despacho, con cualquier pretexto es despedido de su

ocupación”[35].

Los contratistas, sin embargo, rechazaban toda alza de salarios en favor de los jornaleros, argumentando que ello suponía modificar los contratos establecidos con el Fisco. Las autoridades marítimas y de Gobierno, por su parte, mantenían una actitud ambivalente frente al movimiento. Por una parte se mostraban proclives al arbitraje; pero por otra, favorecían la estrategia de los empleadores tendiente a quebrar el movimiento mediante el recurso de los rompe-huelga.

El día 26, el gobernador marítimo Francisco Sánchez propuso realizar en su despacho una reunión con todos los gremios en huelga, con el objeto de nombrar una persona “que sirviendo de árbitro o intermediario, se acercase a todos los patronos y en unión con ellos solucionase las dificultades pendientes”[36]. Es decir, lo mismo que habían propuesto los estibadores al iniciarse el conflicto.

Los gremios por cierto aceptaron la proposición de Sánchez e insistieron en el nombre de Fernández Vial. El gobernador les manifestó que su nombre “no era grato a los patronos”. Aun así los estibadores insistieron en él mientras que los empleados de vapores propusieron el nombre de Ángel Guarello, diputado demócrata por la provincia.

La gestión de Francisco Sánchez y el diputado Guarello correría la misma suerte que la que antes había corrido la de Fernández Vial. Las Compañías se negaban a negociar con los trabajadores en huelga y menos aun a someterse a un comité arbitral.

En esta ocasión Sharpe declaró respecto del arbitraje, “que no lo había pensado ni es probable que tome resolución alguna pues asuntos más importantes ocupan su tiempo” y que los vapores con mayor o menor carga saldrían del puerto. Horacio Lyon, gerente de la Sudamericana de Vapores, en la misma línea de

Sharpe, declaró:

“...el directorio de la Compañía es el único llamado a resolver si se acepta o no al delegado de los huelguistas... su opinión era que no había para qué tratar con él y tenía conocimiento que este era también el espíritu de los miembros que componían el directorio”[37].

La estrategia de los empleadores apuntaba en realidad básicamente a quebrar el movimiento. Por una parte se negaban a todo tipo de negociación desestimando las iniciativas de las autoridades marítimas y de Gobierno, como también la intervención del demócrata A. Guarello. Por otra parte, habían logrado ir reclutando trabajadores (rompe-huelgas) entre los desempleados y trasladando también personal de otros puertos del país. La Casa de Aduana, en la misma lógica, restableció su funcionamiento el día 27 con 100 trabajadores que ingresaron al recinto protegidos por fuerzas de la policía. Las autoridades marítimas, por su parte ayudaron a las Compañías permitiendo que se embarcaran con un número de tripulantes menor al establecido por la ley[38].

Ante tales iniciativas de los contratistas los trabajadores trataron de impedir que los rompe-huelgas ingresaran a la Casa de Aduana el día 27. Se produjeron así los primeros enfrentamientos entre los huelguistas y la policía, aunque sin mayores consecuencias.

Al finalizar abril, la estrategia de los empleadores ganaba sus puntos: la actividad del puerto comenzaba a reactivarse mientras que la moral de los huelguistas decaía.

Evaluando esta situación, los anarquistas buscaron reactivar al movimiento. Para ello convocaron a un mitin que se llevó a efecto al atardecer del día lunes 4 de mayo. En el mitin hicieron uso de la palabra diversos dirigentes. Sin embargo, lo

más destacado fueron las palabras pronunciadas por Magno Espinoza: Este, buscando revertir las vacilaciones y reveses por los que atravesaba el movimiento huelguístico, arengó de este modo a los manifestantes:

“No debemos trepidar un momento... antes que rendimos a los patrones debemos preferir que nuestros pechos sean atravesados por las bayonetas; y en los momentos que estemos en la agonía, gustaremos del placer de ver cómo arden los edificios de nuestros tiranos y cómo se arremolina el agua al hundirse los vapores de esas compañías que hoi nos oprimen”[39].

Al mitin le siguió una marcha por el centro de Valparaíso, seguidos muy de cerca por la policía.

El gremio de los tripulantes de vapores, que dirigía el anarquista Magno Espinoza, hizo todo tipo de esfuerzos por mantener en alto el movimiento, recorriendo el puerto e insistiéndoles a los trabajadores de lo desastroso que significaría desistir antes de tiempo. Presionaron también a las Compañías insistiendo para que se les pagara los salarios que se les adeudaba del último viaje, antes de abandonar los barcos.

Ante esta presión de los tripulantes, el Intendente y el gobernador marítimo se reunieron con los gerentes de las compañías el día 7 de mayo. El gobernador marítimo expuso que no aceptaría la salida de nuevos vapores con gente sin matrícula. Se convino, además, en pagar los salarios adeudados a los tripulantes. Sin embargo, la cuestión del arbitraje quedó pendiente. Los gerentes, por su parte, pidieron un mayor refuerzo policial para los rompe-huelgas.

La negativa de los patrones se basaba en el hecho de que efectivamente hasta ese momentó su estrategia parecía validarse. La huelga estaba virtualmente quebrada. Sin embargo, los ánimos de los huelguistas –el de los tripulantes sobre

todo— era aun de combate.

Ángel Guarello, preocupado por la situación, que se volvía cada vez más tensa, telegrafió al presidente de su partido a Santiago:

“Valparaíso, mayo 9 de 1903. Señor Malaquías Concha. Santiago: Reclame urgente Ministro del Interior y Marina de parcialidad autoridades superiores de la Armada en favor compañía de vapores, permitiendo embarque de jente y salidas de naves con infracción abierta de reglamentos matricula y lei de navegación y de reclutas y de reemplazos. Pida ministro ordene esas autoridades cumplir estrictamente al respecto esos reglamentos y leyes. Gobernador marítimo me dijo que quebrantaba reglamentos por causa huelga; pero si gobierno ordenaba cumplir estrictamente disposiciones legales, lo haría.

Igualmente pido cese intervención fuerza pública a bordo vapores que detiene tripulantes impidiéndoles bajada a tierra. Conducta autoridades está así, exasperando ánimos, precipitando peligrosísima situación que amenaza Valparaíso.

Almirante Fernández y yo hemos obtenido hasta este momento tranquilidad ejemplar de huelguistas y resolución de entregar sus reclamos al fallo arbitral en la inteligencia que aceptando arbitraje, volverán todos a sus faenas, acatando desde luego resolución arbitral posterior cualquiera que sea.

Patrones resisten arbitraje ante Intendente y vecinos caracterizados, manteniendo situación que, debido a los actos de autoridad que denuncio, toman graves caracteres que no se pueden prever.

Urje resolución inmediata y venida ministro marina y del de hacienda. Ángel Guarello...[40].

Mientras en los gremios la situación se hacía insostenible y se discutía, seguramente, dar un giro a la huelga para pasar a “la acción directa”, las autoridades se mostraron confiadas en que el paro no pasaría a mayores. El almirante Montt abandonó el puerto para participar en maniobras en alta mar y el Intendente, si bien reforzó la actividad policial en los muelles, no movilizó tropas ni solicitó apoyo al gobierno central. También la percepción en Santiago era de debilidad del movimiento. Así en el Ministerio del Interior se comentó en estos días que la huelga “era cosa de muchachos”.

El día domingo 10 se realizaron en la avenida Brasil dos mítines; el primero al mediodía convocó a estibadores, lancheros y jornaleros de Aduana. El segundo, a eso de las 14 horas, reunió a los tripulantes de vapores encabezados por Magno Espinoza. Estos últimos realizaron colectas en el acto para reunir fondos para la huelga. Las sociedades mutuales ya habían autorizado giros en sus cuentas con el mismo fin. El mitin de los estibadores, lancheros y jornaleros acordó enviar una nota al Intendente en la que insistió en el arbitraje como medio de solución del conflicto:

1o Los lancheros, estibadores y jornaleros de la aduana solicitan del primer magistrado de la provincia que recabe del Supremo Gobierno el nombramiento de una comisión que se aboque el conocimiento de nuestro litigio con los armadores.

2o Siempre declinamos nuestros poderes en los árbitros ya nombrados.

3o Que esta situación por lo demás insostenible por la mala voluntad de los armadores y jerentes de lanchas para que se arreglen nuestros reclamos con los

presidentes de los gremios en huelga, sin perjuicio que se encuentren presentes dos personas pudientes, para que sean testigos oculares, para arribar a algún arreglo equitativo.

4o Poner en conocimiento del Intendente que se nos ha estado atropellando en nuestros derechos por individuos ajenos al desempeño del trabajo de bahía, infringiendo los artículos 1, 5, 10 y 2 transitorios del reglamento de jente de mar”[41].

La nota resultante del mitin del día 10 constituyó, en verdad, el último intento de los gremios para arreglar el conflicto por medios pacíficos. Como había indicado horas antes Ángel Guarello en su comunicación con Malaquías Concha: “La conducta de las autoridades” estaba ya “exasperando los ánimos”. Y esta fue la salida que inexorablemente se fue imponiendo.

En efecto, el día 11, los dirigentes –presidente y secretarios– del gremio de lancheros y estibadores dirigieron una nota tremendamente sugestiva al Intendente José Bravo. La nota de los lancheros decía:

“A V/S respetuosamente expongo que en vista de los grandes inconvenientes que hasta la fecha no nos han permitido llegar a un arreglo equitativo con los señores dueños de lanchas y siéndome completamente imposible mantener por más tiempo al gremio que presido en la situación en que ha estado, para salvar toda responsabilidad, desde hoi 11 del presente, me dirigiré en compañía de mi directorio general a nuestras respectivas casas, en las cuales permaneceremos encerrados hasta que V/S lo crea conveniente.

Agotados todos nuestros esfuerzos, desde hoy a las 8 A.M. en adelante cesa toda nuestra responsabilidad.

En caso de que V/S necesitare mi presencia para guardar el orden público, puede hacerlo enviando una nota a mi domicilio. Cerro Bellavista, calle Poniente, número 280. En caso que así lo deseara puede enviar a mi domicilio un caballo ensillado para recorrer la población llamando a los gremios al orden”[42].

Firman Flavian Gaete, presidente, y Roberto Melville, secretario.

Como ya dijimos, los estibadores enviaron una comunicación idéntica a la transcrita al Intendente Bravo. La nota es sugestiva porque una primera lectura revela simplemente que los dirigentes preveían ser superados por sus bases y los acontecimientos en las horas siguientes. Con esta nota salvaban su responsabilidad.

Otra lectura, sin embargo, podría sugerir que los dirigentes siendo parte del giro que tomaría la huelga el día 12, simplemente buscaban ponerse a cubierto y de paso ejercer presión sobre el Intendente para que arbitrara alguna medida efectiva en relación a la huelga.

El Intendente, confiado en sus propias fuerzas incapaz de prever el curso de los acontecimientos, respondió a los dirigentes indicando “que tenía suficiente tropa y contaba, además, con la marinería en caso de cualquier asonada que pretendieran dar”[43].

12 de mayo: El día de la “acción directa”

No aclaraba todavía el día 12 cuando numerosos huelguistas comenzaron a arribar en gran número al Muelle Prat y al malecón. Sus propósitos eran claros: impedir que abordaran las lanchas los trabajadores rompehuelga contratados por las Compañías.

Las primeras lanchas que atracaron en el muelle fueron recibidas por los trabajadores en medio de grandes rechiflas y sin realizar grandes esfuerzos, los operarios de chatas y diques se negaron a embarcarse. Quedaron de este modo, en los hechos, incorporados al movimiento.

La policía, por su parte demoró en reaccionar. Solo como a las seis de la madrugada se puso en movimiento y se distribuyeron en piquetes de guardias montados con el objeto de “prevenir nuevos desórdenes”. Con todo, los huelguistas se habían anotado ya una primera victoria: la actividad en el puerto quedó completamente paralizada a primeras horas de la mañana.

Horas más tarde, a eso de las 10 de la mañana, las calles presentaban –según El Chileno – un aspecto “animadísimo” colmadas de huelguistas que entraban y salían de los bares y que escuchaban y aplaudían a improvisados oradores. Gentes venidas de los cerros y arrabales se fueron también incorporando a la multitud que se fue congregando sobre todo en las plazas Sotomayor y Echaurren.

En esta última, se vivía un estado de mitin permanente. La policía observaba de cerca, pero hasta ahora no intervenía.

Existen diversas versiones acerca del primer enfrentamiento y las circunstancias en que cayó la primera víctima. La versión de El Chileno parece en todo caso aproximarse más a la realidad. Según este periódico, a media mañana, cuando la Plaza Echaurren se encontraba con numeroso público, el conductor del carro No

42 quiso pasar a toda costa lanzando su vehículo en contra de un grupo de estibadores. Estos reaccionaron y quitaron los caballos del carro, golpearon al cochero y se apoderaron del dinero que la cobradora llevaba encima.

Ante tales acontecimientos la policía intervino y cargó sobre los que se habían agrupado en torno del carro. Estos últimos repelieron el ataque policial a pedradas. Uno de los proyectiles hirió en el pecho al subinspector de la 2a Comisaría, Washington Salvo. Este sacó entonces su revólver y disparó sobre un grupo hiriendo y dando muerte en el acto a Manuel Salazar**

El pueblo se indignó, rodeó el cadáver y el practicante del Hospital San Juan de Dios, Alberto Rojas, que se encontraba en el lugar extrajo la bala de la víctima y se la pasó a los huelguistas. Estos levantaron el cuerpo de Salazar y a grito de ¡A la Intendencia! y ¡Que se haga justicia! lo trasladaron por las calles en dirección a la sede de gobierno regional.

El número de manifestantes seguía creciendo y este suceso sin duda que concentró más adherentes al movimiento. Unas diez mil personas ocupaban el plano del puerto cuando se aproximaba el mediodía.

La multitud gritaba para que se hiciera justicia mientras que en las puertas de la Intendencia se formó una Comisión para parlamentar con el Intendente Bravo. Personas del Comité de Huelga formaron parte de esta Comisión y le insistieron a la autoridad que controlara a la policía. Que si esto no ocurría el pueblo se vería en la obligación de responder a los ataques de ésta. El Intendente les respondió “en forma inconveniente” –según El Chileno– indicando que “al menor asomo de revuelta pediría auxilio a Santiago”.

Se dirigió luego el Intendente Bravo a la multitud llamándolos a la calma y a la cordura apelando a los sentimientos patrióticos. La multitud le respondió con

una gran rechifla y tomando nuevamente el cadáver de Salazar lo trasladaron hasta su domicilio “en medio de grandes aclamaciones”.

La policía, en un número aproximado de 200, recibió ordenes de impedir que los huelguistas permanecieran en las calles; 600 marinos fueron desembarcados para proteger los muelles y 50 lanceros fueron llamados desde Viña del Mar.

Vanas resultaron todas estas medidas si se considera la magnitud de la multitud y el giro que tomaban los acontecimientos: Pasado el mediodía los huelguistas comenzaron a recuperar los muelles y a reunirse en el malecón y en torno a las oficinas de la Compañía SudAmericana de Vapores.

Y lo que solo había sido un discurso incendiario de Magno Espinoza días atrás, ahora se traduciría en hechos concretos y tangibles. Tal cual, se corrió la voz de incendio entre los manifestantes y la gente del malecón “entró grandes brazadas de viruta y madera y se hicieron grandes fogatas” en ambos extremos de la Compañía SudAmericana. Pronto, las oficinas de la odiada Compañía ardieron por los cuatro costados. Como indica El Diario Ilustrado, hecha las primeras fogatas, “la gran llama roja como los gorros frigios chisporroteó en breve sobre los mostradores y las mamparas”[44].

Según el relato de El Chileno simplemente “una masa enorme de gente, atropellando a la guardia se dirigió a las oficinas de la SudAmericana de Vapores, donde rompió las puertas, despedazó los libros y prendió fuego al edificio”[45].

La policía y la marina fueron impotentes frente a la multitud. También los bomberos, que si bien arribaron al sitio del suceso, se les impidió que accionaran sus mangueras. También fueron impotentes las autoridades que asistieron en pleno al incendio. El jefe de policía se paseó por entre la multitud sin lograr

nada. El diputado Plummer –al que acompañaban el Intendente y otras personalidades– se dirigió a la multitud y les dijo:

“prometemos solemnemente al pueblo, todos nosotros, arreglar dentro de una hora de plazo, sus dificultades: pero por la patria, por la libertad, deténganse un momento”.

Un inmenso griterío fue parte de la respuesta de la gente y también un:

“Es tarde, es tarde ya para engañar al pueblo... “[46].

Al incendio de las oficinas de la Compañía SudAmericana le siguió luego el incendio y saqueo del malecón. Allí se había concentrado una gran cantidad de diversas mercaderías, como producto de la prolongada paralización del puerto.

Los testimonios en torno a los sucesos en el malecón difieren en la prensa. Sin embargo, la versión predominante es que el incendio y el saqueo fueron prácticamente un solo acto. Y los marinos más que detener a los incendiarios, se habrían unido a ellos”[47].

“A las tres de la tarde comenzó el saqueo de la mercadería depositada en el malecón. Grupos de individuos acarreaban la mercadería extraída de los cajones y bultos abiertos; veíanse unos con botellas, jergones, géneros, etc... cuando ya no quedaba qué robar, prendieron fuego a los restos que comenzaron a arder en poco tiempo.

El fuego abarcó bien pronto toda la parte del malecón comprendida entre la estación de Bellavista y la calle de Jayme (unas ocho cuadras) que fue una gran hoguera.

Mucha parte de la mercadería fue así robada y el resto ha seguido ardiendo, sin que las bombas puedan apagarlas, pues los huelguistas impiden su trabajo”[48].

Según El Chileno el pueblo “saqueó y destruyó las enormes cantidades de mercaderías acumuladas en el malecón por la paralización de los trabajos en la bahía” y en un momento “ardieron más de siete cuadras de mercaderías, afectando la mayor pérdida a la Casa Saavedra Benard y Cía., que tenía aglomeradas por el valor de 150 mil pesos”[49]. Y, uno de sus dueños, Cornelio Saavedra, enterado por el telégrafo, se dirigiría muy rápido en Santiago a La Moneda para exigir al gobierno que “protegiera al comercio”.

La marinería fue recibida en términos generales con gran simpatía por los huelguistas. En distintos lugares se les avivaba y según protestaría después la élite, los marinos “en vez de resguardar el orden, la propiedad y la vida de los habitantes de la ciudad... se paseó inerme entre el pueblo revuelto”[50].

La protesta a esta hora de la tarde –a las 15 y 16 horas aproximadamente– alcanzaba su peak: los manifestantes se dirigieron entonces hacia las oficinas del diario El Mercurio, que se había mostrado partidario de las compañías navieras. Alcanzaron a derribar las primeras puertas y copar el primer patio. Sin embargo, su gerente se había precavido y armado a su personal con rifles de repetición. Hicieron fuego y cayeron siete trabajadores. Los manifestantes entonces se replegaron ante el fuego de que eran víctimas y ante el arribo de los marinos con los cuales evitaban enfrentarse.

El Mercurio ponía a esta hora del día el mayor número de víctimas y la

agitación popular no fue, aun así, controlada. Más bien continuó todavía en aumento. Ya eran muchos sectores los que se confundían con los huelguistas, particularmente todos aquellos más pobres que bajaron de los cerros y se sumaron a las manifestaciones. El saqueo entonces se extendió por el plano y diversos sitios de la ciudad:

“El tránsito de los carros hubo de ser suspendido, pero además de estar las calles llenas de huelguistas en plena efervescencia y peleas con la policía y tropas de guerra, varios carros fueron tomados y las cobradoras despojadas del dinero. Esa parte de la ciudad –el plano– era un hervidero de pueblo en revolución. Los gritos llenaban el aire, entre los cuales sobresalían los de “Viva El Chileno”, “Viva la marinería”; corrían grupos de un lado a otros armados de palos, piedras y fierros, trabándose aquí choques con la policía o marinería, allá apedreando casas, y a su vez la policía de a pie y montada corría de un lado a otro, dando cargas y sufriendo una lluvia de piedras de todas partes.

Oíanse tiros, gritos de rabia y de odio y quejas y lamentos...”[51].

Si los huelguistas llegaban a unos 4 o 5 mil durante estas manifestaciones el número de personas comprometidas superaba las diez mil. A estas horas de la tarde, el saqueo se hizo ya generalizado. Y fueron atacadas las casas de empeño, zapaterías, joyerías, licoreras, almacenes y panaderías.

Entre otros, la prensa consignó que fueron asaltadas la bodega de licores de la plazuela Comy, el almacén de abarrotes de la misma plazuela, la joyería y relojería de José Klikmann, la sombrerería Dumas, la panadería Hinojosa, la agencia La Sultana, la zapatería del Clane, la agencia del pasaje, la agencia del Globo, la panadería Nacional, la zapatería Lalanne y una serie de otros locales comerciales[52].

Junto al saqueo y los asaltos de la tarde fueron también apedreadas las casas aristocráticas de Jorge Montt y de Juana Ross. Fuera de estas residencias, el resto de la población porteña, incluidos los barrios y familias de bien, no fueron tocados. La violencia tuvo una clara dirección: las compañías navieras, El Mercurio y el comercio establecido y particularmente las casas de empeño.

Probablemente estaba en el ánimo de los huelguistas cobrárselas a las Compañías y al El Mercurio. Y tales acciones pueden haber sido perfectamente planificadas en sus aspectos más generales. Sin embargo, en los saqueos de la tarde los acontecimientos tomaron un giro imprevisto, creciendo la violencia y los ataques al comercio. Es que un nuevo actor había entrado a estas alturas en escena: los más pobres de los cerros, los desempleados, el peonaje urbano y, como suele ocurrir en todos los levantamientos, era el sector “que nada tenía que perder”. La agitación y la revuelta daban sí la posibilidad de tomarse alguna revancha de las agencias de empeño y del comercio.

Los gremios trataron de separar aguas cuando el saqueo se había generalizado indicando que se trataba de “elementos ajenos a ellos” quienes protagonizaban, en la tarde, los desórdenes en el plano. Formal o no la declaración, es un hecho que su movimiento había sido superado y que no estaba en sus planes el saqueo del comercio. Lo que no se puede negar, sin embargo, es que en el saqueo se vio involucrada gran parte de la población y por qué no, también las propias bases de los gremios en huelga, más allá de lo que declararan sus dirigentes.

La represión por cierto fue incrementándose durante la tarde. El Intendente pidió urgente el traslado de infantes de marina de Viña del Mar y de lanceros de Limache. Con todo, las medidas mayores fueron la declaración del estado de sitio –a eso de las tres de la tarde– y el envío de tropas desde Santiago.

A las 17:15 horas partió el primer convoy con 64 hombres del Yungay; a las 19:15 un segundo convoy con 195 hombres y a las 20 horas, un tercero, con tropa mixta del Tacna, del Buin y de la Artillería de campaña. A medianoche,

además, pasó por Santiago, proveniente de Curicó, un convoy con tropa de dragones.

Finalmente las compañías ceden

Las Compañías, impresionadas ahora por la magnitud de los acontecimientos, cedían. La primera en hacerlo fue la Compañía Inglesa. Funcionarios de ella recorrían las calles pidiendo que no se hiciera daño a la Pacific Steam, por cuanto ella se allanaba a pagar la tarifa exigida por los huelguistas. El propio Sharpe, según el comité de huelga, se mostraba ahora dispuesto a conversar.

De Horacio Lyon no eran muchas las informaciones que se tenían después del incendio de la SudAmericana, ya que debió escapar, junto a su familia, por los tejados de las oficinas hacia el Club de la Unión cuando arreciaba el incendio.

Con todo, junto a las iniciativas de El Chileno, que editó una proclama llamando a la calma, la iniciativa mayor corrió por cuenta del diputado demócrata Ángel Guarello. En efecto, en las oficinas del diputado se reunieron durante la tarde los gerentes de las compañías, los contratistas y los dirigentes de los comités de huelga. Todos firmaron ahora un acuerdo de arbitraje para dirimir el conflicto.

El tribunal arbitral quedó compuesto por el almirante Latorre, Juan Naylor y Braulio Moreno, presidente de la Corte. Fernández Vial apoyó la iniciativa y debió trasladarse a Santiago la misma tarde del día 12, llamado desde aquí por las autoridades de gobierno.

Los trabajadores aceptaron, luego de firmado el pacto, volver a sus labores en las mismas condiciones en que se había iniciado la huelga, pero con el compromiso

de parte de los árbitros de que una vez que se arribara a acuerdo sobre salarios, éstos tendrían un efecto retroactivo.

Se alcanzaba acuerdo en la formación de un Comité arbitral después de un mes de insistencia de parte de los trabajadores y de negativa de las compañías. Había que pasar por el “día 12” para que éstos reaccionaran y las autoridades intervinieran de modo más enérgico.

Los enfrentamientos en las calles de Valparaíso con fuerzas de represión que se incrementaron al anochecer tendría un saldo de 35 muertos y 600 heridos, según informaciones oficiales. Otras fuentes hacen subir el número de muertos a un centenar.

Como en la mayoría de las represiones masivas al movimiento popular chileno, es muy difícil determinar el número de víctimas, que normalmente son muchas más que las reconocidas oficialmente. En el caso de Valparaíso, se sabe que muchos muertos fueron recogidos y trasladados a sus hogares sin pasar por postas u hospitales.

Al amanecer del día 13, cuando todavía humeaban los escombros de los incendios del día anterior, “la ambulancia de la Cruz Roja recorría las calles levantando muertos y heridos”[53].

Entre los policías y las fuerzas de línea hubo solo heridos. Ninguno murió en los enfrentamientos del día 12 ni en los enfrentamientos menores del día 13. Entre los manifestantes hubo heridos y por supuesto, víctimas.

Tal fue el caso de Manuel Carvajal, jornalero No 37 de la 3era sección de

aduanas, herido a bala en el cerebro; el de Juan Antonio Cortés, que falleció en el hospital a las 15 horas como producto de una bala alojada en el pulmón; el de Arturo Aliaga, que falleció a las 15:15 horas como producto de un hachazo en la cabeza; el de Ladislao Barriga, muerto por una bala en el abdomen. Y así crece la lista, entre los que se cuentan muertos a bala, sablazos, hachazos y también el caso de un degollado en el cerro Cordillera.

Al amanecer del día 13 las fuerzas de línea y la artillería habían tomado la ciudad; las ametralladoras fueron dispuestas en las plazas, protegiendo a los bancos y el comercio del plano, mientras que el resto de las fuerzas recorrían la ciudad e impedían que se formaran grupos. Un despacho de El Chileno de Valparaíso informaba del siguiente modo sobre el amanecer del día 13:

“Ha vuelto la tranquilidad a los habitantes de Valparaíso... Durante catorce horas los laboriosos habitantes del puerto han visto por doquier las llamas devoradoras de los incendios y los efectos horrorosos de la masacre de ciudadanos. Para conseguir la calma ha habido necesidad de derramar sangre a destajo, como en los peores días del recordado 91. La ciudad amaneció bajo la terrible impresión de los sucesos de la noche y con el temor de que estos se renovaran durante el día.

En las primeras horas las familias y jentes pacíficas no se atrevían a abrir las puertas de sus casas...

La ciudad presentaba el aspecto de un campamento, las calles recorridas por patrullas de fuerza de línea y en las plazas la marinería de la escuadra a cargo de formidables máquinas de guerra, entre ellas las ametralladoras de los buques que pueden en un minuto exterminar a un regimiento.

Hasta las 8 a.m. no se notaba movimiento en las calles”[54].

El día 19 de mayo hubo acuerdo definitivo sobre los árbitros y a fines de julio éste fallaba en gran medida en favor de los trabajadores: los salarios fueron incrementados entre un 10 y un 20%; se garantizó el pago del trabajo sobre tiempo y los horarios de trabajo fueron modificados.

El movimiento huelguístico de Valparaíso, a pesar de la censura telegráfica que impuso el gobierno, trascendió rápidamente a Santiago y provincias. En la capital, el gobierno dispuso la rápida detención de Magno Espinoza, la que se produjo el 13 por la mañana. En la tarde de ese mismo día, la policía disolvió a un grupo que comenzaba a reunirse en la plazuela de la Estación Central; grupos compuestos en su mayoría por empleados de la Maestranza de Ferrocarriles.

No pudo evitar, sin embargo, la policía que más tarde se verificara en las inmediaciones de la Estación un acto obrero en protesta por los sucesos de Valparaíso. Según El Diario Ilustrado hicieron uso de la palabra la mujer de Magno Espinoza y otros oradores ante unas quinientas personas. Según este mismo medio, los oradores “se manifestaron enemigos del orden social” y “uno de ellos habló de un juramento para no leer El Mercurio...”

Culminado el acto de la Estación, se formó una columna que se dirigió hacia el centro de Santiago. La idea era realizar una manifestación de repudio frente a El Mercurio y otra de apoyo al diario El Chileno. La primera fue impedida por la policía, que también actuó para impedir la marcha en las inmediaciones de la calle San Martín. A pesar de todo ello la columna que la encabezaban estandartes rojos con crespones negros se rearticuló y rompieron focos y faroles del alumbrado. Y así y todo llegaron a la calle Bandera, donde se avivó al diario El Chileno.

Según De Shazo, la manifestación popular de Santiago fue de una magnitud mucho mayor que la referida por El Diario Ilustrado, alcanzando a varios miles

los manifestantes. Del mismo modo, en la represión no solo habría actuado la policía sino que también fuerzas militares. Estas últimas patrullaron la ciudad durante la noche, temerosas de que se produjeran manifestaciones semejantes a las de Valparaíso.

La “cuestión social” después de los sucesos de Valparaíso fue abordada por todos los diarios capitalinos, en el Congreso y en esferas de gobierno. Los diarios, en términos generales, condenaron la imprevisión del Intendente Bravo, a quien hicieron responsable de no haber evitado los desmanes populares. Prácticamente todos coincidieron también en calificar de tercas e indolentes a las Compañías que con su actitud contribuyeron al clima de violencia que se vivió en el puerto el 12 y 13 de mayo. Respecto de los trabajadores, las opiniones estuvieron divididas: Unos como El Chileno, insistieron en las justezas de sus demandas y en que los trabajadores actuaron por la necesidad y la impaciencia; otros, si bien reconocieron legitimidad a la demanda obrera, condenaron el vandalismo y la presencia de agitadores anarquistas que mal influían a los obreros.

Todos finalmente se mostraron inclinados a que se realizaran estudios más profundos sobre la cuestión obrera y se viera modo de legislar al respecto.

En el Congreso Nacional se debatió también el asunto. Sin embargo, no prosperó aquí la proposición de un parlamentario para que se formara una comisión especial que estudiara las dificultades laborales. En la votación de esta proposición, 36 por sobre 12 parlamentarios estuvieron de acuerdo en considerar innecesaria dicha comisión. Y así se expresó un parlamentario contrario a la idea de la comisión:

“Aquí está pasando un fenómeno particular: nos estamos asustando con la cuestión obrera, con una cuestión que, en realidad, no existe en Chile”[55].

El presidente Riesco, por su parte se refirió a los sucesos de Valparaíso en los días posteriores. Y en su mensaje al Congreso en los primeros días de junio planteó la conveniencia de una legislación en relación a los problemas obreros. En la práctica, sin embargo, no fue mucho lo que se avanzó.

En lo que no hubo mayores dudas, sin embargo, fue en la necesidad de reforzar las fuerzas policiales y militares del puerto. Así lo habían solicitado, por los demás, las autoridades locales y el comercio. Las Compañías navieras en este punto fueron incluso más allá. En efecto, la Compañía Inglesa solicitó a su Ministerio de Relaciones Exteriores que asignara unidades de la Royal Navy para que se ubicaran en forma permanente en aguas chilenas.

Santiago, 1905: La huelga de la carne o la semana roja

El profesor Gonzalo Izquierdo, que ha realizado un acucioso estudio de los sucesos que conmocionaron a la capital en la tercera semana de octubre de 1905, comienza su relato de este modo:

“El día 22 de octubre se inició como cualquier otro domingo en la tranquila ciudad de Santiago de 1905. Un día de descanso y recreación que para muchos comenzó con la devota celebración de la santa misa. No obstante, era un día festivo en el que a diferencia de otros pasada la hora de almuerzo, una multitud de personas se reuniría en su gran desfile, respetuoso y organizado, cuyo objetivo era reclamar ante las autoridades la derogación de un impuesto impopular, el que gravaba al ganado argentino que importaba Chile”[56].

Organizaba la manifestación el “Comité Central del Impuesto al Ganado”, del

que participaban más de 40 sociedades obreras. El desfile se planificó de tal modo de asegurar la participación ordenada de dos sectores: los gremios que marcharían detrás de su respectivos estandartes y los barrios –10 en total–, para los cuales se fijaron sitios previos de reunión.

Todos los convocados se reunirían en torno a la estatua de O’Higgins y desde allí se dirigirían, primero a La Moneda y luego recorrerían las calles céntricas de la capital, para retornar finalmente a la Alameda. Es importante consignar estos hechos, por cuanto sucesos no previstos cambiarían por completo los objetivos originales de la manifestación (“un gran desfile, respetuoso y organizado”) transformándose en una explosiva (y violenta) protesta popular.

La policía –siempre conservadora en estos asuntos– estimó que el número de manifestantes sumaba unos 12 mil; la prensa subió el número a 25, 30 mil y hasta 50 mil.

En la organización misma del acto era notoria la preeminencia de las sociedades mutualistas y del Partido Demócrata. La presencia de las sociedades de resistencia, de orientación anarquista, era aparentemente menor (Alejandro Escobar, uno de los dirigentes anarquistas más destacados de principios de siglo, niega en sus Memorias que les haya tocado una mayor participación).

El desfile comenzó tal cual estaba previsto, evidenciándose solo a través de los estandartes signos de malestar que iban más allá del tono “respetuoso” del acto. Los trabajadores de la Tracción Eléctrica, por ejemplo, llevaban tres estandartes: en uno de ellos aparecía un buey aprisionado por los ganaderos y el pueblo tratando de liberarlo; en otro, el pueblo estaba representado por un esqueleto y a su lado se veía a un gordo hacendado fumándose un puro; el tercero, finalmente, mostraba a un buey gordo sobre el cual se leía “carne para los ricos”, al lado un caballo flaco sobre el cual se leía “carne para el pueblo”. El más sugestivo, con todo lo llevaban los “pobladores” de la Primera comuna. En él se leía: “Cuidado, señores estadistas, con el despertar del pueblo. El pueblo pide la llapa”[57].

Como a eso de las 2 y media de la tarde, se puso en movimiento la marcha en dirección a La Moneda. Y se produjo allí el primer inconveniente: el Presidente no estaba en la casa de gobierno para recibir a la Comisión designada para hacerle entrega del petitorio de la manifestación (poner fin al impuesto de la carne). La columna se dirigió entonces hacia la residencia particular del Presidente, ubicada en Huérfanos con Amunátegui. Y, aquí las fuentes y testimonios difieren. Según Alejandro Escobar y también Carlos Vicuña Fuentes[58] el Presidente tampoco los recibió, ya que se encontraría de paseo en Pirque, fuera de la capital.

Los historiadores Gonzalo Vial y Gonzalo Izquierdo sostienen, por su parte, que el Presidente Riesco sí recibió a la Comisión y que ésta expuso su demanda: “en virtud del derecho de petición que nos confiere la ley solicitamos: que viendo la poca efectividad del impuesto que grava las importaciones de carne dictada por ley de diciembre de 1897, y cuyo único efecto ha sido el paulatino encarecimiento de dicho artículo, y no habiendo logrado el fin, que consistía en proteger a la industria ganadera nacional con el fin de que ésta se desarrollara, solicitamos la derogación de dicha ley, ya que solo ha ayudado al enriquecimiento de unos pocos”[59].

La demanda, como se ve, era muy concreta, terminar con un impuesto que protegía a los ganaderos nacionales de la competencia que significaba la importación de ganado argentino.

Es muy probable que Riesco recibiera a los manifestantes en su residencia. Vicuña dice que éste no se atrevió a asomarse a los balcones de su casa. Escobar, en cambio, afirma que estaba en Pirque. El hecho es que las primeras manifestaciones de protesta comenzaron cuando la guardia de La Moneda indicó que el Presidente no se encontraba allí. La versión, que corrió muy rápido entre la multitud, fue que el Presidente “se negaba a conversar con el pueblo”. ¿Un mal entendido, un rumor intencionado para lo que venía? Se pueden sostener

distintas hipótesis; el hecho macizo es que la multitud se sintió burlada por el primer mandatario y esta fue la “chispa” que encendió la hoguera. En efecto, al tiempo que corría la noticia de la negativa presidencial, comenzaron también las primeras manifestaciones hostiles: Las consignas subieron de tono: “abajo el ladrón del hermano de Riesco”, “abajo los bribones del Congreso”, “mueran los contrabandistas del ganado”, etc. Y entre los más iracundos el primer objetivo fue La Moneda.

“El pueblo se enfureció y pretendió entrar al Palacio de La Moneda por la fuerza: sudando frío les negó allí la entrada, entre enérgico y suplicante, un joven alferez de apellido Fuenzalida...”[60].

La casa de gobierno fue cerrada inmediatamente por la guardia de palacio. Ello no fue, sin embargo, obstáculo para que fuera apedreada por los manifestantes.

Los ataques se sucedieron luego con rapidez cuando diversos grupos se lanzaron a recorrer las calles céntricas de Santiago y en particular la Alameda.

Los objetivos de la violencia popular fueron claros. En primer lugar, los más diversos símbolos del orden y del poder. En efecto, luego del intento por ingresar a La Moneda no quedaron prácticamente faroles ni luces en la Alameda y cayeron prácticamente todas las estatuas alineadas en esta avenida. Y, fueron también apedreados, más tarde, los edificios del Estado Mayor, de la Tesorería, del Instituto Nacional y los bancos Español-Italiano y el Industria, la imprenta El Mercurio, el Club de la Unión y la Comisaría Yungay.

En segundo lugar, la violencia popular se dirigió en contra de las famosas “casas de empeño” y el comercio, sobre todo extranjero. Sus locales fueron asaltados y saqueados y si no, al menos apedreados.

Luego vino el ataque a algunas residencias patricias y de autoridades públicas. Entre otras fueron apedreadas las casas de Cornelio Saavedra, de Rafael Errázuriz y de Carlos Correa Toro. La misma suerte corrieron las residencias del juez del crimen Alberto Arteaga, del prefecto de policía Joaquín Pinto y del inspector de policía de apellido también Pinto.

Los trabajadores de Maestranza y Ferrocarriles, por su parte, atacaron las instalaciones del telégrafo y destruyeron parte de la vía del ferrocarril al sur. En estos casos el objetivo era de orden más operativo: impedir el retorno del ejército que se encontraba en maniobras fuera de Santiago[61].

Las manifestaciones de protesta y los ataques ya indicados se produjeron durante la tarde y noche del día 22, continuaron al día siguiente, declinarían parcialmente el 24, cuando ya retornaba el ejército a la capital, y solo finalizarían completamente el día 27 de octubre. La policía, en número de 1.800 efectivos fue ampliamente superada en la tarde del 22 de octubre, lo que no fue obstáculo, para que cobrara las primeras víctimas esa misma tarde.

Según Escobar, “cuando se desencadenó la ira popular” las masas se desataron incontenibles atacando los faroles del alumbrado público, destrozando los escaños de la Alameda” y “las pobladas de más abajo... acometieron contra el monumento a la ciudad de Buenos Aires, frente a la calle 18 de septiembre, mientras otras destruían el grupo de estatuas erigidas a la memoria de los escritores de la Independencia”. La policía entonces intervino y trató de disolver a los manifestantes. Pero siguiendo el relato de Escobar esta fue una:

“Imprudencia temeraria, porque el pueblo no reconoció el principio de autoridad, y atacó a los representantes del orden, desempedrando los adoquines de la calzada norte de la Alameda y disparándolo a los oficiales y guardianes, o a sus cabalgaduras...

En un momento la batalla se hizo general, a pesar de no existir dirección alguna de parte del pueblo, y cada hombre actuaba por su sola cuenta en medio de la refriega. Vi caer a jefes de policía con sus caballos, bajo una lluvia de adoquines. Uno de ellos caía y se levantaba, literalmente aplastado por los proyectiles, hasta que un grupo de caballeros con revólveres en la mano lo rodearon y levantaron poniéndolo sobre el caballo, permitiéndole escapar.

“Poco más tarde comenzó a sentirse el tableteo de una ametralladora apostada a la entrada de la calle Gálvez[62].

La policía, en verdad, en las primeras fases de las manifestaciones, como ya hemos dicho, fue superada. Aun así, durante la tarde realizó reiteradas cargas de caballería por la Alameda, que se había convertido en un verdadero campo de batalla.

La sección de Seguridad (los llamados “secretos”) también actuaron. De civil y confundidos con la multitud, dispararon fríamente sobre los manifestantes que cuando habían superado a la policía cometieron la mayor parte de los ataques antes referidos.

Cayó también en la tarde un orador anarquista que se dirigía a la multitud desde una de las estatuas de la Alameda. Los manifestantes levantaron el cadáver y lo pasearon como estandarte hasta la Plaza de Armas. Allí fue rescatado por los bomberos[63].

Entre los ataques a los extranjeros, el más extremo fue aquel que un grupo dirigió en contra del austríaco, funcionario de ferrocarriles, Bautista Seigler. Este “fue ultimado y luego paseado por distintas calles de Santiago por 400 a 500

manifestantes y llevado a la Legación de Italia...”[64].

El gobierno, en vista de lo limitada que resultaba la policía para contener al pueblo, autorizó la formación de “guardias blancas”. Se repartieron 1.000 rifles, la noche del 22, entre jóvenes de la aristocracia. El presidente del Club de La Unión, entre otros, organizó brigadas de 50 jóvenes cada una. Reforzada de este modo la represión no reconoció límites, ya que estos últimos dispararon a diestra y siniestra a todo transeúnte que “tuviera aspecto de trabajador”. Los jóvenes de la aristocracia actuaron de esta manera más influidos por su instinto de clase que por alguna noción de resguardo del orden público. La prensa obrera los acusó los días siguientes de “viles asesinos del pueblo”.

Y el saldo de víctimas así lo comprueba: hubo alrededor de 500 heridos, de ellos unos 65 policías, mientras que el número de muertos subió aproximadamente a 200 o 250. Si se exceptúa el caso de Seigler, prácticamente todas las víctimas fatales correspondieron al campo popular.

El total de detenidos por otra parte, llegó a 800, de los cuales la mayor parte eran “gañanes” (o peones), es decir, desempleados, personas de baja calificación laboral y de ingresos muy reducidos. Otro número importante eran obreros y artesanos, muchos de ellos pertenecientes a gremios anarquistas, como el de los panaderos, zapateros, estucadores, carpinteros y ebanistas.

Los ferroviarios, por su parte, que habían participado de la marcha del día 22 declararon la huelga el día 23 y buscaron ser escuchados en sus demandas más específicas. Entre ellos era también fuerte la corriente anarquista.

La llamada huelga de la carne de octubre de 1905, pensada originalmente como una cívica manifestación de rechazo al impuesto que gravaba el ganado argentino, se transformó en estallido popular.

La cuestión social emergió entonces como violencia social dirigida especialmente en contra del Estado (la casa de gobierno y otros edificios públicos, los símbolos del poder y por cierto la policía), sectores de la aristocracia (sus residencias y bancos), los extranjeros (que dominaban el negocio de las “casas de empeño”) y el gran comercio del centro de la ciudad.

El Presidente Riesco, hombre opaco y sin relieve –al decir de Vicuña Fuentes–, que fue elegido por la Alianza Liberal “porque no era una amenaza para nadie” estuvo siempre por debajo de los acontecimientos sociales que conmocionaron su período presidencial. Tampoco la élite supo administrar ninguna medida eficiente para hacer frente a la cuestión social. No hacían dos años de la huelga marítima de Valparaíso, que había dejado ya un número de víctimas importante. Ahora los sucesos llegaban a Santiago, pero la élite prefirió hacer responsables a los anarquistas y no ir al fondo de la cuestión social. Sus jóvenes dieron la nota alta esta vez, desencantándose de sus ideas juveniles que los hacían relativamente sensibles a los problemas populares. En octubre de 1905 había que cerrar filas frente a un pueblo que no reconocía “principio de autoridad”, que ponía en jaque a la ciudad y amenazaba sus privilegios.

El Presidente Riesco estaba informado del acto del 22 de octubre. Había sido informado públicamente y algunos medios de prensa –como El Chileno, diario católico de la época– habían hecho una larga campaña para abordar el problema del encarecimiento de la carne y sus consecuencias sobre la subsistencia popular. Con todo, careció de iniciativa alguna para afrontar el problema.

Los actores populares en los sucesos de octubre de 1905 son los mismos a los que nos hemos referido en los tres primeros capítulos de este trabajo: los peones y gañanes –los más pobres–, los artesanos agrupados en sus sociedades y los obreros, particularmente del transporte, que ya constituían por estos años sus primeros sindicatos y sociedades de resistencia.

Agreguemos finalmente que el estado de la cuestión social se había vuelto tan agudo en estos años, que más allá del grado de organización sociopolítica alcanzado por los sectores populares, bastó saber de la negativa presidencial para que se desencadenara la violencia.

Es decir, no solo existían condiciones objetivas (o estructurales) que evidenciaban la crisis social de la clase popular, sino que existía también un extendido malestar que se manifestaría como una fuerte subjetividad anti-patronal y anti-estatal.

Luego de los sucesos de octubre de 1905 se culpó una vez más a los anarquistas y a los agitadores. Algunos insistían que se trataba de extranjeros; otros se allanaban a reconocer que eran más los nacionales. Los anarquistas, según la élite, con su demagogia habían arrastrado al pueblo ingenuo y todavía poco civilizado. Sin embargo, la élite sentía también temor porque se reconocía “que existían en el pueblo sentimientos reivindicativos y una amenazante fuerza revolucionaria”[65].

La cuestión social, sin embargo, como hemos reiterado no estribaba solo en la emergencia de la protesta popular, sino que encontraba sus causas más profundas en el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y en la indolencia e incapacidad del régimen social y político vigente para abordar estos problemas.

Octubre de 1905 fue un episodio importante de la cuestión social en Chile. Un episodio porque aun vendrían otros: las huelgas obreras de Antofagasta e Iquique.

Antofagasta 1906: Por una hora y media para almorzar

No habían pasado cuatro meses del estallido popular de octubre de 1905, en Santiago, cuando una nueva protesta popular conmovió a la zona norte del país.

Una huelga obrera en Antofagasta, en febrero de 1906, luego de una semana de paralización de las actividades productivas, culminó con la muerte de 48 trabajadores en la Plaza Colón de este puerto. La represión, esta vez, corrió por cuenta de “guardias blancas” y soldados de las fuerzas de línea.

El movimiento huelguístico, que comprometió a los trabajadores de Antofagasta se inició cuando los caldereros del ferrocarril inglés solicitaron aumentar de una hora a una hora y media el tiempo para almorzar. Y la “hora y media” era, en aquellos años, la norma para el resto del país.

Según El Marítimo, órgano oficial de la Mancomunal Obrera de Antofagasta desde hacía un tiempo “se notaba un bello despertar entre la clase obrera de este puerto”. En este despertar habían jugado un papel de importancia “los caldereros, constituyéndose en Sociedad de Resistencia” y le siguieron “los tipógrafos, carretoneros, carpinteros, fundidores y otros”[66].

Sabemos también, por otra parte, que en 1905 los “socialistas libertarios” (o anarquistas) habían extendido su trabajo de organización y de propaganda en la región.

“Partió primero Luis Olea (más tarde lo veremos en el Comité de Huelga de la

Escuela Santa María). Se internó en la pampa y tomó trabajos de pintura en la administración de la oficina Agua Santa, en el alto de Caleta Buena, al norte de Iquique. En este puerto hizo algunas amistades y conquistó varios camaradas, como Facundo Castro, Alejandro Barraza e Hipólito Galarce. Todos resultaron excelentes luchadores sociales. En seguida, salieron de Santiago en la misma dirección los compañeros Julio E. Valiente, tipógrafo, y Francisco Pezoa, intelectual, obrero y, como tal, bohemio y poeta. De Valparaíso partieron Luis Guerra Sarmiento, oficial mecánico de la Escuela de Artes y Oficios e Ignacio Mora, jefe de los tripulantes de Vapores durante la huelga de abril-mayo de 1903. Estos camaradas se internaron en la pampa e hicieron prontamente adeptos en los gremios salitreros, llegando a constituir un buen núcleo en el pueblo de Pozo Alíñente, donde instalaron una pequeña imprenta y publicaron quincenalmente el periódico La Agitación, gemelo del editado en Santiago”[67].

Pero, no se trataba solo de una extensión o filial nortina de los libertarios. En Antofagasta, en 1903, se había fundado la Mancomunal Obrera (con su periódico El Marítimo) asociándose a ella gremios como el de los lancheros, jornaleros de tierra y marítimos, carpinteros, mecánicos, herreros, caldereros y carpinteros de ribera. Y la Mancomunal tenía como propósito declarado “vincular el porvenir de los combinados i de las clases obreras en jeneral, al bienestar económico, social e industrial”[68].

En suma, el movimiento obrero en Antofagasta había hecho ya sus primeros pasos organizativos y políticos con anterioridad a la huelga de 1906. Más todavía, ese mismo año Recabarren sería elegido diputado por Antofagasta, aglutinando el voto obrero[69].

Pero volvamos por el principio. El gremio de caldereros, considerando escaso el tiempo para almorzar (los trabajadores solían almorzar en sus respectivos domicilios en esta época) iniciaron un movimiento tendiente a obtener media hora más de tiempo para este fin. Ello, como hemos dicho, era la norma en el resto del país.

Se estructuró para tales efectos un Comité compuesto por representantes de todos los gremios de la ciudad. Este Comité envió una nota-circular a todos los empresarios, industriales, administradores, contratistas y patrones en general. Alejandro Escobar fue nombrado secretario de esta iniciativa.

La mayoría de las respuestas fue favorable, salvo la del ferrocarril, en manos de una Compañía Inglesa.

“La Empresa del ferrocarril, con una obstinación rayana en la estupidez – comenta El Marítimo –se negó a conceder a sus operarios lo que éstos pedían, haciendo en cambio proposiciones bastante ridículas, como ser la concesión de la hora i media de almuerzo i la supresión del tiempo destinado a hacer onces, o el recargo de un cuarto de hora en la salida; proposiciones éstas que fueron rechazadas de plano por los operarios...”[70].

Intervino el Intendente y propuso un arbitraje, pero la empresa no accedía a más de un cuarto de hora. Se formó de todos modos un Comité Arbitral con la presencia del Intendente, el Obispo de la ciudad y un escritor. Los dos últimos eran partidarios de acceder a la petición de los trabajadores, pero no tenían ningún poder legal para obligar a la empresa de ferrocarriles.

Se llevó entonces a efecto una asamblea general de trabajadores, el 29 de enero en los salones de la “Gran Unión Marítima”, y se acordó la huelga como una forma de obligar a la Compañía Inglesa a ceder. En esta asamblea participaron alrededor de 3 mil trabajadores.

Esa misma noche del 29 de enero fueron allanados los domicilios y detenidos el presidente del Comité General y el presidente también del gremio de caldereros.

La ciudad, por su parte, amaneció con tropas de infantería resguardando la Intendencia y marinería el ferrocarril.

La huelga fue en sus inicios parcial, comprometiendo a los trabajadores del ferrocarril y solo algunos otros establecimientos. Y cuando salió el tren de pasajeros fue apedreado como una forma de protesta en contra de la falta de solidaridad de los fogoneros y maquinistas.

Circuló también, durante la mañana, un manifiesto en que se daban a conocer las causas de la huelga y se establecía como condición para volver al trabajo:

“ 1o Hora i media de almuerzo, sin suprimir el cuarto de hora para hacer onces...

2o 20% de aumento en el salario de los trabajadores de la Compañía Chilena de Salitre”[71].

Al mediodía, a instancia de Recabarren, que era en esos momentos candidato a parlamentario por el partido Demócrata, se logró la libertad de los detenidos en la noche.

A esta hora el movimiento se había venido incrementando; numerosos grupos de huelguistas recorrían las calles buscando que se sumaran más trabajadores al paro, deteniendo también a los cocheros e invitándolos a acompañar la huelga.

El paro se hizo así general, con la gente del mar y la Mancomunal el número de huelguistas subió a unos seis mil. Y pasó una semana sin que produjera ningún

indicio de solución. El gobierno siguió por su parte la norma, desembarcando más tropa.

Representantes del comercio, entretanto, solicitaron al Intendente para que los autorizara a formar una “guardia de honor”, temerosos “de que la propiedad

sufriera perjuicios” como se sabía había pasado en Valparaíso en 1903. El Intendente se negó, pero finalmente aceptó “con la condición de que no se hiciera uso de las armas mientras no hubiese motivo justificado para ello”.

En vistas de que no se arribaba a ningún arreglo, el Comité de Huelga decidió convocar a un comicio para el domingo 6 de febrero en la Plaza Colón.

Sigamos ahora el relato del periódico de la Mancomunal:

“Tranquilamente celebraba el pueblo un mitin en la Plaza Colón, sin que nada hiciera predecir el sangriento desenlace que le esperaba. Comentábase alegremente el discurso algo inteligible de un negro norteamericano, cuando de improviso hizo su aparición la guardia de honor en correcta formación militar i en actitud provocadora, colocándose en la acera del Club de la Unión; aparición que fue recibida por una turba de muchachos a silbidos i con exclamaciones como ésta: “Abajo los pijes armados”, motivo fue éste más que suficiente para que los bandidos burgueses, los asesinos de levita, dispararan sus armas sobre el pacífico pueblo.

A la primera descarga caían una multitud de obreros muertos i heridos, entre éstos un guardián i un marino.

La fuerza de línea que cuidaba la Intendencia, creyendo que el fuego dimanaba de los huelguistas i que el pueblo se preparaba a tomar la Intendencia, hizo fuego, tomando entre dos disparos a los huelguistas que desatinadamente no sabían qué hacer; caían como mieses segados por mano de diestro labrador. A 48 subió el número de víctimas inmaculadas por la estúpida precipitación de la cobarde burguesía”[72].

Efectivamente, como lo recuerda Escobar en sus Memorias, los manifestantes se vieron de pronto entre dos fuegos. Los que provinieron inicialmente de la guardia blanca y los que respondieron las fuerzas de línea. El comandante Adolfo Miranda no sabía de la llegada de la guardia y se sintió atacado por el pueblo. Ello lo indujo a ordenar a sus hombres que dispararan.

Al día siguiente el pueblo salió nuevamente a la calle y con ánimo de cobrar venganza por las muertes del día anterior. Bajaron el escudo peruano del Consulado y lo pisotearon porque se sabía que el cónsul había participado de la “guardia de honor”. Luego, como también se sabía que muchos de los integrantes de la guardia eran empleados de comercio, atacaron a un joven empleado de apellido Rogers golpeándolo y dándole muerte. Este, se reconoció después, fue equivocadamente tomado como sospechoso.

Finalmente, la multitud atacó el negocio “La Chupalla”, de propiedad de españoles. Le prendieron fuego y ardió no solo esta propiedad, sino que un cuarto de manzana, ya que los manifestantes no dejaron actuar a los bomberos. Se hizo entonces presente la tropa y dispersó violentamente a los manifestantes. Según El Marítimo en este suceso cayeron otros ocho trabajadores.

El número de víctimas, tal como hemos visto en estos casos anteriores es muy difícil de determinar. Probablemente superó los 50 de acuerdo con la información consignada en este breve recuento de los sucesos de Antofagasta.

Luego de estos acontecimientos la represión continuó y varias personas y dirigentes fueron detenidos, entre ellos, Recabarren, los escritores de La Vanguardia, miembros del Comité de Huelga y el redactor de El Marítimo. Hubo también allanamientos, censura telegráfica y suspensión de los periódicos obreros.

Unos pocos miembros del Comité de Huelga, evaluando la magnitud de los acontecimientos decidió lanzar un manifiesto declarando terminado el movimiento y aconsejando a los trabajadores que aceptaran las concesiones logradas.

Iquique, 1907: La mayor violencia en contra del pueblo

La huelga de Iquique de 1907 es probablemente la más conocida del ciclo de manifestaciones y protestas populares que se inició en 1903 con la huelga marítima de Valparaíso.

Ella ha concentrado un mayor número de estudios y sin dudas que la composición musical de Luis Advis y “Quilapayún” contribuyeron –en los años 70– a que este movimiento fuera ampliamente conocido entre los sectores populares[73].

Se trató de una huelga obrera y popular, como fue la mayor parte de los movimientos populares de esta época. Como veremos más en detalle, en ella no solo estuvieron involucrados los obreros salitreros, sino que participaron también la mayor parte de los gremios organizados de Iquique, amén de los pampinos que vinieron del desierto a la ciudad con sus mujeres e hijos.

Por esta misma razón la conducta irracional del general Silva Renard, que contaba con el apoyo del gobierno, no reconoció límites ni se enfrentó con nadie: disparó sus ametralladoras en contra de todos los “desarmados” que se congregaban en un número aproximado a los seis mil en la Escuela Santa María. Pocos militares pueden anotar tal mérito en su currículum.

El contexto nacional que precede a la huelga lo describe muy bien Gonzalo Vial:

“La crisis económica interna –causada principalmente por la “fiebre bursátil” (de 1905-1906) alcanzaba su clímax: cerraban negocios que pocos años atrás habían sido lanzados bajo las esperanzas más risueñas y optimistas; mucha gente perdía su trabajo; los billetes sembrados, el “dinero abundante y barato”, daban su inexorable cosecha: inflación. Una crisis mundial repercutía sobre la interna: el mundo pasaba por años depresivos; faltaba capital; las empresas reducían su ritmo; caían los precios. El salitre chileno fue muy afectado por esta baja, lo cual llevó a organizar la quinta ‘combinación’ patronal (1906). Como sabemos, las combinaciones sostenían el precio reduciendo el caliche elaborado. Significaban, pues cesantía para la desolada pampa nortina. En todas partes cunían las huelgas. Los ferroviarios santiaguinos tuvieron una prolongada, cuarenta y cinco días, en 1906. La maestranza de la capital paró de nuevo al año siguiente; otros sectores adhirieron... Paralizaciones obreras afectaron, asimismo, a Valdivia, Coronel y Concepción. Igualmente decidoras fueron las concentraciones que recordaron el 1 de Mayo los años 1906-1907. Esta festividad revolucionaria venía conmemorándose masivamente desde 1899, pero los años referidos ello se hizo con especial combatividad. Para 1906 hubo dos grandes mítines, uno santiaguino y otro porteño: estrella del primero fue Recabarren. El año 1907 Recabarren se había exiliado, mas la celebración resultó aun mayor: los manifestantes capitalinos triplicaron su número, invadiendo desafiantes el Parque Cousiño; la escena se repitió en el puerto, Concepción, Talca, Valdivia, Iquique...”[74].

Efectivamente una crisis económica sería el telón de fondo de los movimientos

reivindicativos en estos años. Y la historia se repite: en las crisis pagan más alto los que tienen menos medios para defenderse, es decir, los trabajadores, los más pobres.

En Iquique, el malestar y el descontento ya se había manifestado en diversos sectores con anterioridad a la huelga salitrera. En efecto, en los primeros días de diciembre de 1907 los trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles habían realizado una huelga exigiendo aumento de salarios para compensar la desvalorización de la moneda. También los funcionarios judiciales pidieron aumento de salarios. Hacia el 9 de diciembre, una huelga de “gentes de mar” de Iquique y Tocopilla paralizaban las faenas marítimas. Días más tarde lo hacían los trabajadores de la Empresa de Aguas Servidas de Iquique[75].

Todo indica que estas manifestaciones de descontento que se verificaban en el puerto encontraron eco en la pampa, cuyos trabajadores resentían también la crisis y tenían sus propias demandas que hacer a los salitreros.

Según El Mercurio se habrían presentado algunos movimientos aislados y sin importancia el día 13. Sin embargo, el 14 paralizaban 8 oficinas en Cantón Alto y San Antonio. Escobar por su parte recuerda que en esa fecha se realizó un mitin en Zapiga donde “se elaboraron las consignas del movimiento” y los trabajadores de San Lorenzo, en la pampa sur, abandonaron las faenas y se dirigieron a San Antonio. Allí, junto a los trabajadores de otras oficinas decidieron “bajar a pie hasta Iquique, a presentar sus peticiones a los gerentes de las Compañías”.

De este modo, el día 15 arribaron los primeros trabajadores a Iquique. Los administradores, como norma, habían manifestado no estar facultados para atender demandas de aumento de salarios. Ello impuso la estrategia de bajar a Iquique para entenderse directamente con los gerentes de las Compañías.

Ya para el día 16 el éxodo de la pampa se hizo masivo. Algunos a pie, otros en tren; hombres, mujeres y niños iban llegando a Iquique. El gobierno, en el intertanto ordenó inutilizar vías e impedir que los pampinos invadieran Iquique. Y la medida tuvo sus efectos: varios miles quedaron a mitad de camino en Pozo Almonte, en Zapiga, etc. Con todo, un número altamente significativo llegó a Iquique:

“De este modo 1.500 trabajadores de las oficinas de Laguna que protegieron el tren durante toda la noche llegan a la ciudad. Desde San Donato lo hace otro grupo similar. El 19 llegan 300 operarios de Huara, 500 desde Caleta Buena y 5.000 trabajadores desde diferentes lugares. Además de 300 desde Caleta Buena, quienes son transportados en lancha”[76].

En total se calcula que a Iquique habrían llegado unos quince mil y a no mediar la represión del día 21, el número habría seguido creciendo. Iquique en estos años tenía aproximadamente una población de 40 mil habitantes, que pronto se vio incrementada con una sobrepoblación cercana a la cifra ya indicada.

Para apreciar mejor la magnitud del movimiento es necesario decir que en el Comité de Huelga tuvieron delegado reconocido alrededor de 13.500 trabajadores y que considerando el conjunto de oficinas comprometidas en el paro, el número de trabajadores involucrados superaba los 37 mil. De este modo el movimiento tuvo las características de una huelga general ya que el censo de ese año contabilizaba 43.400 trabajadores en las diversas oficinas de la provincia.

Los primeros en llegar a Iquique fueron recibidos por el secretario de la Intendencia (que oficiaba como Intendente subrogante), Julio Guzmán. Este, junto a Santiago Toro y Antonio Viera Gallo escucharon a los huelguistas y sus peticiones, que prometieron ponerlas en conocimiento de los salitreros. Les ofrecieron también la Escuela Santa María para que se hospedaran.

Pero a medida que eran más los que llegaban, hubo que habilitar una carpa de circo como albergue frente a la Escuela; y las sociedades obreras, los Veteranos del 79, la Gran Unión Marítima y comerciantes hoteleros ofrecieron también alojamientos. Algunos filántropos repartieron pan y cigarrillos a los huelguistas mientras el comercio comenzaba a subir los precios de los artículos de primera necesidad. La ciudad a estas alturas empieza a ser dominada, como se comprenderá, por la huelga.

Formado el Comité Directivo de ésta, se vio en la necesidad de administrar algunas medidas de Orden en el tránsito: distribuyó permisos escritos para que circulen los carros.

El Comité de Huelga quedó compuesto por José Briggs como presidente, Manuel Altamirano y Luis Olea como vicepresidentes, Nicanor Rodríguez y Ladislao Córdova como secretarios. Lo componían además 20 delegados que representaban a diversas oficinas salitreras; más 16 delegados que representaban a los gremios de Iquique y dos representantes del Centro de Estudios Sociales Redención. El Comité sesionaba permanentemente en los altos de la Escuela Santa María.

El Comité hizo presente a las autoridades de Iquique y a los salitreros las siguientes demandas: Pago de jornales al tipo fijo de cambio de 18 peniques; comercio libre en las salitreras para evitar la especulación de las pulperías; suprimir por completo el sistema de vales y de fichas (éstas, durante el período de eliminación, deberán ser aceptadas a la par de su valor, es decir, sin descuento); balanza y vara para cotejar peso y medida en todas las pulperías; los cachuchos y achulladores deberán ser cerrados con rejas para evitar accidentes; las familias de las víctimas de accidentes en los cachuchos deberán ser indemnizadas con 5.000 a 10.000 pesos; al cerrar una oficina los trabajadores tendrán derecho a indemnización de 10 a 15 días de trabajo; los administradores no podrán arrojar a la rampla y aprovechar el caliche de los operarios sin pagar

previamente el valor de las carretadas; y, finalmente no se podrá destituir de su cargo a ningún dirigente. Si así lo hicieren las compañías, deberán cancelar una indemnización de 300 a 500 pesos o el equivalente a 2-3 meses de trabajo[77].

El movimiento huelguístico, a pesar de alterar por completo la vida cotidiana de la ciudad de Iquique, tuvo un carácter “tranquilo”, al decir de algunos; “pacífico”, al decir de otros.

El Gobierno, por su parte, instaba en estos días al Intendente subrogante a que mantuviere el orden “cueste lo que cueste” y se apresuraba a reforzar las fuerzas militares*. El martes 17, cuando la huelga era ya general, ancló a la bahía el crucero “Blanco Encalada” con tropas de Arica a bordo. Al día siguiente lo haría el crucero “Esmeralda”. La ciudad empezó entonces a ser patrullada por fuerzas militares mientras la policía era retirada a sus cuarteles. Los trabajadores aguardaban mientras que los salitreros se pronunciaran sobre sus demandas.

Esperaban también el arribo al puerto de la autoridad titular de la provincia, Carlos Eastman. Este lo hizo el día 19 a bordo del crucero “Zenteno”. Le acompañaban el general Silva Renard y el coronel Ledesma, designados especialmente por el gobierno para intervenir en la huelga.

Eastman fue bien recibido por los trabajadores; confiaban que él podría influir positivamente sobre los salitreros, pero tropezó y no solo él, sino todos los que quisieron negociar, con la oposición de los gerentes:

“Aquel mismo día, sin embargo (Eastman) chocó con una muralla insalvable... la propia que habían hallado o hallarían después otros mediadores como el intendente accidental, el vicario apostólico Martín Rucker, el abogado Antonio Viera Gallo, varios jefes militares, etc. A saber que los patrones rehusaban entrar en cualquier conversación si antes los huelguistas no retornaban a la pampa y

reiniciaban el trabajo”[78].

Silva Renard, en cambio era el duro. Consideraba que el conflicto había sido mal manejado, que no se debía permitir que los huelguistas continuaran en la ciudad, que Guzmán había sido débil y que los vecinos habían proporcionado alimentos ¡y hasta cigarrillos! a los huelguistas; los mismos que luego pedirían que se les protegiera en los buques de guerra; que los pampinos, colocaban el interés de sus salarios por sobre los grandes intereses de la patria; que si bien el trabajo era duro y el obrero salitrero “el peón más civilizado exteriormente”, era también “el más altanero, creyéndose productor de las riquezas, explotado por el patrón”[79].

La misma noche que llegó Silva Renard hizo desembarcar ametralladoras y marinería de la Esmeralda. Sus “fuerzas” llegaron entonces a sumar 1.650 hombres considerando soldados de planta, conscriptos, marinos y oficiales.

Pero volvamos sobre las gestiones del Intendente. Propuso a los salitreros, en vista de su actitud negativa, un arbitraje que los trabajadores habrían estado dispuestos a aceptar, pero los gerentes no cedieron. Solo estudiarían esta posibilidad si se cumplía el retorno a la pampa y la reanudación de faenas, como condición previa. Otra alternativa que se manejó fue que se pagara un aumento inmediato en los salarios del 60% mientras se estudiaba el conjunto de las demandas. Los trabajadores nuevamente se mostraron en actitud favorable. Y el gobierno, incluso, ofreció hacerse cargo del 50% de este aumento. Con todo, los salitreros también se negaron. Argumentaron “que no hacían cuestión de dinero” reivindicaba más bien “el prestigio moral que siempre debe tener el patrón sobre el trabajador...” Si negociaban bajo presión perderían ese prestigio y más aun, “confesaban francamente que dejar sin castigo esa verdadera rebelión de los obreros podría traer malos resultados en el futuro”[80].

Como indica Escobar, aunque parezca absurdo, los argumentos de los ingleses influyeron en el estado de ánimo del Intendente. Nicolás Palacios relata en este

sentido, que los obreros percibieron este cambio en el estado de ánimo de la autoridad y empezaron a llamarlo “Mister Eastman”.

No vale quizás la pena discutir en qué grado los argumentos de los empresarios – ingleses muchos de ellos– influyeron en el Intendente, que se había mostrado, inicialmente, partidario de la negociación. Pesaban probablemente en la autoridad otros argumentos también de peso. El Estado chileno y una parte importante de la clase política nacional tenía en el salitre sus principales fuentes de ingreso. Escobar nos dice que el Ministro Sotomayor era salitrero y que el Presidente Montt integraba también algunas compañías en calidad de socio.

Estancadas e interrumpidas las conversaciones el día 20, la situación se fue tornando cada vez más tensa. El 20 cayó viernes y todavía arribaba un nuevo tren con más huelguistas a Iquique.

Hacia el interior, sin embargo, se había iniciado ya la represión. En la oficina Buenaventura la tropa disparó sus armas sobre una columna de cerca de mil obreros que buscaban sumarse al movimiento de Iquique. Murieron ocho trabajadores y otros tantos quedaron heridos. Este mismo día fueron detenidos también muchos dirigentes del interior y trasladados luego en barcos de guerra estacionados en Iquique.

Pero el día “D” para los pampinos fue el sábado 21. Ese día el Intendente de la provincia, presionado por los salitreros y con seguridad por el general Silva Renard, tomó la decisión de obligar a los pampinos a abandonar la ciudad de Iquique y poner de este modo fin al movimiento.

La ciudad amaneció en “estado de sitio”, prohibiéndose el tráfico por las calles en grupos de más de seis personas a toda hora del día; se prohíbe también traficar después de las ocho de la noche, salvo que se porte permiso escrito; se

prohíbe asimismo el “estacionamiento” o reunión en grupos de más de seis personas y se establece que “la gente de la pampa y que no tiene domicilio en esta ciudad se encontrará en la Escuela Santa María y la Plaza Manuel Montt”[81].

Eastman, junto con habilitar un tren para iniciar la devolución de los pampinos y haber decretado el estado de sitio que inmovilizaba a los huelguistas, llamó al Comité de Huelga para que se reunieran en la Intendencia. Los dirigentes se negaron a hacerlo porque era obvio que Eastman, a estas alturas, buscaría detenerlos. La evidencia la da el hecho de que ya había recibido ins-trucciones de Santiago en ese sentido: así rezaba el último telegrama de Sotomayor: “Sería muy conveniente aprehender cabecillas, trasladándolos buques de guerra”[82].

Eastman todavía quiso negociar la salida de Iquique a través del dirigente Abdón Díaz. El Comité o Directorio de la Huelga respondió que bajo estado de sitio y con lo sucedido en Buenaventura no había ya garantías para negociar.

Volvió entonces a escena Silva Renard. Rodeó la Escuela y la Plaza Montt con unos setecientos hombres. Su misión consistía en obligar a los huelguistas a abandonar la Escuela Santa María y que se dirigiera al Hipódromo de la ciudad. Desde allí se les haría retornar a sus lugares de trabajo en la pampa. Y según informara, luego de los sucesos, el propio Silva Renard, así consumó su obra:

“En la Plaza rebosaba una turba de huelguistas que no cabían en el interior de la Escuela. Adentro había cinco mil individuos y afuera dos mil. Como V/S comprende, los oradores no hacían otra cosa que repetir aquellas frases comunes de guerra contra el capital y el orden social existentes... Comisioné al coronel Ledesma para que cercase al Comité que presidía el movimiento, les comunicase la orden de V/S de evacuar la Escuela y la Plaza y que se dirigieran al Club Hípico con la gente. A los cinco minutos volvió el coronel diciéndome que el Comité se negaba a cumplir dicha orden (...) En vista de esto tomé nuevas disposiciones y traté de imponer a los huelguistas el respeto y la sumisión. Hice

avanzar dos ametralladoras del crucero Esmeralda y las coloqué frente a la Escuela con puntería fija a la azotea en donde estaba reunido el Comité directivo de los huelguistas (...) Reuní a los jefes que me acompañaban y estudié con ellos la posibilidad de obtener la sumisión con las armas blancas, atacando la infantería con bayoneta armada (...) Estudiado este plan se comprobó que no daría resultado (...) Vi, por lo tanto que no había más recurso que el empleo de armas de fuego (...) Antes que terminase el día, ordené a las 5.45 p.m. una descarga por un piquete del regimiento O'Higgins hacia la azotea ya mencionada y por un piquete de marinería situada en la calle Latorre hacia la puerta de salida de la Escuela, donde estaban los huelguistas más rebeldes. A esta descarga se respondió con tiros de revólver y aun de rifles que hirieron a tres soldados y dos marineros, matando dos caballos de los granaderos. Entonces ordené dos descargas más y fuego a las ametralladoras (...) Hechas las descargas y ante el fuego de las ametralladoras, que no duraría sino treinta segundos, la muchedumbre se rindió (...) Esta es la relación exacta de los luctuosos sucesos ocurridos ayer, en los cuales han perdido sus vidas y salido heridos cerca de ciento cuarenta ciudadanos"[83].

Informe, por cierto, "oficial" el de Silva Renard. El general, como relata la "Cantata de Santa María" arengó a los obreros y hubo también intentos postreros de negociación (para que abandonaran la Escuela).

Los miembros del Comité Directivo de la huelga por su parte, nunca pensaron que se les dispararía; pensaron más bien que se les sitiaría y se les buscaría rendir por hambre. Ingenuidad, dice Escobar, ya que el Comité habría confiado hasta el final en las garantías constitucionales; en sus derechos a reunión, petición y asociación. Pero el general fue terminante: la tropa dispararía si los obreros no abandonaban la Escuela y la Plaza. Luis Olea –el rucio obrero.., de la Cantata– descubriéndose el pecho respondió: "¡ Si quieren la sangre del pueblo, aquí está la mía!". Los cónsules del Perú y Bolivia mediaron por los suyos, mas éstos prefirieron correr la suerte de los chilenos: Tampoco abandonarían la Escuela.

Cuando los soldados hicieron fuego sobre la azotea de la Escuela “como heridos de rayo cayeron todos y sobre ellos se desplomó la gran bandera”, comenta Nicolás Palacios. Solo Briggs, que se hizo el muerto, sobrevivió al ataque. Que las ametralladoras dispararon por treinta segundos dice el general; dos o tres minutos diría la prensa obrera.

Que en los luctuosos sucesos perdieron la vida y salieron heridos “cerca de ciento cuarenta ciudadanos”, Nicolás Palacios elevó el número de muertos a 195 y 390 los heridos. El testimonio del padre del historiador Julio C. Jobet, sargento del Carampague, asegura que en el primer turno de entrega de cadáveres contó más de 900.

En fin, Silva Renard había consumado de este modo la primera parte de su obra. Ahora le correspondía trasladar a los sobrevivientes hasta el Hipódromo. Y lo hizo con sus lanceros “arriándolos”, dice Escobar y otros más cayeron bajo las lanzas de los soldados cuando no respetaron el orden y quisieron alterar la fila.

Ya en el Hipódromo el general vuelve sobre sus discursos amenazantes, amén de que ordena y actúa él personalmente también en el allanamiento de los huelguistas. Buscaba armas: encontró algunas cortaplumas y 4 revólveres: solo tres cargadas y ninguno con señales de haber sido usado[84].

En la mañana del 22, los pampinos fueron obligados a abordar los trenes que los llevarían de vuelta a la pampa. Algunos prefirieron volver hacia el sur; otros emigraron a los países vecinos.

A contrapelo de la historia, la élite luego de la huelga de Iquique justificó la violencia y avaló la represión. Así lo vio, por ejemplo, el diputado Luis Izquierdo en el parlamento:

“Sin las medidas represivas de las autoridades habríanse producido seguramente... incendio, saqueo y destrucción... Si S .S. recuerda las extremidades dolorosas a que generalmente llegan las agitaciones populares de este país, verá que no estoy viendo fantasmas... S.S. sabe qué horrores presencié Valparaíso hace pocos años, durante una huelga, y qué depredaciones soportó esta capital poco después, ¡horrores que no se ven en países civilizados!”

Pero el ministro Sotomayor iría todavía más allá:

“Si no hemos de tener aquí clases privilegiadas, que no lo sean tampoco las clases populares”

Y para cerrar su discurso hizo gala de aristócrata:

No conozco un país como (Chile) en que el pueblo tenga menos derecho a quejarse de las clases acomodadas. Las clases pudientes... acuden en favor de los pobres, y de los enfermos y de los desvalidos, con abnegación y perseverancia incomparables. Las más distinguidas damas de nuestra sociedad socorren (a los necesitados) con noble empeño... Las instituciones y fiestas de caridad se repiten sin cesar, sirviendo propósitos de altísima caridad social”[85].

La huelga marítima de Valparaíso dio inicio a un ciclo de protestas y de diversas manifestaciones populares que culminan con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907.

No fueron, por cierto, los sucesos descritos hasta ahora, los únicos, sino que los

más relevantes. Hubo huelgas, petitorios y manifestaciones, durante todo este período, en diversas ciudades del país.

Si hemos abundado más en la huelga marítima de Valparaíso, fue simplemente porque era la menos estudiada y la menos conocida en sus detalles. La huelga marítima de Valparaíso fue muy expresiva de un conjunto de elementos que se manifestarían luego –como hemos visto– en Santiago, Antofagasta e Iquique.

En primer lugar todas las manifestaciones y huelgas obreras, tuvieron en estos años como causa principal demandas económicas o relativas a las condiciones de trabajo (salarios, horarios, seguridad industrial, libertad de comercio, etc.). Ello se corresponde perfectamente con el deterioro de las condiciones económicas y de subsistencia que comprometió a la sociedad popular al cambiar el siglo.

En segundo lugar, en prácticamente todos los movimientos que hemos considerado hasta aquí, los empleadores nacionales y extranjeros se mostraron hostiles u obcecados para entrar en negociaciones con los trabajadores. Ellos sentían que cualquier demanda que supusiera una modificación en las relaciones industriales constituía una violación de sus prerrogativas. La ausencia de una legislación laboral, sancionada por el Estado, facilitaba las cosas. Y, en la mayor cantidad de la veces, en favor de los empleadores.

En tercer lugar, se puede reconocer también como una constante, la tremenda ambigüedad y parcialidad con que se movió la autoridad política en relación a las demandas obreras. Muchas veces la autoridad política (ministros, intendentes, gobernadores y también los parlamentarios) reconocían la justeza de las demandas populares. Sin embargo, siempre se autolimitaron en sus funciones ya que consideraban que no les tocaba intervenir en los asuntos económicos y laborales. Sin embargo, siempre se sintieron llamadas a participar de los conflictos cuando el “orden” se veía amenazado. Y para conjurar tales amenazas, la receta era conocida: reprimir con la fuerza a los movimientos populares.

Así, la autoridad política, la más de las veces actuó simplemente para proteger los intereses de los empresarios. No en vano los salitreros financiaban gran parte del erario nacional.

En cuarto lugar, la ausencia de un sistema de regulación en las relaciones capital-trabajo llevó a que se creara prácticamente un sistema de facto en las relaciones “obrero-patrón”. Y en este sistema cuando no hubo voluntad de los empleadores para negociar, ello obligó a los trabajadores a tomar el camino de la confrontación y de la “acción directa”

Los anarquistas, en estas condiciones, fueron los líderes naturales de muchas de las iniciativas de confrontación que protagonizaron los trabajadores al comienzo del siglo. Participaron y ocuparon lugares importantes en las directivas de los Comités de huelga, al menos en Valparaíso, Antofagasta e Iquique.

En este contexto, el Estado y los patrones fueron identificados como los principales enemigos del pueblo y de sus justas demandas de equidad y justicia. Y cuanto más lejos estuvo el Estado de atender las demandas populares, ello lo convirtió no solo en enemigo –aliado natural del capital y los empleadores– sino que estimuló también la auto-organización y la autonomía del movimiento popular chileno.

Finalmente, si se considera que la cuestión social no solo comprometía las relaciones capital-trabajo, sino que el empeoramiento de la subsistencia popular, se comprenderá también que la protesta no fue solo obrera, sino que estrictamente popular. Ella, cuando fue masiva –como en los casos estudiados– fue porque comprometió a la mayoría del pueblo.

[1] Recabarren, Luis E., “El balance del siglo: ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana”. En Estructura social de Chile, Hernán Godoy. Edit Universitaria. Santiago, 1971.

[2] Venegas, Alejandro. Sinceridad. Chile íntimo 1910. Edit. Universitaria, 1919. Carta décimo quinta del Dr. Julio Valdés Cange, seudónimo usado por A. Venegas para sus cartas.

[3] Escobar Carvallo, A. “Chile a fines del siglo XIX”, Revista de Occidente No 119, Santiago, 1959.

[4] Escobar, passim.

[5] Recabarren, ob. cit., passim.

* Cfr Cap. II.

[6] Eyzaguirre y Errázuriz. Monografía de una familia obrera. Santiago, 1903, pag. 93.

[7] Vial, Gonzalo. Historia de Chile. Edit. Santillana del Pacífico. Santiago, 1981, tomo II, pag. 501.

[8] Vial., ob. cit., pág. 502.

[9] Vial., ob. cit., pág. 504.

[10] Vial., ob. cit., pág. 503.

[11] Vial., ob. cit., pág. 504.

[12] Venegas, ob. cit., pág. 229.

[13] Vial, ob. cit., pág. 500.

[14] Gross, Patricio, De Ramón, Armando. Santiago en el periodo 1891-1918: desarrollo urbano y medio ambiente. Documento de trabajo N° 31. CIDU, Santiago, 1983.

[15] Vial., ob. cit., pág. 508.

[16] Vial., ob. cit., pág. 514.

[17] Salazar, Gabriel. Curso de Formación de educadores populares, ECO, 1988.

[18] Romero, Alberto. La viuda del conventillo.

[19] Jobet, Julio. Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile. Edit Universitaria, Santiago, 1955, pág. 130.

[20] Jobet, Julio C., ob. cit., pág. 130.

[21] Citado por Jobet en ob. cit., pág. 131.

[22] Citado por Jobet del trabajo de Galdames Los movimientos obreros en Chile, presentado al Primer Congreso Científico celebrado en Santiago desde el 25 de diciembre de 1908 al 6 de enero de 1909.

[23] Ibidem.

[24] Vial., ob. cit., pág. 531.

[25] El Pueblo de Iquique. 17 marzo 1904.

[26] El Mercurio de Valparaíso, 15 de abril de 1903.

[27] De Shazo, Peter. "The Valparaíso Maritime Strike of 1903 and the development of a Revolutionary Labor Movement in Chile", en Journal of Latin America Studies, Cambridge University.

[28] El Mercurio de Valparaíso, 15 de abril 1903.

[29] El Mercurio de Valparaíso, 17 de abril 1903.

[30] El Mercurio de Valparaíso, 17 de abril 1903.

[31] El Mercurio de Valparaíso, 18 de abril 1903.

[32] El Mercurio, 20 de abril 1903.

[33] De Shazo, ob. cit., pág. 149.

- [34] El Mercurio de Valparaíso, 24 de abril de 1903.
- [35] El Mercurio de Valparaíso, 25 de abril 1903.
- [36] Ibidem.
- [37] El Mercurio de Valparaíso, 27 de abril 1903.
- [38] De Shazo, ob. cit., pág. 150.
- [39] El Heraldo de Valparaíso, 5 de mayo 1903.
- [40] El Mercurio de Valparaíso.
- [41] El Chileno de Santiago. 13 de mayo 1903.
- [42] El Chileno de Santiago, 13 de mayo 1903.
- [43] El Chileno de Santiago, 13 de mayo 1903.
- [44] El Diario Ilustrado, Santiago, 14 de mayo 1903.
- [45] El Chileno de Santiago, 13 de mayo 1903.
- [46] El Diario Ilustrado, Santiago, 14 de mayo 1903.
- [47] De Shazo, ob. cit., pág. 152.
- [48] El Diario Ilustrado, Santiago 14 de mayo 1903.
- [49] El Chileno, Santiago 13 de mayo 1903.
- [50] El Diario Ilustrado, Santiago 14 de mayo de 1903.
- [51] Él Diario Ilustrado, Santiago 14 de mayo 1903.
- [52] Ibidem.
- [53] El Chileno de Santiago, 14 de mayo de 1903.
- [54] El Chileno de Santiago, 14 de mayo 1903.

[55] De Shazo, ob. cit., pág. 152.

[56] Izquierdo, Gonzalo. "Octubre de 1905: un episodio en la historia social chilena". Revista Historia, No13, UnívetSidad Católica de Chile, Santiago, 1976.

[57] Izquierdo, ob. cit., pág. 59.

[58] Escobar, Alejandro. Revista de Occidente. No121. Vicuña F., Carlos. La tiranía en Chile. 1ra edición, Santiago, 1938 En adelante citamos la 3a edición de la Editorial Aconcagua, Santiago, 1987.

[59] Izquierdo, ob. cit., pág. 58.

[60] Vicuña, ob. cit., pág. 47.

[61] Izquierdo, ob. cit., pág. 62 y ss.

[62] Escobar, ob. cit, pág. 6.

[63] Vial, ob. cit., pág. 894.

[64] Izquierdo, ob. cit., pág. 62.

[65] Izquierdo, ob. cit., pág. 81..

[66] El Marítimo, Antofagasta, 17 de febrero 1906.

[67] Escobar, ob. cit., Revista de Occidente No 121, pág. 8.

[68] El Marítimo, 27 de junio de 1903.

[69] Como bien se sabe la Cámara impediría luego que éste asumiera sus funciones como parlamentario.

[70] El Marítimo, 17 de febrero de 1906.

[71] Ibidem.

[72] El Marítimo, 17 de febrero de 1906.

[73] Cantata de Santa María de Iquique, de Luis Advis y Quilapayún,

Santiago,1970.

[74] Vial, ob. cit., pág. 899.

[75] Pizarro, Crisóstomo. Hacia una interpretación global de la evolución de la huelga y del sindicalismo en Chile entre 1890 y 1970..., pág. 49.

[76] Pizarro, ob. cit., pág. 49.

[77] Pizarro, ob. cit., pág. 56.

* El Ministro Sotomayor telegrafió del siguiente modo al Intendente: “Para adoptar medidas preventivas proceda como en Estado de Sitio, avise inmediatamente oficinas prohibición gente bajar a Iquique.

Despache fuerza indispensable impedir que lleguen, usando todos los medios para conseguirlo. Fuerza Pública debe hacer respetar el orden cueste lo que cueste. Esmeralda va en camino y se alista más tropa”.

[78] Vial, ob. cit., pág. 902.

[79] Vial, ob. cit., pág. 903.

[80] Tanto Pizano como Vial describen de este modo la actitud de los empresarios teniendo como fuente los testimonios del doctor Nicolás Palacios.

[81] Pizarro, ob. cit., pág. 62.

[82] Vial, ob. cit., pág. 904.

[83] Citado por Luis Vitale. Génesis y evolución del movimiento obrero chileno hasta el Frente Popular, Universidad Central de Venezuela.

[84] Pizarro, ob. cit; pág. 66. Pizarro sigue en esta parte el relato del periódico El Pueblo Obrero.

[85] Vial, ob. cit., págs. 907 y ss.

Capítulo cinco

La organización social y los dilemas de la política popular

Donde se narran algunos sucesos relativos

al desarrollo de las organizaciones sociales

populares y sus orientaciones y sentidos

políticos.

En un período en que la solidaridad y la

resistencia fueron dos componentes

principales de la política popular, amén

de que hubo que discutir, ensayar y

proponer la formación de un

partido político popular.

Hemos revisado hasta ahora los principales movimientos de protesta que se verificaron en el país entre 1903 y 1907. Los sucesos narrados fueron, en realidad, las expresiones más relevantes de un movimiento popular que en este período recurrió a la huelga y la protesta con inusitada fuerza y resistencia. Solo la estadística de huelgas es a este respecto concluyente. Así tenemos que entre 1890 y 1904 o sea, en 14 años, se registraron 83 huelgas, mientras que solo entre 1905 y 1907 se registraron 65[1].

Ya hemos visto también cuáles eran los principales motivos que llevaron a los trabajadores a demandar a sus patrones y al Estado. Demandas y peticiones que la élite englobó genéricamente bajo el concepto “cuestión social”. Porque la “cuestión social” como hemos sostenido, tenía una doble cara: era, por una parte, expresión de deterioradas condiciones de subsistencia popular, y era también, por otra parte, expresión manifiesta de una protesta social encaminada a modificar esa situación de deterioro.

Por esta doble situación que se escondía detrás del concepto “cuestión social” es que el tema resultaba molesto para la élite. Algunos de ellos cuando negaban la existencia de la cuestión social lo hacían porque o les parecía natural la condición de pobreza en el pueblo o porque no podían aceptar que éstos se organizaran y demandaran cambios económicos y sociales.

Quizás la actitud dominante era esta última, ya que aceptar la existencia de la cuestión social conllevaba reconocer a los sectores populares como interlocutores legítimos, es decir como sujetos sociales y políticos. Ello suponía una actitud más democrática en la élite como asimismo una mayor apertura al

cambio económico y social.

Y no había muchas alternativas, porque más allá de la mayor o menor apertura de la élite para considerar las demandas populares, el pueblo había comenzado a hacer su propio camino organizándose y autoeducándose para producir cambios en la realidad que les tocaba vivir.

El movimiento popular, en la primera década del siglo fue ya un actor social y político relevante que exigía, demandaba o solicitaba que sus demandas fueran atendidas. Y así lo hemos visto en los movimientos de protesta antes analizados. Los trabajadores se organizaban para solicitar alzas en los salarios, exigir la modificación de horarios de trabajo, terminar con el sistema de “ficha-salario”, poner fin a un impuesto, etc.

Y si bien estas eran las demandas de los más organizados, los más pobres que participaron también activamente en las protestas, un poco más tarde, en el tiempo, comenzarían a estructurar sus propias organizaciones y demandas. Tal fue el caso de las Ligas de Arrendatarios que protagonizaron sus propios movimientos de presión y protesta en 1914, 1921 y 1925[2].

Como hemos visto también en el capítulo anterior, ya en la primera década del siglo, las demandas populares –locales y nacionales– no solo se redactaban y escribían sino que iban acompañadas de medidas concretas de presión: marchas, huelgas, protestas, estallidos, ocupación de ciudades o barrios, etc. De este modo, la distancia entre ricos y pobres, que tantos autores reconocieron al cambiar el siglo, se fue tensando, confrontando, reconociendo, haciéndose más evidente y expresándose en diversos campos de la vida social. En una palabra, la distancia entre ricos y pobres se fue politizando.

Normalmente los procesos de politización de los sectores populares han sido

vistos como procesos de demanda, reivindicación y presión relativamente organizada frente al Estado. En esta perspectiva, “hacer política” consiste básicamente en desarrollar una cierta capacidad de interlocución con el Estado. O, desarrollar una cierta capacidad para incidir en el Estado.

Ciertamente, que la sociología moderna así como la pronunciada tradición parlamentaria de la política chilena han reforzado este enfoque para evaluar y reconocer la existencia de una política popular en nuestro país. Sin embargo, si se considera el problema, desde una perspectiva histórica, fácilmente se aprecia que los procesos de politización entre los sectores populares chilenos son bastantes más ricos y complejos.

En efecto, no se trata solo de presión organizada, que por cierto ha existido y ha sido un canal privilegiado de acción histórica. La politización compromete también otro conjunto de aspectos que se verifican “al interior” del propio campo popular y que si bien guardan relación estricta con las contradicciones sociales y políticas que vive globalmente la sociedad, tienen también grados importantes de autonomía.

Existen tradiciones, valores, actitudes y diversas expresiones de la cultura popular que normalmente se redisponen en el marco de una agudización de los conflictos sociales. La politización del mundo popular, en este sentido, conlleva no solo la adopción de una determinada actitud frente al Estado o los empleadores, sino que también una modificación de actitudes y de relaciones al interior del propio campo popular.

Como lo percibieron los propios actores populares al cambiar el siglo, la realidad de opresión que les tocaba vivir no se podía modificar, si al mismo tiempo no se verificaban cambios importantes entre los propios afectados por esas diversas formas de opresión y/o dominación.

Los procesos de afirmación de identidad de un actor social, en este sentido, no se verifican solo por oposición a un sujeto o actor antagónico, sino que por la propia capacidad que alcanza el actor para autorreconocerse y hacer más eficaz su propia acción histórica.

Y, este proceso de autoconciencia no puede ser sino un proceso histórico, práctico y concreto. Se trata, sobre todo, de ese ejercicio pedagógico-político que normalmente las organizaciones populares realizan para autoconstituirse, para organizar sus demandas, para generar iniciativas de acción, etc. Ello ha sido una constante histórica en el movimiento popular chileno y es posible reconocer, en distintos períodos históricos, diversas formas y métodos para crear y recrear la “sociabilidad popular”.

Si se consideran estos hechos, se comprenderá también mejor ciertas expresiones y ciertas ideas-fuerza que estuvieron muy presentes en el proceso de politización que vivieron importantes sectores populares, en los inicios del siglo. Así por ejemplo, cuando se decía “unidad” se estaba hablando de la necesidad de afirmar ciertos compromisos solidarios y estratégicos entre quienes se asociaban o participaban de un gremio. Cuando se decía que había que generar una nueva “sociabilidad obrera y popular” se estaba indicando valores y actitudes propias de un hombre emancipado, que es capaz de actuar desde sí mismo y no enteramente determinado por sus condiciones de subsistencia. O cuando se confiaba en la “ilustración” es porque se reconocía que la educación era un camino privilegiado para producir el “despertar” de la conciencia.

Del mismo modo que la politización comprometía el plano de la conciencia, la identidad o las formas de organización también la politización se la puede ver en las diversas iniciativas encaminadas a producir cambios económicos, sociales y políticos de diversa naturaleza.

Así, por ejemplo, en el terreno económico, muchas de las iniciativas populares en el último tercio del siglo XIX, como también en las primeras décadas del

actual, estuvieron encaminadas a producir cambios principalmente a través de recursos propios. Como ya hemos visto, el movimiento mutualista se orientó básicamente en esta dirección impulsando diversas iniciativas en el terreno de la salud, la educación y la previsión social. Con todo, al cambiar el siglo, la necesidad de producir cambios económicos llevó también a los sectores más organizados a recurrir a la huelga y a diversas formas de presión para obligar al Estado y a los empleadores a que atendieran ciertas demandas populares.

Del mismo modo, en el plano político, la coyuntura de principios de siglo conllevó importantes cambios en las organizaciones populares –del mutualismo se transitó a la organización sindical y por gremios, aun al margen de toda legalidad sancionada por el Estado–. En fin, en el plano político se descubrió también la necesidad de constituir un partido de los trabajadores inspirado en el ideario socialista y libertario que fue dominante en aquellos años.

Estudiar el proceso de politización en conjunto, como se comprenderá, es una tarea compleja y supera las metas que nos propusimos para el presente trabajo. Por esta razón, en esta parte final, abordaremos solo algunos aspectos, que nos han parecido relevantes en el proceso de politización que vivieron ciertos sectores populares al iniciarse el siglo.

Mutualistas y demócratas

La experiencia de la Sociedad de la Igualdad de 1850 dejó huellas entre los artesanos y los sectores populares que fueron convocados en este año a la acción política. Bajo hegemonía liberal, sus demandas más propias quedaron en segundo plano y la “revolución del 51” no fue capaz de quebrarles la mano a los más conservadores, que siguieron dominando en el gobierno. Del Estado, en consecuencia no era mucho lo que se podía esperar. Había que volver sobre aquellas inspiraciones más autónomas de la Sociedad de la Igualdad. Aquella

primera política que estimuló más la organización popular y la educación y el debate en torno a proyectos concretos de mejoramiento económico y social.

El mutualismo fue quien recogió esta orientación y la potenció y desarrolló en el último tercio de siglo. Por ello, su acción tendió a centrarse en el desarrollo de las propias capacidades de los asociados para resolver sus problemas económicos, sociales y culturales más apremiantes. Crearon, como hemos visto, escuelas nocturnas, para las cuales luego solicitarían subvenciones estatales; adelantaron el primer sistema previsional y de salud, mediante el ahorro mutuo, la contratación de servicios médicos, la subvención de boticas y el pago a los asociados de diversos servicios y necesidades.

Esta práctica social, de asociación y de materialización de proyectos concretos de mejoramiento económico y social, a cierto grado de desarrollo replantearon la cuestión política en el sentido de influir sobre el curso general de los “negocios públicos” y la política general del país. Algunos vieron entonces la necesidad de fundar y contar con un partido político obrero y popular. En este contexto, en 1887, surgió el Partido Demócrata con Malaquías Concha a la cabeza.

El Partido Demócrata nació a la vida política, estrechamente vinculado al mutualismo, aunque no sin tensiones y conflictos si se considera la tendencia predominante en el mutualismo de prescindencia hacia la acción política tradicional. Y ambos, mutualistas y demócratas, se convirtieron en los principales organizadores del pueblo cuando terminaba la década de los 80.

Este partido, de agitada vida interna, sería el primero en definirse por referencia al mundo popular y sus demandas de cambio y justicia social. Pronto, la guerra civil del 91 haría surgir en él encontradas posiciones. Sin embargo, hacia 1894, cuando se reunificaban sus filas, afirmó los principios democráticos como eje articulador de su política:

“Los acontecimientos políticos desarrollados en el país durante la última década y en especial la deplorable situación económica creada en la República por la reacción entronizada en el gobierno, imponen como un deber de la hora presente, el agrupamiento de todos los hombres de bien alrededor de una bandera de principios (...) y la organización de una asociación política fuerte, unida y poderosa, capaz de establecer el imperio de la razón y el derecho y de impedir en el presente y en el futuro todo género de opresión, toda especie de tiranía, toda servidumbre y toda explotación en favor de castas privilegiadas, llámense teocracia, aristocracia u oligarquía”.

Insistía también el Programa del Partido Demócrata, en 1894, en la necesaria intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales:

“Cuando el Estado interfiera en favor de los débiles y desheredados... no hace más que reparar el mal que se ha cometido anteriormente”.

La democracia, por su parte debía ser capaz de lograr que:

“los hombres no se vean obligados a alojarse en barrios insalubres, que obtengan una remuneración equitativa por su trabajo, que cada cual reciba la instrucción suficiente, que la duración del trabajo no sea excesiva, que los niños y las mujeres no sean obligadas a trabajar en ciertos casos, que los trabajadores o inválidos obtengan una pensión, que los indigentes o enfermos sean acogidos...”.

Y más que un Estado omnipotente y centralista se debía propender a un Estado que reconociera y subvencionara a las organizaciones populares.

“El Estado debe subvencionar a las asociaciones obreras que tengan por objeto el ahorro y el socorro mutuo, como el medio más práctico de procurar el bienestar y la educación del pueblo...”[3].

Estas orientaciones generales del Partido Demócrata lo convertirían en pocos años en el principal centro de asociación política de jóvenes intelectuales de clase media, de los artesanos más inquietos y con vocación política y también de los primeros líderes obreros. El Partido Demócrata, de este modo, se había convertido hacia fines del siglo XIX en el partido popular.

Con todo, el aprendizaje político que ensayaba el Partido Demócrata pronto daría lugar a prácticas que lo alejaban, o la menos ponían seriamente en cuestión los ideales proclamados.

En efecto, el Partido Demócrata muy pronto ingresó y llegó a formar parte de la política tradicional que imperaba en el país. Esta era la política del “régimen parlamentario” chileno (1890-1920) y de los partidos denominados “históricos” (liberales, conservadores y radicales). Y si algo caracterizaba a esta política era su distancia con los sectores populares. Era una política de élite, de terratenientes, de banqueros y de abogados. Los temas de la política podían ser “doctrinarios” (la oposición entre laicos y católicos). Podían ser también económicos (referidos a los montos de los impuestos de exportación o al debate sobre determinadas obras públicas). Pero, la mayor parte de las veces lo que preocupaba a los políticos eran las precarias y cambiantes alianzas y coaliciones de poder. Estas disputas normalmente se verificaban entre el Congreso y el Ejecutivo; el primero censuraba constantemente a los Ministros si estos no realizaban sus políticas (las llamadas “rotativas ministeriales”) mientras que el segundo usufructuaba del erario nacional, favoreciendo a sus partidarios y defendiéndose del Congreso. Cambiaba el gobierno y se intercambiaban los roles.

El Partido Demócrata confiaba en los métodos legales y pacíficos y en las

elecciones como medio para influir en el gobierno y en el Estado. Ello lo hacía participar del régimen parlamentario al tiempo que ser parte activa también de los proyectos populares en la base social. Con todo, su eficacia histórica y práctica en el régimen parlamentario daba menos resultados que los esperados y su base social pronto –al finalizar el siglo– se inquietaba cada vez más y empezaba a confiar más en sus propias capacidades organizativas y de acción que en la acción política tradicional.

La tensión se instaló entonces al interior del partido demócrata. Y, éste comenzó a crecer desgajándose, dividiéndose, dando origen a nuevos núcleos y “partidos” (también a poderosas corrientes internas) que buscaban dotar de contenido social a la política del Partido Demócrata. “Socializar” su política diría más tarde Alejandro Escobar rememorando estos años.

En poco más de veinte años, como dice Marcelo Segall del “árbol democrático” se desprenderían varias ramas y sembráronse también semillas nuevas; unas prosperaron, otras volvieron al tronco madre. Pero ya volveremos sobre el punto. Antes es importante que nos refiramos a la evolución del movimiento social.

Mutualismo y resistencia

Las mutuales en las últimas décadas de siglo, cuando alcanzaban su mayor desarrollo, vieron también la necesidad de federarse. Hubo diversas iniciativas en Santiago y también en provincias: La Liga de Sociedades Obreras (Valparaíso, 1888); la Confederación Obrera de Sociedades Unidas (Santiago, 1894); La Confederación de Sociedades Obreras de la Provincia de Tarapacá (Iquique, 1896), etc.

El esfuerzo federativo tuvo, en fin, su punto de llegada, el año 1900 cuando se conformó el Congreso Social Obrero. Este declaró ese año agrupar a unos 10 mil socios y contar con la adhesión de 169 sociedades obreras[4]. Entre sus dirigentes destacaban el demócrata Zenón Torrealba y el doctor Fernández Peña.

Fuera de la acción gubernativa, escasa como hemos visto, el doctor Valdés Cange estimó que esta era la institución que más apoyo brindaba al pueblo en aquellos años.

El Congreso Social Obrero que se reunía cada dos años, impulsó diversas “campañas” en contra del alza del costo de la vida, por la enseñanza primaria obligatoria y también por poner fin al impuesto que gravaba el ganado argentino. Ya hemos visto las proporciones que alcanzó este movimiento en octubre de 1905.

Con todo, a partir de las propias sociedades obreras de tipo mutual, se fueron abriendo paso hacia fines del siglo y sobre todo entre 1902 y 1907, un nuevo tipo de sociedades y de orientaciones políticas entre los trabajadores. Nos referimos a las “sociedades de resistencia” y al ideario anarquista que las acompañó.

Los artesanos y obreros que fundaron estas sociedades en muchos casos, formaron parte del mutualismo; en otros se distanciaron de él, porque la cuestión principal para ellos ya no podía ser solo la “ayuda o el socorro mutuo”; había ahora que enfrentar al capital y resistir su dominio sobre el elemento “productor”, es decir, los trabajadores. Las dificultades y precarias condiciones de vida popular que hasta ayer los mutualistas subsanaban mediante el “socorro mutuo”, había ahora que subsanarlo disputando con los patrones y arrebatándoles lo que en justicia pertenecía a los trabajadores. Y los vientos en muchos sentidos soplaban en favor de los anarco-sindicalistas, por cuanto el deterioro creciente de la subsistencia popular hacía cada vez más insuficiente la acción social de los mutualistas; la concentración obrera en diversos centros industriales y mineros obligaban cada día más a ejercer presión directa sobre los

empleadores y sobre el Estado; en fin, porque del Estado era muy poco lo que se podía esperar y menos todavía de la política tradicional de los partidos históricos.

El anarquismo pronto llegaría a ser para un sector de artesanos, de obreros y sectores provenientes de la clase media “el ideal de la época” como relata José Santos González Vera:

“Era el ideal de la época, el asilo de todas las esperanzas... El socialismo no logró extenderse acaso porque los partidos demócrata y radical asimilaron a sus programas de promesas el contenido mínimo de aquel.

“Dominaba en los anarquistas el deseo de saber, el anhelo de sobresalir en los oficios, el afán de ser personales... Se tendía a la diferenciación hasta con perjuicio del buen sentido. Uno suprimía del lenguaje todo término que surgiera la idea de propiedad; otro consagró a la oratoria; éste encarnaba a Zaratustra; ése adoptaba el régimen vegetariano; aquél hacía escritor; tal adoptaba por la música; cual convertíase en vagabundo para predicar la gran palabra; zutano echaba sobre sí la tarea de ser un ejemplo humano; mengano entregábase a la organización de sociedades de resistencia para interesar al pueblo en sus ideas; perengano ejerció el valor de vender periódicos sin Dios ni Ley en la puerta de la Iglesia...”[5].

Junto con estimular los desarrollos profesionales –sobre todo entre los artesanos– y estimular la lectura y también la vida bohemia y las artes –entre las clases medias y los obreros– el anarquismo era también portador de un discurso especialmente dirigido a los trabajadores. Un discurso libertario que rechazaba todas las formas de opresión y autoritarismo y que al mismo tiempo sugería tácticas de acción y proposiciones de sociedad futura.

“El capitalismo descansa sobre los hombros de los pobres. Son los famosos pobres quienes mueven las máquinas, cargan el fusil, mantienen las iglesias, labran los campos, levantan casas, hacen caminos, sirven de policías, cocinan, cosen, lavan, extraen minerales, conducen barcos, inventan, escriben en favor de los expoliadores...

Con alharaca no se obtiene la liberación. Es necesario abrir la mollera de los trabajadores y decirles que desarrollen su personalidad, que se endurezcan y se nieguen a sostener el Estado. Puede demandar sufrimientos la conquista de la libertad, pero ésta vale todos los sacrificios. Es la acción del hombre emancipado la que puede volcar los poderes que hoy nos subyugan. La lucha, pues, debe radicar en el individuo que expresa su voluntad por sí mismo, fuera de todo partido, lejos de toda sociedad y de cualquier ligazón que ineludiblemente conduce a la tiranía. Nosotros no queremos reemplazar a los mandones ricos por mandones proletarios ...”[6].

Las “sociedades de resistencia” impulsadas por los anarquistas adquirieron un gran desarrollo en los primeros años del siglo y particularmente en el ciclo de protesta popular que va desde 1903 a 1907. Los tripulantes o vaporinos de la huelga portuaria de Valparaíso estaban organizados en “sociedad de resistencia” y uno de sus principales dirigentes era el obrero anarquista Magno Espinoza. Como hemos visto éste fue el gremio más radical en la huelga. Menor, según algunas fuentes, pero no menos sustantiva fue la participación de los anarquistas en el “octubre rojo” de Santiago de 1905. El “Atenea Obrero”, por ejemplo, de orientación anarquista, ocupaba un lugar destacado en la marcha inicial. En Antofagasta, por otra parte, ya vimos que entre los antecedentes del movimiento, estuvo ese “bello despertar” que relata El Marítimo y que se tradujo en la organización de “sociedades de resistencia” entre los caldereros del ferrocarril y otros gremios que fueron parte activa de la huelga. Finalmente, tanto José Briggs, que ocupó el cargo de presidente, y Luis Olea, vicepresidente en el Comité de Huelga de Iquique, en 1907, eran también anarquistas. El primero venía del mutualismo, el segundo amigo de Escobar y Magno Espinoza habíase dirigido al norte con el objeto de extender el movimiento libertario.

En estos años, las “sociedades de resistencia” y el anarquismo se entendieron entre los artesanos y sociedades obreras organizados por oficio. Particular desarrollo alcanzó el movimiento entre los tipógrafos, los zapateros, panaderos, obreros y maestros de la construcción. Y también entre los gremios del transporte, especialmente entre los marítimos y los ferrocarrileros.

Las sociedades de resistencia y los anarquistas estuvieron de este modo a la vanguardia del movimiento popular en el cambio del siglo. En el desarrollo de la organización obrera y artesanal –que transita del mutualismo a las primeras formas de sindicatos obreros– en la configuración de las más importantes huelgas y movimientos de protesta, recomendando el uso de la táctica de “la acción directa”, que en pocas palabras significaba ejercer formas concretas de presión y/o violencia cuando no había espacio para la negociación; y finalmente, aportaron también en la proyección política e ideológica del movimiento popular en estos años.

En efecto, el anarco-sindicalismo fue portador de una importante dosis de utopía y fervor revolucionario. Las huelgas obreras en Chile, particularmente, la marítima según ellos, evidenciaban el anacronismo del sistema capitalista e inauguraban el camino de la redención y la revolución social.

“Mi modo de ver y creo que la mayoría de los que están aquí piensan igual– decía un orador en una asamblea– es que se debe afrontar la vida como es. ¡Sabemos que los pobres lo hacen todo! Más ¿qué conseguimos con decirlo? Si no se unen en sociedades de resistencia, ¿cuándo cambiará el mundo? En palabras, la revolución social está hecha hace siglos. Otra cosa es operar el cambio. Ahí viene el forcejeo, incluso con los proletarios mismos. (...). La lucha es muy seria y para hacer el camino debemos aliarnos con cuantos nos pongan buena cara. Lo interesante es robustecer la acción directa y no olvidar el fin, que no puede ser otro que formar una sociedad a base de grupos afines, de productores, en la cual cada hombre aportará el esfuerzo que pueda y recibirá lo que necesite”[7].

El debate sobre las “tácticas de acción” y sobre el horizonte estratégico del movimiento popular chileno ocupó grandes espacios en la prensa obrera y estimuló la imaginación y la necesidad de ir tomando posiciones. Tal es el caso de un debate que sostienen diversos dirigentes obreros en El Marítimo de Antofagasta. El editorialista los llamaba de este modo a “fijar rumbos”:

“... queremos solamente que cada cual exponga sus doctrinas al pueblo sin usurpar principios ajenos. El demócrata que diga

–’Yo soi demócrata i quiero el GOBIERNO del pueblo por el pueblo, basado en la elección popular de los magistrados; en fin; yo quiero el self government de la República. Soi republicado legalitario”. El que es socialista autoritario que diga:

Yo soi socialista autoritario i legalista: quiero la igualdad económica bajo el amparo de la Autoridad i el Estado, soi anti-republicano, pero admito la legalidad autoritaria de la ley. Y los que como nosotros son socialistas revolucionarios debemos esclamar. Somos comunistas i queremos igualdad absoluta, desconociendo en lo establecido su legalidad i su derecho.

I así el pueblo comprenderá que el ideal demócrata es un ideal político, que el ideal socialista autoritario es un ideal político-social i que el ideal revolucionario es social-humano”[8].

Y, comentaba el mismo periódico en torno a la “revolución social”:

“... a cada paso oímos hablar de la Revolución Social, del juicio popular de la

sociedad presente por la sociedad futura. ¿I qué se entiende por la Revolución Social? ¿No es el día en que la mano que construye amarrada con el grillete del esclavo se levante para destruir i reivindicando su personalidad de bestia de carga, de bestia de la faena, en el hombre emancipado, de libre arbitrio i de libre acción? ¿No es el día en que la humanidad doliente destruya el viejo i pervertido Pasado, el corrompido i criminal Presente, para reconstruir la nueva humanidad sobre el solio bendito de la igualdad i el amor?

¿No es el día que borrando todas las infames aberraciones de los códigos i todas las maquinaciones bastardas del Estado se eleve al hombre a la lucha de la vida protegiendo la especie con los lazos majestuosos i unijérrimos de la Fraternidad? Pues bien, si queremos todas esas cosas, si ansiamos la Revolución emancipadora, si moralmente somos emancipados i somos fuertes en nuestros principios marchemos rectos a nuestros fines”[9].

Las mancomunales

Fundadas primero en el norte ya que surgieron como respuesta a las “combinaciones” de los salitreros, se extendieron luego a distintos lugares del país. La primera se creó en Iquique el año 1901, le siguieron luego las de Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiapó y Chañaral en el norte y las de Lebu y Lota-Coronel en el sur. Todas ellas vieron la luz entre los años 1902 y 1903.

La mancomunal obrera representa quizás una de las mejores síntesis entre el mutualismo y la resistencia al capital surgido a través de las ya mencionadas sociedades de resistencia.

La mancomunal dio plena continuidad a las tareas mutualistas. Reglamentó y

normó claramente el uso de los ahorros –como lo habían hecho las mutuales santiaguinas años antes–. Así, por ejemplo la Mancomunal de Iquique estableció que:

“Este socorro mutuo comprende el auxilio a los miembros activos del gremio en caso de enfermedad, la inhumanación modesta y decente de sus restos y la protección en caso de incendio. También compromete la protección a los que sean víctimas de injusticias con motivo de su trabajo, siempre que lo acuerde un Tribunal especial para este caso, nombrado por el Gremio el Junta General, de entre sus propios miembros.

La protección a las familias de los que fallecieren, esta comprendida en el Seguro sobre la Vida implantado por el Consejo Directivo de la Combinación Mancomunal de Obreros...”[10].

Junto a estos usos del ahorro –que adelanta por cierto lo que el Estado asumiría solo veinte y hasta treinta años más tarde– las Mancomunales promovieron la fundación de Escuelas Nocturnas, bibliotecas, centros sociales y cooperativas.

Su participación, por otra parte, en los movimientos de protestas ya la hemos adelantado en páginas anteriores. El mancomunismo nortino formó parte del ciclo de huelgas y protestas populares que culmina en 1907. Y declinó ese mismo año en que se verificó en el norte la mayor de las represiones al movimiento popular.

Desde el punto de vista político e ideológico convivieron entre los mancomunados diversas tendencias, que en términos generales se manifiestan también en el conjunto del movimiento popular en estos años. Ellas eran la corriente demócrata, la socialista evolutiva y la ácrata o socialista revolucionaria.

Estas corrientes, que compartían una cierta visión común de los problemas que enfrentaban los trabajadores y que a veces se distinguían solo en matices o en relación a los métodos de acción y a cuestiones relativas a las características del nuevo orden social, se expresaban a través de diversos periódicos. La mayor de las veces, sin embargo, concurrían todas en el periódico oficial de la Mancomunal. Como se sabe cada Mancomunal, normalmente al momento de fundarse, destinaba fondos para la edición de un periódico obrero.

Estos periódicos más las conferencias, los actos culturales y la formación de centros o grupos de estudios entre los obreros fueron una importante vía de politización. Las huelgas y protestas así como la organización de actividades de la mancomunal completaban en términos prácticos la politización laboral.

La Mancomunal, en suma, buscó articular en su seno tareas mutualistas, sindicales y de partidos políticos populares. En ello, quizás estriba su mayor originalidad. En el grado de vinculación de las tareas sociales con las tareas políticas, que a estas alturas, era urgente desarrollar.

Por cierto que ello daba lugar a serios conflictos: debates en las conferencias y en la prensa donde se contrastaban posiciones; expulsión de socios y acusación pública en el periódico (acusados de “traidores a la clase obrera”) cuando alguien hacía mal uso de los fondos o colaboraba con el enemigo, etc.

En la Mancomunal que fue concebida como una organización laboral y comunal, participaban todos los gremios de la comuna. Fue así frecuente que en los puertos nortinos conectados a la explotación salitrera, la Mancomunal estuviera compuesta por cuatro tipos de grupos o gremios: a) la gente de mar que conformaba los gremios marítimos (lancheros, pescadores, estibadores, etc.); b) los gremios mineros (mineros pampinos, carretoneros, trabajadores a jornal); c) los gremios de artesanos (panaderos, zapateros, carpinteros, herreros, mecánicos,

talabarteros, etc.); y d) los grupos de señoras y señoritas que podían agruparse por oficio (costureras, lavanderas, aplanchadoras) o como grupo femenino sin distinción de labores[11].

La única condición que se exigía para ser parte de la Mancomunal era “pertenecer a la clase obrera”. Y el concepto de “clase obrera” era concebido de un modo muy amplio por los mancomunados; perfectamente se podría asimilar al de “clase popular” en el sentido que se trata de aquellos “elementos activos ... (e) integrantes de la vida comercial e industrial”: aquel que “sufrir en su jornada laboral injusticias y ve vaporeados sus derechos”; aquel, “que no es amparado por el Estado ni otra autoridad”. En suma, como señala Ximena Cruzat, se trata de aquellos que comparten determinadas “condiciones de existencia y de trabajo” quienes son definidos como clase obrera y son llamados a incorporarse a la Mancomunal[12].

En la medida que el movimiento mancomunal alcanzó mayores grados de desarrollo –en muy pocos años por lo demás– se vio necesario generar una instancia federativa nacional. Con este propósito se reunieron todas ellas en Convención, en la ciudad de Valparaíso en mayo de 1904. En esta Convención se aprobó enviar un petitorio al gobierno, lo que provocó diferencias con los anarquistas que no eran partidarios de este tipo de comunicaciones con la autoridad, y se acordó también la constitución de “Cámaras de Trabajo”, por provincias donde se expresaran y prevalecieran “la opinión autorizada del interés de cada gremio”. Para efectos de la “propaganda de los ideales” se acordó asimismo mantener “los órganos propios de publicidad” y para efectos de la ayuda mutua establecer compromisos entre las diversas mancomunales[13].

El movimiento mancomunal, particularmente en el norte, aunque no exclusivamente, contribuyó decididamente no solo a la organización popular, la defensa frente a los empleadores y la difusión de propuestas políticas e ideológicas. Junto con todo ello, los mancomunados ganaron también en identidad en este proceso.

“El movimiento mancomunal... fue conociéndose asimismo, leyéndose en las propias publicaciones, polemizando, fue armándose movimiento; cada combinación se daba a conocer a las demás, se sentía parte de un mismo grupo con las otras; se hablaban y se escuchaban recíprocamente. Fueron atacadas y combatidas muchas veces en bloque o solidarizaron unas con las otras cuando solo alguna fue cuestionada. La identidad apareció: fue asignada por los demás, fue obtenida por ellos mismos”[14].

Las diversas opciones para configurar un partido socialista

Configurar un partido socialista fue una idea que rondó por las mentes de los dirigentes obreros y de artesanos y de quienes consagraron prácticamente su vida a la “organización” y la “propaganda” obrera y popular desde fines del siglo pasado.

Y al examinar el período que va desde los primeros desgajamientos “demócratas” en 1895 a la fundación del Partido Obrero Socialista, en 1912, veremos que hubo claramente tres opciones: Primero, fundar directamente un partido socialista u obrero socialista; segundo, constituir una corriente socialista al interior del partido demócrata, y tercero, considerar la posibilidad de que el socialismo “no era, ni podía ser un partido”.

Estas tres opciones, como indicaremos al hacer un breve recuento histórico del problema de la fundación de un partido socialista, a veces convivieron en el tiempo, otras, una se impuso sobre las restantes y en algunos casos también, un mismo protagonista de una de las opciones cambió de posición para sumarse a otra de ellas.

Los primeros desgajamientos del partido demócrata, a fines del siglo XIX fueron la fundación del Partido Conversionista, el Centro Social Obrero, la Unión Socialista y el Partido Obrero Francisco Bilbao[15].

En el primer caso, el de los “conversionistas”, su nombre indica cuál era su principal propósito: alcanzar la “conversión metálica” tanto del papel moneda como de las fichas. Esta era por cierto una demanda reiterada de los trabajadores en la medida que la desvalorización de la moneda, como producto de las emisiones, eran identificada como una de las razones principales del encarecimiento de los productos de primera necesidad. Su programa fue limitado, según Segall, y su sobrevida como partido también.

En 1896, se fundó el Centro Social Obrero del cual participaron algunos “conversionistas”. Este Centro tuvo méritos mayores que su antecesor ya que convergieron en él diversas personas y tendencias: liberales, masónicos y “socialistas igualitarios”. Su programa fue también más amplio: protección a la industria, unificación de las clases obreras, combate a los partidos “históricos”, etc. Hubo también un serio esfuerzo disciplinario que buscaba reformar los hábitos “asambleístas” aprendidos en el partido demócrata y poner coto a las prácticas conspirativas que se habían impuesto después de la revolución del 91.

En el Centro Social Obrero hicieron sus primeros pasos y aprendizajes políticos algunos connotados anarquistas, como el poeta Carlos Pezoa Véliz, el dirigente obrero Magno Espinoza y también Juan Peralta y Juan Rafael Allende.

Al poco tiempo de fundado el Centro Social Obrero, Alejandro Escobar se reunía en casa del mueblista Belarmino Orellana, junto a Luis Olea y Magno Espinoza para discutir la formación de un partido socialista. Se pusieron en contacto luego con los Olivares (padre e hijo) que publicaban en ese tiempo el periódico obrero La Igualdad. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa que fueron macerando en el invierno de 1897. Mientras se preparaba la asamblea inaugural del nuevo partido editaron una publicación semanal El Proletario.

Finalmente, para el domingo 17 de octubre de 1897 fue fijado el acto público que daría origen al partido. Se acordó denominarlo Unión Socialista.

El acto, sin embargo contó con la imprevista y sorpresiva intervención de la policía secreta y un grupo de “garroteros” que disolvieron la manifestación cuando recién sonaba la campanilla dando por inaugurada la sesión. A pesar de este “bautismo policial” como lo califica Segall, la Unión Socialista logró asentarse en Santiago y surgieron también algunas uniones en provincias.

Siguiendo el testimonio de Escobar Carvallo, él y su grupo de amigos (Olea y Espinoza) tomaron contacto luego con Ingenieros y otros socialistas argentinos. Estos los proveyeron de abundante material escrito y de consejos prácticos para extender el movimiento y difundir las ideas socialistas.

Porque al principio, los “socialistas chilenos” eran un grupo reducido de obreros y juventud estudiosa, proveniente de la baja clase media:

“tratábamos de instruir –dice Escobar– política y socialmente a la masa trabajadora, enseñándole a organizar los gremios y a practicar el cooperativismo en la producción y el consumo...”[16].

Pronto, el trabajo práctico, las lecturas y el debate fueron orientando al grupo de Escobar hacia el “socialismo libertario”. Y aquí fue que se planteó la opción de que “el socialismo no podía ser un partido”.

En efecto, entre todas las lecturas que hizo el grupo la que más les impresionó fue “la conquista del pan” de Kropotkine y como dice Escobar:

“De nuestras largas conversaciones, los tres amigos llegamos a la conclusión lógica de que el socialismo no era ni podía ser un partido, de modo semejante a como la Iglesia no es tampoco la religión. En efecto, en uno y en otro caso, la vida no se deja aprisionar por el estrecho cauce de las “canalizaciones” ideadas por la pequeñez del espíritu para arrebañar a los individuos. Comprendimos la necesidad de agrupar a los hombres para instruirlos y asociarlos en la persecución de un ideal común; pero todo ello en conjunto, solo como un movimiento de masas orientado hacia el camino infinito de la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad”[17].

Ello los llevó por cierto a centrar todas sus energías en la organización de “uniones obreras” y “sociedades de resistencia”. El grupo creció y orientó estratégicamente su trabajo hacia los obreros ferroviarios. Allí tomaron contacto con Marcos Yáñez, Esteban Caviedes, Clodomiro Maturana y Luis Morales. Juntos editaron quincenalmente La Luz destinado especialmente hacia este gremio.

Esteban Caviedes, nos informa Segall, formó la primera Sociedad de Resistencia en el país entre los trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles. Luis Morales se destacó luego en Arauco. Carlos Pezoa, también del mismo grupo escribió más tarde, luego de la masacre de Santa María, su Canto a la pampa. De Magno, sabemos que se trasladó pronto a Valparaíso y Olea con Escobar emigraron también después al norte.

La opción que negó que el socialismo fuera un partido devino entonces mayoritariamente en anarcosindicalista. Ello los fue alejando del maestro argentino José Ingenieros. El grupo, sin embargo, no estaba en condiciones de polemizar con éste:

“Nosotros no podíamos discutir con nuestro maestro y guía. Resolvimos con

Olea, quedarnos callados y seguir adelante. Estimábamos entonces a través de la extensa literatura sociológica absorbida, que el llamado socialismo científico de Europa y América se diluía demasiado en el mar de la política, siendo necesario plantearlo en el terreno firme de la lucha económica y gremial”[18].

La falta de “teoría” que llevó al grupo a no polemizar con Ingenieros no fue obstáculo, como ya sabemos, para que la opción de socialismo “sin partido” fuera la opción históricamente más activa en los principios del siglo, favorecida como se vio con el alza de las luchas populares con el ciclo 1903-1907 e incluso más allá, bajo la forma anarco-sindicalista que jugó roles protagónicos en el movimiento obrero hasta la dictadura de Ibáñez, hacia fines de los años veinte.

Se puede criticar el uso inadecuado de la violencia y la eficacia no siempre probada de la “acción directa”. Las lecciones de Valparaíso el año 1903 o Santiago en 1905 son por cierto discutibles. Pero ello no faculta a decir que esta opción que diera lugar “a uniones sin doctrina, ni jefes doctrinarios” o que confió “en la violencia de clase, en la aventura rebelde y en los estallidos generosos del proletariado” derivara en un “socialismo inmaduro”, en “apoliticismo” y “anarquía”[19].

La opción de socialismo sin partido más bien contribuyó, a nuestro juicio, significativamente al desarrollo del movimiento popular chileno en los principios de siglo. Tuvo, sin embargo, un límite en su desarrollo: el movimiento popular requería un mayor grado de teorización y sistematización de su proyecto histórico y ello suponía un movimiento social protagónico del cambio pero al mismo tiempo partidos y diversas instancias capaces de proyectar al movimiento, sin desvincularse de él.

Los desgajamientos del partido demócrata obedecían, en términos generales a una forma “práctica de crítica al partido”. No hay peor crítica que el acto militante de abandonar el partido.

El Partido Demócrata, en efecto, hacia 1900 había entrado en el juego parlamentaria, la audacia y el oportunismo que caracterizaban a su principal líder: don Malaquíás Concha.

Ello estimuló el surgimiento de corrientes internas que buscaban “socializar” su política, es decir, dotarla de contenido social efectivo. Ángel Guarello, diputado por Valparaíso, fue uno de los líderes de esta tendencia que se denominó “doctrinaria”, en oposición a la vieja guardia del partido, encabezada por don Malaquíás, que pasó a denominarse “reglamentaria”.

El partido prácticamente se dividió en la Convención de Chillán en 1901 en las facciones ya señaladas. Sin embargo, se reunificó pronto en una nueva Convención en 1904. Se impuso, con todo, el grupo “reglamentario” y Malaquíás Concha ocupó nuevamente la presidencia del partido.

Los doctrinarios buscaron reagruparse. Recabarren formaba parte de esta corriente y en 1905 se reunió, junto a Lindorfo Alarcón, redactor de El Proletario de Tocopilla, y con Alejandro Escobar. Este último concordó con Recabarren en socializar la política del partido demócrata e ingresó a este partido. Y, en 1908 cuando ganó puntos la fracción de Guarello, Escobar fundaría una escuela socialista al interior del Partido Demócrata, de donde surgirían otros destacados líderes sociales y políticos, como Carlos Alberto Martínez y Manuel Hidalgo, entre otros. Escobar, como se ve, volvió por sus fueros, a la tienda-madre: el Partido Demócrata.

El cambio de siglo sorprendió a Recabarren a la edad de 24 años. A los 25 era redactor y jefe del diario La Democracia en Santiago, pero regresó pronto a Valparaíso, su ciudad natal. Allí se desempeñó como tipógrafo en la imprenta de los Salesianos y al mismo tiempo como periodista popular y demócrata de avanzada. En 1903, cuando se realiza en esta ciudad una convención del

Congreso Social Obrero, Gregorio Trincado, presidente de la Mancomunal de Tocopilla, lo invita a trasladarse hasta esta ciudad para hacerse cargo del periódico de la Mancomunal. Allí lo vemos de 1903 a 1905 como director de El Trabajo de Tocopilla.

Pero en 1904 Recabarren es procesado como subversivo junto a otros dirigentes de la Mancomunal y enviado a la cárcel. La Convención Mancomunal protesta cuando se reúne en Valparaíso, en mayo de ese año y exige su libertad. Los anarquistas proponen liberarlo por la fuerza, lo que Recabarren rechaza.

Su nombre ya es conocido. A los 27 años era ya un destacado y aclamado dirigente obrero. Candidato a diputado en 1906 por el Partido Demócrata, triunfa por Antofagasta, pero no puede asumir su cargo como producto de una maniobra del Congreso. Sin “fuero” parlamentario la “justicia” se le vino encima: tenía condena y debía permanecer en presidio por 541 días.

Recabarren abandonó entonces el país tomando contacto con los socialistas argentinos y montevidianos. Visitó también Europa, relacionándose también allí con grupos y dirigentes socialistas. No regresó hasta 1908 y a pesar de intentar escabullir la condena que pesaba sobre él, terminó en la cárcel ese mismo año.

Liberado de la cárcel, vuelve Recabarren sobre su antigua tienda: el Partido Demócrata. Allí el juego de posiciones era ahora más complejo, puesto que mientras Escobar se aliaba con Guarello, Torrealba daba lugar a una nueva corriente –más vinculada al mutualismo y que buscaba ser equidistante de Malaquías Concha y Ángel Guarello.

Los conflictos internos en el Partido Demócrata además, tendían a agudizarse cuando se trataba de designar los candidatos parlamentarios. Y todos participaban de las negociaciones y fraccionamientos, Recabarren incluido, que

no siempre revelaban grandes diferencias doctrinarias.

La situación en el Partido Demócrata se hizo entonces más crítica hacia 1911. Escobar por una parte apoyaría la fundación de un Partido Socialista, escindido del Demócrata, y Recabarren, más tarde daría origen, en Antofagasta al Partido Obrero Socialista.

Cuando se produjo la escisión, Recabarren y su grupo—Lafferte entre ellos— criticaron al Partido Demócrata por haberse “unido a los partidos de la clase capitalista, enemigos del progreso de los trabajadores”, por sus “pactos electorales” por su débil acción organizativa entre los trabajadores, por los poderes excesivos de la dirección y afirmaron al mismo tiempo que:

“... la doctrina socialista, más completa que la democrática, realiza de verdad la redención de los oprimidos. La doctrina democrática significa solo hacer el gobierno de la nación en conformidad a las ideas políticas de la mayoría de los ciudadanos. La doctrina socialista significa el perfeccionamiento de las costumbres políticas y la modificación de las costumbres económicas en forma de proporcionar a todos los medios de vivir dichosos”[20].

De este modo, en la primera década del siglo, la política popular sería protagonizada por la propia acción de las diversas organizaciones populares, que como hemos visto se politizaron fuertemente en estos años y por las corrientes políticas que se expresaron tanto en el anarco-sindicalismo, en el Partido Demócrata y en la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912.

Y la “política popular” enfrentaría pronto problemas mayores, particularmente hacia los años veinte, cuando un nuevo ciclo de huelgas y protestas populares conmovieron desde sus cimientos a la sociedad chilena. Con grupos políticos más organizados y con un movimiento social que había hecho ya un largo

camino de organización y movilización social, se plantearon decididamente los proyectos mayores: transformar la sociedad desde los propios movimientos sociales populares. Ello ciertamente requiere de un esfuerzo de investigación e interpretación histórica que trasciende los objetivos que nos propusimos para el presente trabajo.

[1] De Shazo, ob. cit., pág. 158.

[2] Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobladores de la ciudad. Sur, Santiago, 1988, págs. 47 y ss.

[3] Citado por A. Illanes, en ob. cit., págs. 26 y ss

[4] Garcés, Mario y Milos, Pedro. FOCH. CTCH, CUT. Las Centrales Unitarias en la historia del sindicalismo chileno. Edic. ECO, Santiago, 1988.

[5] González V., José. Cuando era muchacho. 4a. edición, Nacimiento. Santiago, 1969, pág. 138.

[6] González, ob. cit., pág. 158.

[7] González, ob. cit., pags. 156 y ss.

[8] El Marítimo. Antofagasta, 2 de septiembre de 1905.

[9] El Marítimo. Antofagasta, 7 de septiembre de 1905.

[10] El Trabajo, Iquique, 16 de enero de 1904.

[11] Cruzat, Ximena. El movimiento mancomunal en el Norte salitrero: 1901-1903. Clacso, Santiago. 1989, págs. 23 y ss.

[12] Cruzat, ob. cit., pág. 27.

[13] El Trabajo, Iquique, 4 de junio de 1904.

[14] Devés, Eduardo. El movimiento mancomunal en el Norte salitrero. 1901-1907. Tomo II. Clacso, Santiago, 1989, pág. 197.

[15] Segall, ob. cit., pág. 301.

[16] Escobar, Revista de Occidente No 120, pág. 10.

[17] Ibidem.

[18] Escobar, ob. cit, pág. 13

[19] Segall, ob. cit, pág. 307.

[20] Barría, Jorge. Historia del movimiento obrero en Chile. Edic. Universidad Técnica del Estado. Santiago, 1971, pág. 44.